**3- El peronismo. Del Golpe de Estado de 1943 al derrocamiento de Perón, 1943-1955**

La Política

1943-1946

 Los generales Rawson, Ramírez y Farrell, aprovechando la apatía y el descontento de la ciudadanía, así como el desprestigio del gobierno de Castillo, protagonizaron en junio de 1943 el segundo golpe de Estado de la historia argentina. El golpe fue encabezado por Rawson, quién no llegó a jurar al ser desplazado por Ramírez quien tuvo un corto gobierno entre 1943 y 1944, estuvo signado por un nacionalismo católico de derecha y una visión autoritaria de la sociedad. Se disolvieron los partidos políticos, se implementó la enseñanza religiosa en las escuelas y se intervino la Universidad. La oposición equiparó al gobierno con el fascismo, que se arraigaba ante la persistente y militante neutralidad gubernamental frente a la guerra. Los Estados Unidos consideraron esta posición como una tácita adhesión al eje Berlín-Roma-Tokio. Las presiones norteamericanas dieron sus frutos y Ramírez renunció. Farrell, quien finalmente asumió el gobierno entre 1944 y 1946 era neutralista, pero debió avanzar en el camino contrario a sus convicciones. Presionado por EE. UU. debe declarar la guerra a Alemania como condición imprescindible para ingresar en las Naciones Unidas.

Durante el gobierno de Farrell se produjo el ascenso de Juan Domingo Perón a las instancias más altas del poder. Perón era uno de los ideólogos del G.O.U., una logia militar que tuvo gran influencia en el golpe del ´43. La sigla fue interpretada de distintas formas: “Grupo de Oficiales Unidos”, “Grupo Obra de Unificación”, “Grupo Organizador y Unificador”. Lo cierto es que, en poco tiempo, Perón desarrolló una rápida carrera política. En junio de 1943 es nombrado jefe de la Secretaría del Ministerio de Guerra, un cargo modesto pero influyente dentro de la estructura militar. Meses después, es puesto al frente del Departamento Nacional de Trabajo, que rápidamente se convirtió en la Secretaría de Trabajo y Previsión: con esto empezó realmente su ascenso, que lo llevó a la presidencia de la Nación en 1946. Desde la Secretaría, Perón le dio un fuerte impulso al moderno Estado interventor que se convirtió en árbitro de las relaciones entre obreros y patronales. Desde allí desarrolló una dinámica político social, área donde había mucho para construir. Se rodeó de algunos oficiales amigos y convocó a los dirigentes sindicales no comunistas para colaborar. Una buena parte de ellos participó activamente de la nueva política laboral. El impulso de esta amplia cantidad de medidas sociales se tradujo en sustanciales mejoras para los trabajadores: indemnización por accidentes laborales, un sistema de vacaciones pagas, jubilaciones y pensiones son solo algunas de las medidas implementadas, como la sanción del Estatuto del Peón para regular las relaciones laborales entre los propietarios y trabajadores rurales. Esta política de seguridad social requería del apoyo de militares y empresarios. El pleno empleo y los altos salarios eran condiciones indispensables para llevar adelante una política de este tipo. Una parte del Ejército veía con simpatía el trabajo de Perón, aunque varios sectores lo veían con desagrado. Muchos empresarios, aunque colaboraron activamente, no se mostraban muy conformes con sus políticas, debido a la creciente identificación de los trabajadores con Perón. Las cámaras de Industria y Comercio emitieron un manifiesto que atacaba duramente la política social. Algunos partidos (socialistas, radicales, comunistas, demócratas progresistas y algunos conservadores) exigían la entrega del gobierno de facto a la Corte Suprema. Estos partidos plasmaron su unidad en la Unión Democrática que realizará una importante manifestación opositora en septiembre de 1945, la marcha por la Libertad y la Constitución. Así, entre la presión política y los desencuentros militares, el 8 de octubre Perón renunció. Los sectores opuestos lograron un triunfo provisorio cuando impusieron su renuncia a los cargos que ocupaba y también su detención. El 15 de octubre, la Federación Obrera declara en Tucumán una huelga general, lo mismo hacen varios sindicatos en Rosario, exigiendo la libertad de Perón. Los obreros de la carne de Berisso se movilizan, lo mismo que en Valentín Alsina, Lanús, Avellaneda y otros lugares del sur del Gran Buenos Aires. En la noche del miércoles 16 de octubre, se reúne el Comité de la Confederación General del Trabajo y se declara una huelga general para el 18. El motivo del paro se expresaba en una serie de puntos que incluía el llamado a elecciones y el mantenimiento de las conquistas obreras, pero no mencionaban a Perón. La declaración sirvió como impulsor para que varios sindicatos y los trabajadores se sintieran avalados para emprender acciones. Perón, alegando problemas de salud, consiguió que lo trasladen al Hospital Militar en Palermo, donde llegaría en la madrugada del 17. En esa madrugada del día 17, comenzó una movilización de los trabajadores de La Boca, Barracas, Parque Patricios y otros barrios populares y zonas industriales de los alrededores del Gran Buenos Aires. Fue muy importante el número de trabajadores que salieron de Berisso, donde había importantes frigoríficos. Los obreros no ingresaban a trabajar en las fábricas y talleres e iban recorriendo los establecimientos incitando a abandonarlos para luego marchar hacia el centro de la Capital Federal. La acción estaba poco coordinada por dirigentes gremiales y la fuerza principal de impulso provenía de esas mismas columnas que mientras marchaban, retroalimentaban el movimiento. Inicialmente se levantaron los puentes sobre el Riachuelo, paso obligado hacia la Capital para quienes provenían de la zona sur, muchos cruzaron a nado o en balsa hasta que, más tarde, los puentes fueron bajados. La policía no obstaculizó la marcha. El gobierno no actuó, se negaron a movilizar a las tropas desde Campo de Mayo, pensaron que la manifestación se disolvería por sí sola, pero al comprobar que era cada vez más numerosa, se entrevistaron con Perón en el Hospital Militar y pactaron las condiciones: Perón hablaría a los manifestantes para tranquilizarlos y para que se retiren y no haría referencia a su detención. A partir de esa fecha, se abre una nueva etapa política, con nuevos actores sociales. Desde entonces, el movimiento obrero intervendrá permanentemente en el proceso político nacional.

1946-1955

Luego de un corto descanso y de casarse con Eva Duarte el 23 de octubre, Perón comienza su campaña política. El sector de la Unión Cívica Radical que lo apoyaba formó la UCR Junta Renovadora, a la cual se sumaron el Partido Laborista y el Partido Independiente, en tanto que FORJA se disolvió para sumarse al movimiento peronista. Domingo Mercante es designado al frente de la Secretaría de Trabajo que, junto a muchos sindicatos, fue de gran apoyo para su campaña. La oposición estaba formada por una parte del partido radical, socialista, comunista, demócrata progresista y conservador, la Federación Universitaria Argentina (FUA), la Sociedad Rural (SRA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio y los sindicatos opositores. Todos ellos armaron la Unión Democrática, que apoyaría en los comicios a la fórmula presidencial designada por la Unión Cívica Radical. El 26 de febrero de 1946 la coalición peronista triunfó con el 52.8% de los votos contra el 42.9% de la Unión Democrática. La diferencia no era abismal, aunque la brecha entre los sectores opositores y el peronismo se ampliaría durante el decenio que duró su gobierno. Juan Domingo Perón gobernó durante dos períodos presidenciales consecutivos, lo cual fue posible gracias a la reforma constitucional de 1949.

La novedad en este momento inicial del peronismo fue la conformación del Partido Laborista. En su declaración de principios apoya a las ideas de democratización política y económica, a la participación obrera en las ganancias, la extensión del sistema jubilatorio a todos los trabajadores y la nacionalización de los servicios públicos y de los recursos minerales. El Partido Laborista fue una herramienta importante en la movilización obrera y en la canalización del apoyo a Perón, pero su existencia fue breve, poco después de las elecciones del 46 fue disuelto por orden del presidente. Una vez elegido por la mayoría del electorado masculino, Perón designa un gabinete que refleja a los sectores que lo habían apoyado: pequeños industriales, sindicalistas, miembros de las Fuerzas Armadas, radicales renovadores entre otros. Desde el punto de vista político, Perón quería colocar al Estado por encima de los diversos factores sociales de poder y transformarlo en un mediador. Así es que se perfeccionan en este período las estructuras de dominación burocrática estatal y se resuelven algunos de los problemas económicos y sociales que se venían arrastrando. El Estado fomenta la organización de sectores socioeconómicos que no contaban aún con organismos encargados de defender sus intereses. A partir de la aplicación de una política redistributiva, los salarios se incrementaron y se aplicó una política social que completó la protección al trabajador en caso de enfermedad, accidente, embarazo o despido. Se mejoró en forma permanente la asistencia a la ancianidad, se crearon organismos asistenciales y culturales destinados a los estratos más bajos y se multiplicaron los centros de esparcimiento y descanso, así como el número de sindicatos. Las instituciones y grupos sociales opositores fueron desplazados, el gobierno limitó las competencias del Congreso, privó a la Justicia de su autonomía y trató de reducir en toda forma su influencia, haciéndose cargo de casi todas las radioemisoras y periódicos y estableciendo un estricto control sobre las universidades. Junto con la presencia del Líder, creció la importancia y la influencia de Eva Duarte de Perón, quien desempeñó un rol fundamental durante esa primera presidencia de Perón. Desde 1947, el diario Democracia se convirtió en un órgano de propaganda casi personal. Un área importante de su acción fue el trabajo articulado alrededor de la asistencia social. Se creó la Fundación Eva Perón, cuyos fondos se integraban con la ayuda estatal y las contribuciones de la CGT y desde donde se impulsaba la construcción de hospitales, se subsidiaban medicamentos para los sectores más pobres y se organizaba la ayuda en alimentos, vestidos, y otros elementos de primera necesidad. También en 1947, se produjo un acontecimiento fundamental en el plano del reconocimiento de los derechos políticos: se sanciona la Ley 13.100 de Voto Femenino, por la cual se le reconocen a las mujeres argentinas los mismos derechos políticos que a los varones. La movilización política de las mujeres dio sus frutos en las elecciones del 51, cuando el Partido Peronista obtuvo el 63,9% de los votos femeninos. Las mujeres cubrieron los cargos en las mesas receptoras de votos, fueron presidentas de mesa, autoridades y fiscales. Otro aspecto fundamental de esta etapa fueron las reformas a la Constitución Nacional en 1949 y luego en 1953. El Preámbulo de la Constitución del ´49 incluye el lema del movimiento político del gobierno: el establecimiento de una "nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana". Se incorpora el Decálogo del Trabajador, que establece la plena vigencia de los derechos fundamentales e incluye la declaración de la propiedad inalienable de la Nación sobre los recursos naturales, la nacionalización de los servicios públicos y la regulación del comercio externo. Se reconoce la propiedad privada como un derecho natural pero limitado por su función social, reconocimiento que implicaba que el Estado podía expropiar negocios y tierras para asegurar el uso productivo y beneficiar a la comunidad.

Las reformas del ´53 fueron muchas, pero uno de los cambios fundamentales tiene que ver con el establecimiento de la elección directa del presidente de la Nación, suprimiéndose los colegios electorales y la posibilidad de la reelección presidencial inmediata. Con la desaparición de la prosperidad y con el agotamiento de las reservas acumuladas durante la guerra, el gobierno se vio obligado a limitar la actividad económica estatal y a suprimir parte de las subvenciones que se otorgaban. Las elecciones nacionales de 1951 cambiaron el mapa electoral del país como consecuencia de las novedades introducidas por el gobierno. Por una parte, el padrón electoral se incrementó con la incorporación de las mujeres a la ciudadanía y la geografía electoral se amplió con la provincialización de los antiguos territorios de Chaco, Formosa, Misiones, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. El peronismo ganó en todas las provincias.

En 1952, Perón asume la segunda presidencia. El nuevo período presidencial comenzaba también con la muerte de Eva Perón, ocurrida en julio de 1952. Para muchos, con ella desaparecía la figura que mejor encarnaba al peronismo y con su muerte entraría definitivamente en la mitología política argentina. Las dificultades económicas derivadas de las tendencias de los precios internacionales y del comportamiento del sector agropecuario obligaron al gobierno a una mayor cautela frente a las exigencias de los diversos sectores. Las demandas y las acciones de la oposición fueron acompañadas de una mayor represión, que incluía el incendio de sedes partidarias como la detención de varios opositores. Durante los 10 años que gobernó el Partido Peronista, la discusión con la oposición se articuló alrededor de la antinomia "libertades públicas” por un lado y “justicia social" por otro. Esa antinomia se expresaba a través de realizaciones sociales que el gobierno llevaba adelante, junto con una política autoritaria. Las relaciones entre el gobierno y la oposición fueron tensas durante todo el período. De alguna manera, todos los partidos políticos se vieron afectados por el proceso que se inició con la llegada de Perón al poder, la Unión Cívica Radical fue el principal partido opositor. Con Perón en el gobierno, un grupo parlamentario radical intransigente orientó la política del partido, al mando de Ricardo Balbín y Arturo Frondizi. Las relaciones entre el gobierno de Perón y la Iglesia también fueron conflictivas. Si bien es cierto que inicialmente rigió una ley que establecía la enseñanza religiosa en las escuelas y que buena parte de la acción social del gobierno se hacía bajo el signo del catolicismo, pronto se harían visibles las divergencias. Las tensiones con la Iglesia reconocían orígenes diversos. La creciente politización del aparato asistencial estaba en la raíz de las controversias, tanto como las reformas que apoyaban el establecimiento del divorcio, la equiparación de hijos legítimos e ilegítimos, la legalización de los prostíbulos, la eliminación de las subvenciones a la enseñanza confesional. Al final de este período, van a darse algunos conflictos que pondrán en escena muchos de los problemas. La concentración multitudinaria el día de Corpus Christi en junio del ´55 fue una manifestación de la oposición frente a la Catedral, que fue apedreada días después por grupos peronistas. El 16 de junio, la marina de guerra, apoyada por aviones de la fuerza aérea bombardea la Casa Rosada con la intención de matar al presidente, que ya no se encontraba allí sino en el Ministerio de Guerra, detrás de la Casa de Gobierno. El bombardeo sobre la Plaza de Mayo deja un saldo de 300 muertos y más de 1000 heridos. Esa misma tarde, grupos peronistas incendian la Curia Metropolitana y varios templos e iglesias del centro de la ciudad. Los vínculos del gobierno con las Fuerzas Armadas tampoco eran fáciles. Ya en 1951 habían comenzado los levantamientos que sirvieron para depurar mandos militares de opositores y sospechosos. La evolución de las tensiones entre el gobierno y la oposición abría brechas crecientes entre Perón y las Fuerzas Armadas. El levantamiento del ´55 había fracasado. Pero en septiembre, un nuevo alzamiento en Córdoba, encabezado por el general Lonardi, no pudo ser sofocado. El 19 de septiembre Perón renuncia a la presidencia. Al día siguiente se refugia en la embajada de Paraguay iniciando un prolongado exilio. Las resistencias al golpe fueron violentamente reprimidas y el general Lonardi asume el mando presidencial, iniciándose así una nueva etapa en la Argentina.

La Economía

La 2°GM (1939-1945) permitió avanzar sobre la sustitución de importaciones provocando una elevación de los salarios, ampliando el mercado interno. La gran cantidad de reservas acumuladas durante la guerra se pudo utilizar para la cancelación de la deuda externa y la nacionalización de los servicios públicos. Perón creía que sin los ferrocarriles su plan económico podría resultar menos que impracticable ya que este era importante para la unificación y la expansión del mercado interno. La explotación de los servicios públicos pasó a manos del Estado. El Estado pasó a controlar diversas empresas. El Estado se fue apropiando de crecientes recursos, junto con el control de las importaciones para anular la competencia extranjera, implementando una política proteccionista. El Peronismo logro diversificar la producción nacional, ampliar el capital básico del país, un desarrollo interno importante, reducir el capital extranjero y distribuir la renta nacional. El gobierno buscaba, además, reducir las relaciones con EE. UU.

El peronismo se caracterizó por la importancia asignada a la participación del Estado en la dirección y regulación de la economía. Se podría afirmar que la intervención estatal adquirió proporciones no conocidas hasta entonces. Se impulsó una industrialización basada en el incremento de la demanda de bienes de consumo masivo dentro del mercado interno, la cual era generada a través del aumento del salario real. El modelo requería medidas redistributivas del ingreso que impulsaran la demanda interna y la ocupación industrial. El principal mecanismo para lograr este objetivo fue la reasignación de recursos para la producción a través de la acción estatal. Los planes quinquenales expresaron el interés del gobierno por industrializar el país:

El primero, de 1946, tenía proyectos sobre salud pública, inmigración y capacidad de transporte, previsiones sobre industrialización y su costo iba a ser cubierto mediante préstamos. El principal instrumento para materializar la política y regular el comercio exterior fue el Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio (IAPI): El IAPI en la 1er presidencia de perón financio la venta de productos argentinos a países europeos que, como España, Francia, Italia u Holanda, no tenían por entonces liquidez para comprar. También importo arpillera, cemento, caucho, madera, maquinarias y material de transporte. Subsidio precios de artículos de consumo masivo, participo en la adquisición de los ferrocarriles de propiedad británica y francesa, otorgó créditos a las empresas públicas a los ministerios para apoyar las inversiones previstas en el primer plan quinquenal. Pero su función más relevante fue la centralización del comercio exterior. Su intervención permitió acortar el vínculo hasta entonces automático entre los precios internacionales y los nacionales de los bienes agropecuarios. El IAPI pago a los productores rurales una cotización algo así como un 50% menor que la que percibía sus ventas al mercado mundial. Mientras los campos desbastados de Europa no recuperaran su capacidad productiva los precios de los productos agropecuarios que la argentina exportaba se mantendrían en un nivel muy alto, de modo que el mecanismo de transferencia de ingresos del campo a la ciudad que el IAPI ponía en práctica conservaría su viabilidad sin llevar a los productores rurales a su quiebra. La agricultura sufrió también el deterioro del sistema de transporte y la falta de almacenamiento adecuado. La reorientación de los ingresos de la agricultura a la industria tuvo como consecuencia una disminución del área sembrada, desalentada por la imposición de los precios fijos para las cosechas. Llegada la 2da presidencia el IAPI se limitó debido a la crisis del sector industrial, a su función primordial: la comercialización de las cosechas. A partir de 1949 el gobierno se adaptó a los nuevos términos de intercambio exterior, menos beneficiosos para el país y comenzó a comprar las cosechas a los productores a precios más altos que los que percibía por su venta en los mercados internacionales. El mandato del momento era garantizar cotizaciones remunerativas al campo, aunque ahora ello implicaría pérdidas para el IAPI. Al IAPI pro-agrario y la política crediticia pro-agraria debía sumarse una última herramienta. Había que ofrecerle al campo los insumos y los bienes de capital necesarios para incrementar su productividad y por lo tanto su volumen de producción. El IAPI obtuvo buenos beneficios en sus primeros años, cuando los precios internacionales fueron altos entre 1946 y 1948, y entró en crisis en 1949. La intensa expansión del producto y del gasto durante este tiempo había sido fomentada desde el gobierno. En 1949 se produjo un debilitamiento económico por la balanza comercial y la inflación. Esta caída puede ser vista como la vuelta a una normalidad de términos de intercambio, a lo que se sumaron las consecuencias de una política exterior orgullosa, el Plan Marshall ya que EE. UU. le ofreció préstamos a Europa y como contraprestación EE. UU. ponía negocios y fábricas en Europa y este solo le debía comprar productos a EE. UU., entonces Europa dejo de comprarnos a nosotros, lo que causo el desgaste del modelo industrial. (En 1949 re reformo la constitución en la cual se incluían los derechos a los trabajadores, a la reelección de la presidencia. Los socialistas se pusieron en contra porque no incluyo el derecho a huelga y la iglesia también se puso en contra porque se aprobó la ley de divorcio y se suspendieron los aportes a la enseñanza religiosa.). No llego a haber un desarrollo de industria pesada y no llegaban capitales extranjeros, no había créditos internacionales. La campaña agropecuaria de 1949-1950 fue bastante mala, además la oligarquía terrateniente, que se oponía a Perón, redujo sus exportaciones para boicotear al gobierno y su proyecto de industrialización nacional. Es por esta dependencia que tenía la industrialización hacia el mercado agrícola-ganadero que la oligarquía terrateniente mantuvo intacto su poder. Esto genero una crisis y una lucha entre la BURGUESIA NACIONAL y la CLASE OBRERA, los costos aumentaron demasiado y los empresarios exigían bajar los salarios. El bajo nivel de exportación redujo las divisas disponibles y obligó a comprimir las importaciones, que eran la base de la producción industrial local. Los controles que el gobierno impuso perjudicaron a la industria. El aumento de la inflación fue acompañado por un ajuste en los tipos de cambio. Pero más allá de una tímida desaceleración de la creación de dinero, no hubo signo de una firme voluntad estabilizadora. Para algunos peronistas la inflación era un mal necesario. Pero en 1951, el panorama volvió a empeorar. La inflación superó a la tasa de aumento salarial. La reaparición de las huelgas contribuyó a difundir la sensación de que una era de rápido progreso popular estaba concluyendo.

El Segundo Plan Quinquenal el cual duro entre (1949-1952), obligadamente se tenía que subir el precio de las exportaciones, había que ofrecerle al campo insumos y bienes de capital para que puedan salir de la crisis. Así como no podían recurrir a la devaluación para devolver rentabilidad, tampoco podía estabilizar la economía con instrumentos que debilitaran la calidad de vida popular. Por un lado, hubo préstamos del FMI (medida muy criticada). Perón realizo un acuerdo con capitales extranjeros para que ellos explotaran el petróleo en nuestro país. Pero el acuerdo no fue aprobado en el congreso. Se asociaron YPF y Standard Oíl que pronto sucumbió ante el encendido nacionalismo del primer peronismo. El foco de atención ahora estaba en la industria pesada (la industria siderúrgica, la petrolera y la maquinaria). Para bajar la inflación se redujo el desequilibro fiscal, hubo nuevos impuestos sobre los salarios para financiar la seguridad social y se realizó un plan de emergencia para que el país economice en todos los sentidos posibles. Los salarios y los precios se congelaron por el tiempo de 2 años y se impulsaba a los trabajadores a aumentar la productividad. El ahorro interno termino incrementándose. También se realizó un congreso nacional de productividad en el cual sindicatos y empresarios discutían acerca de los problemas reales, pero esto no tuvo suficiente éxito.

Durante los 10 años en que gobernó Perón, la industria se desarrolló rápidamente. El aumento del mercado interno por la imposibilidad de importar mercaderías del extranjero, así como las políticas proteccionistas del gobierno, jugaron a favor. La composición de la producción industrial se modificó de 1946 a 1952. La industria de alimentos y bebidas declinó, creció la textil y la metalúrgica. Este crecimiento industrial fue acompañado de una redistribución del poder en las empresas, cuya base estaba en la capacidad de negociación de los sindicatos y las comisiones de fábrica. La industria recibió, además, créditos del Banco Industrial y protección aduanera, divisas adquiridas a tipos preferenciales para equipamiento, así como para la expansión del consumo. En este período el sector industrial cumplió un rol significativo en la creación del empleo urbano mediante la absorción de los trabajadores provenientes del sector agropecuario. Se manifestó también un fenómeno que se acentuaría en el futuro: la rápida expansión en el área de la construcción y del sector terciario como mecanismo fundamental de creación de empleo en las áreas urbanas. Durante todo el período también crecieron las empresas estatales entre las que se encontraban aquellas compradas por el Estado y otras creadas con un fin determinado. La compra de ferrocarriles, teléfonos, puertos y otras empresas de servicios no estaba definida previamente en el programa del peronismo y hubo mucho de improvisación, lo que se hizo visible cuando se plantearon problemas operativos.

Durante toda la etapa peronista las modificaciones económicas no alteraron sustancialmente las desigualdades entre las diversas regiones del país, quedando en evidencia paradojas en regiones cuya economía generó riquezas que no se tradujeron en beneficios perdurables para la zona. La razón para esto es que los beneficios no se reinvertían, o porque los excedentes de las empresas quedaban en las casas matrices o porque sus propietarios trasladaban inversiones y consumos a otros lugares. Las dificultades de la estructuración económica se hicieron visibles en muchas provincias, donde la población no encontraba oportunidades de empleo.

Las relaciones del gobierno argentino con los Estados Unidos siguieron siendo conflictivas durante toda la etapa El boicot norteamericano establecía la prohibición de vender materiales estratégicos, afectando el desenvolvimiento nacional. La política de los Estados Unidos obligó al país a producir en las peores condiciones, pues faltaban insumos básicos, equipos modernos y energía.

La Sociedad

 La población del país, de acuerdo con el Censo Nacional de 1947, tenía 15.893.827 habitantes. El aumento de la población denota una desaceleración ya marcada en los años 30. Esto se debió tanto a la estabilidad de la tasa de natalidad como al escaso aporte de la inmigración ultramarina más el descenso leve de la tasa de mortalidad. Las migraciones internacionales europeas disminuyeron notablemente, aunque después de la Segunda Guerra Mundial se reactivaron. Paralelamente, se verificó un aumento de población proveniente de los países limítrofes: bolivianos y paraguayos en el norte argentino y chilenos en el sur patagónico. Esta población se radicó inicialmente en las provincias vecinas a sus países de origen, pero luego, y por circunstancias similares a los nativos, se fueron trasladando hacia el Gran Buenos Aires y otros centros urbanos.

Durante esta etapa, los niveles de vida de los obreros mejoraron debido al aumento de los salarios reales y a la estructura de precios que estimuló el consumo. La intervención estatal, a través de las medidas de control del precio de los alquileres y alimentos, fue la causa principal de las mejoras. A partir de 1946, se difundió un modelo de organización sindical cuyas raíces fueron introducidas en el período anterior. Los sindicatos se habían organizado en varias ramas industriales (vestido, carne, construcción) durante la década del 30 y no constituían una novedad. Sin embargo, nuevos elementos aparecieron en este período y tuvieron que ver con el rol del Estado que dio apoyo político y legal a la organización sindical. Su intervención fue decisiva en la implementación del sindicato único por actividad, lo cual garantizaba el monopolio de la representación a un solo sindicato por sector, bloqueando de esta manera la formación de sindicatos rivales y con ello la competencia entre las organizaciones. El alto grado de centralización fue anulando la autonomía de las secciones locales. La intervención de las organizaciones obreras fue una práctica corriente, pues se buscaba colocarlas en el marco de las políticas gubernamentales. Las funciones de control no estaban ejercidas directamente por el Estado sino por la central obrera (CGT) y por las organizaciones intermedias que actuaron como agentes del Estado. La constitución de la Confederación General del Trabajo como la única organización representativa de los trabajadores implicó también un proceso complejo pues, si bien se había logrado la unificación del movimiento obrero, el proceso convergió en una creciente pérdida de autonomía de los sindicatos. El rol de la CGT fue cambiando durante la etapa peronista, de coordinación de las políticas de sus miembros a las de mediación entre los sindicatos y el Estado para, finalmente, ejecutar las políticas gubernamentales en el movimiento sindical. En materia de educación, el peronismo aspiraba a una mayor centralización. De este modo, fueron mayores los esfuerzos que se realizaron para vincular los valores peronistas con los valores de la religión y con el nacionalismo, al tiempo que comenzaron a formularse políticas abiertas de adoctrinamiento para maestros y alumnos. Estos cambios constituían un intento de desplazar al catolicismo como religión de Estado y monopolizar el espacio simbólico y social, situación que favoreció el estallido del conflicto con la Iglesia Católica y otros sectores opuestos al movimiento. También tuvieron particular interés en privilegiar la educación técnica. No solo porque fue considerada bastión principal en un contexto de industrialización ya que aportaría mano de obra calificada que se iba a necesitar sino también porque se comprendía que las escuelas técnicas serían un elemento fundamental para alejar el peligro social y la atracción a teorías extranjeras como el comunismo. El consumo popular se amplió y los medios de comunicación masivos como diarios y revistas, la radio, el cine y el teatro ayudaban a integrar al proletariado recién llegado a las ciudades y a incorporarlos al proyecto político del peronismo. La llegada de miles de personas del interior no solo cambió el aspecto de la ciudad, sino que configuró la imagen de un nuevo tipo social. Los llamados "cabecitas negras" o "descamisados": utilizado para denominar, despectivamente, a un sector de la población asociado a personas de pelo oscuro y piel de tonalidad intermedia, pertenecientes a la clase trabajadora. En general es utilizado por las clases media y altas de Buenos Aires. El término se inserta en una serie compleja de relaciones conflictivas entre los porteños de la Ciudad de Buenos Aires y los provincianos, los inmigrantes europeos con los migrantes internos provenientes de las zonas rurales del norte del país o de los países limítrofes, las clases altas y medias con los trabajadores, y los peronistas y antiperonistas.

**4- Del derrocamiento de Perón al golpe de Onganía, 1955 – 1966**

La Política

 El golpe militar de septiembre de 1955 fue encabezado por el general Eduardo Lonardi y contó con el apoyo de todos los sectores de la oposición. Sin embargo, su breve gobierno provisional sólo concitaba la adhesión de los militares nacionalistas y de los grupos católicos, que no rechazaban los objetivos generales del justicialismo sino el personalismo de Perón y la corrupción en los diversos estamentos del poder. En realidad, querían practicar “un peronismo sin Perón”. Consecuentemente, Lonardi ubicó a nacionalistas católicos en áreas claves del gobierno y estableció contactos con algunos peronistas, buscando captar a los sindicatos. Pero Lonardi representaba el ala minoritaria y no tenía el apoyo suficiente para llevar adelante un proyecto de corte populista. Las Fuerzas Armadas, así como la mayoría de los partidos políticos opositores, deseaban impulsar una orientación liberal y de restitución de la actividad política, pero a costa de desperonizar totalmente el país. Lonardi tuvo que renunciar y fue reemplazado por Pedro Eugenio Aramburu.

El nuevo presidente se deshizo rápidamente de los funcionarios nacionalistas y populistas. Se adoptaron duras medidas contra el peronismo y sus partidarios, a quienes se persiguió al punto de prohibir cualquier mención vinculada al régimen anterior. Si el peronismo en el gobierno había contribuido a conformar una sociedad políticamente dual, los opositores devenidos en gobierno profundizaron esa línea. El peronismo fue proscripto, condenado al ostracismo y a transitar la ilegalidad y la clandestinidad. Se intervino la CGT y se encarceló a sus dirigentes y se prohibió mencionar en la prensa a Evita o Perón o cualquiera de sus símbolos. A fines del ´55, Perón decidió, desde el exilio, convocar a los peronistas a resistir a la dictadura con todos los medios a su alcance. De esta manera, comenzaba formalmente un movimiento que se denominó “la resistencia” y que, ante la imposibilidad de la práctica política formal, apelaría durante algún tiempo, a formas de autodefensa violenta. Con algunos fusilamientos y la ola de represión, la lucha clandestina se fue desintegrando. Su acción fue casi espontánea al comienzo y más orgánica, cuando se creó el Comando Sindical Peronista con el fin de recuperar el control de los sindicatos. Los sectores combativos se lanzaron a conquistar las comisiones internas, aunque muchos obreros fueron despedidos por eso. En el congreso de la CGT los 32 gremios progubernamentales se retiraron y los que permanecieron se autodenominaron “las 62 Organizaciones gremiales peronistas” y se convirtieron en la conducción político - gremial del peronismo. El posicionamiento frente el peronismo teñía toda la escena política y provocaba polémicas. El ala de la UCR Intransigente, que adhería al Programa de Avellaneda y era encabezado por Frondizi, se mostraba partidario de dialogar con el peronismo y asumía algunas de sus banderas, especialmente las vinculadas con la independencia económica. Otros se oponían frontalmente a esa estrategia y eran los enemigos más encarnizados del peronismo.

El principal rival de Frondizi era Ricardo Balbín. Ambos luchaban por el control del partido y por la candidatura presidencial. Ambos aceptaron someterse a un referéndum donde ganó Frondizi. En vista de las elecciones presidenciales del ´58, Frondizi estrechó sus contactos con Perón a través de su delegado personal John William Cooke y logró su adhesión para la candidatura presidencial. Perón decidió apoyar a Frondizi por varias razones: por un lado, desconfiaba de un triunfo del voto en blanco. Por el otro, una victoria de Balbín obligaría al peronismo a endurecer su postura. De esta forma, con los votos peronistas, Frondizi logró un amplio triunfo, impensado en otras circunstancias, con el 49% frente al 29% de la UCR del Pueblo. El gobierno de Frondizi contaba con una amplia mayoría parlamentaria y controlaba la mayor parte de los gobiernos provinciales pero su base de poder era endeble, la mayoría de los votos eran peronistas y los militares desconfiaban abiertamente del presidente. Además, la oposición practicaba una política esencialmente antiperonista y no parecía demasiado preocupada por la continuidad institucional. La UCR del Pueblo, consideraba ilegítimo a un gobierno que había triunfado con votos prestados y apelaban de forma peligrosa a la intervención de sectores militares. El gobierno buscó cumplir alguna de las promesas efectuadas al electorado peronista: amnistió a los presos políticos y a los perseguidos por el gobierno de Aramburu, intentó volver a implementar acuerdos entre obreros y patronales, aumentó los salarios y sancionó una nueva Ley de Asociaciones Profesionales. Influenciado por su asesor Rogelio Frigerio, desde el punto de vista económico, el presidente puso énfasis en la integración política de todos los argentinos y en el desarrollo económico impulsado por el capital extranjero, aunque el discurso frondicista atacaba el imperialismo inglés. Esta nueva orientación implicaba un alejamiento del Programa de Avellaneda, cuyo fundamento básico proponía la reforma agraria, la nacionalización de los servicios públicos, la energía, el transporte y el combustible. El exceso de confianza puesto en la eficiencia llevó a Frondizi a privilegiar la negociación con las grandes corporaciones por sobre una búsqueda de consenso entre los partidos políticos. La llegada de Álvaro Alsogaray al Ministerio de Economía y la adopción de una política económica liberal ortodoxa agudizaron el enfrentamiento con el movimiento obrero. El gobierno adoptó una política represiva que consistió en la intervención de los sindicatos y la puesta en marcha del Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado). Este proceso desembocó en la derrota de los sectores combativos del sindicalismo y el surgimiento de una dirección dialoguista y negociadora orientada por el dirigente metalúrgico Augusto Timoteo Vandor. La estrategia externa practicada por Frondizi también le acarreó problemas. A la vez que manifestaba su apoyo a la Alianza para el Progreso impulsada por John F Kennedy en EE. UU., se negó a condenar al gobierno revolucionario cubano de Fidel Castro. El Ejército asumía cada vez más la idea de la lucha antisubversiva. Finalmente, el gobierno cedió a las presiones militares y rompió relaciones diplomáticas con Cuba. En 1960 los comicios de renovación parlamentaria se habían desarrollado sin provocar demasiadas turbulencias, pero en 1962, la elección de gobernadores planteaba serios interrogantes y jugaba el destino del gobierno. Frondizi dio por finalizado el plan estabilizador de Alsogaray y retomó las políticas sociales del comienzo de su gestión. Ante el insoluble problema de la proscripción electoral del peronismo, el gobierno optó por permitir su participación a través de algunos partidos provinciales neoperonistas. En marzo de 1962 se realizaron las elecciones y los peronistas se alzaron con la primera minoría. Frente al amplio triunfo, Frondizi intentó dar marcha atrás interviniendo algunas provincias para evitar el acceso de los ganadores al gobierno. Los partidos políticos no lo apoyaron y la UCR del Pueblo pidió la anulación de las intervenciones militares y la renuncia del presidente. A fines de marzo, los comandantes de las Fuerzas Armadas le pidieron la renuncia.

Los militares que derrocaron a Frondizi en 1962 no tenían una solución clara para resolver el problema del nuevo gobierno y carecían de apoyos suficientes. Primó la idea de erigir al frente del gobierno al presidente del Senado, José María Guido. El nuevo mandatario contó con el apoyo de varios sectores, incluida la UCR Intransigente, que avaló esta salida como un mal menor. El gobierno era débil y carecía de autoridad y autonomía. Las presiones militares lo obligaron a intervenir las provincias donde había ganado el peronismo. Este clima incierto se daba en un contexto de retracción económica y se agravaba por los conflictos internos en el seno del Ejército. Los legalistas (azules) y los antiperonistas (colorados) se enfrentaron en un breve combate donde ganaron los primeros. Estos, encabezados por el general Juan Carlos Onganía, pretendían seguir poniendo en práctica un proyecto de carácter industrial y desarrollista. Contaban con el apoyo de sectores nacionalistas y se planteaban respetar las instituciones y llegar a las elecciones integrando el denominado “peronismo sin Perón”.

En julio de 1963 se realizaron las elecciones presidenciales en un marco de extrema debilidad institucional debido a la proscripción del peronismo y al malestar social generalizado. El triunfo correspondió al candidato de la UCR del Pueblo, Arturo Humberto Illia con el 26% de los sufragios. El 21% fueron votos en blanco, el 17% lo obtuvo Oscar Allende de la UCR Intransigente y el general Aramburu por la Unión del Pueblo Argentino obtuvo un 7%. El nuevo mandatario contaba con poco respaldo en la sociedad y en el Congreso. Su gobierno se debatía ante dos problemas: el peronismo proscripto y las Fuerzas Armadas en estado deliberativo y de conspiración. Sin la resolución de estas cuestiones, el país se tornaba ingobernable. El nuevo gobierno era partidario de la participación activa del Estado en materia económica y reguló la actividad en algunas áreas sosteniendo una política de control de precios. Illia, que asumió una política económica cuyo modelo lo proporcionaban técnicos de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), era partidario de una moderada independencia económica y, en ese sentido, se anularon los contratos petroleros del gobierno de Frondizi. El primer año de gobierno encontró una coyuntura económica relativamente favorable, cuando ascendió el Producto Bruto Industrial y se incrementaron las exportaciones, se aumentaron los salarios y se sancionó una Ley de Salario Mínimo que, sumada a una moderada política social, habría de encontrar una fuerte y persistente resistencia entre los empresarios y perfilaría un nuevo enemigo para el gobierno. En 1964 el gobierno comenzó a soportar la oposición frontal del sindicalismo. La figura relevante del gremialismo era Augusto Timoteo Vandor, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica. Este sindicato se había convertido en uno de los más poderosos, en consonancia con el crecimiento de su industria. Desde allí, construyó una base de poder que pretendía controlar al peronismo y limitar la influencia de Perón. Desde los sindicatos se controlaban las finanzas, verdadero factor de poder proveniente de las cuotas sindicales y asistenciales de los afiliados y de los aportes patronales. A estos dirigentes les interesaba más la gestión que la lucha reivindicativa, para ello eran fundamentales las buenas relaciones con la patronal y la apelación al método de negociación directa con los empresarios. Como producto de esta política, los beneficios materiales como las obras sociales, que brindaban servicios de salud, o los hoteles en zonas veraniegas de los principales sindicatos, crecieron en forma notable y acrecentaron el poder de la burocracia gremial. Este poder se extendió al terreno político a través del control del aparato partidario del peronismo, conduciendo la reorganización partidaria, al tiempo que con la CGT se organizaba un plan de lucha consistente en paros y ocupación de fábricas que resultaron verdaderos desafíos para el gobierno constitucional. Algunos dirigentes marcaban con claridad sus intenciones y las de la burocracia sindical, al reclamar directamente la intervención militar y el fin del gobierno de Illia. Los referentes más poderosos como los banqueros, los empresarios industriales y los grandes productores rurales desconfiaban del gobierno, tanto por la tibia orientación nacionalista de la economía como por el discurso democrático. El gobierno resultaba un estorbo para efectuar negocios, así como para la entrada de capitales extranjeros. Illia se había opuesto al ingreso indiscriminado de capitales foráneos. La anulación de los contratos petroleros, el control de precios, la expansión monetaria, el salario mínimo, vital y móvil y la sanción de algunas leyes sociales eran percibidas como verdaderos ataques a la libertad de mercado por las grandes corporaciones, como la Unión Industrial Argentina y la Sociedad Rural, que arremetían sistemáticamente contra el gobierno. De esta forma, a pesar del crecimiento económico producido, se generó una imagen de gobierno lento e ineficaz, incapaz de frenar el proceso inflacionario y de contener las demandas sindicales. Con el peronismo proscripto, el gobierno no tenía legitimidad. La labor conspirativa de los partidos políticos opositores junto con las incertidumbres e irresoluciones del propio radicalismo, sumado al permanente malestar militar y al rol de los medios de comunicación concebían la idea de que el golpe militar era la única salida a la crisis que atravesaba el país. Finalmente, el 28 de junio de 1966, el general Juan Carlos Onganía encabezó el golpe militar que desplazó al presidente Illia.

La Economía

 El período comprendido entre la caída del gobierno de Perón y el ascenso de Onganía se caracterizó por una serie de crisis que afectaron la economía. A cada crisis, le correspondió un plan de estabilización, según las normas dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo objetivo central era detener los procesos inflacionarios. Estas crisis (1956, 1959, 1962 y 1966) se relacionaron con una serie de factores encadenados entre sí: la disminución de divisas derivadas de las exportaciones agropecuarias por el estancamiento productivo o por la baja de los precios internacionales; el crecimiento del sector interno, vinculado al aumento de las importaciones y un desequilibrio en la balanza de pagos con la consecuencia de un mayor endeudamiento externo. Con el objetivo de equilibrar la balanza de pagos y eliminar los desequilibrios, los sucesivos gobiernos aplicaron planes de estabilización con las recetas del FMI que implicaron políticas devaluatorias y recesivas. Estos planes apuntaban a reducir los gastos gubernamentales y elevar los ingresos fiscales; devaluar el peso con vistas a aumentar las exportaciones y bajar las importaciones; por último, limitar la emisión monetaria a los efectos de impedir una demanda excesiva.

La participación argentina en el comercio mundial de productos agrícolas disminuyó durante este período. Si bien es cierto que particularmente en la agricultura se produjo una relativa modernización a partir de la difusión de maquinaria agrícola, en términos generales la producción agropecuaria se caracterizó por un relativo estancamiento. En cuanto a la industria, durante estos años se produjo una retracción de la industria textil, el estancamiento de la producción de electrodomésticos y un leve aumento de los rubros de alimentación, tabaco, bebidas, papel, maderas y muebles. La industria química aumentó en forma notable, la producción siderúrgica y la automotriz lo hicieron de modo espectacular. El avance de empresas dinámicas fue acompañado con el retiro de otras antiguas, pues muchas estaban en malas condiciones técnicas, poco equipadas y con instalaciones vetustas. Ingenios azucareros, establecimientos alimenticios y textiles fueron algunos de ellos. También se produjo un proceso de descentralización geográfica de la industria. Avanzaron sustancialmente las obras públicas, en especial en la extensión de la red nacional vial pavimentada. Los desarrollos más notables se produjeron en el interior del país. Los caminos acompañaban generalmente la red ferroviaria que, en un proceso inverso a la red vial, comenzó a cerrar ramales y a disminuir su extensión desde el gobierno de Frondizi.

El desarrollismo, es una teoría económica surgida en América Latina a fines de la década del ’40 y principios de los ’50. Sostiene que el deterioro de los términos de intercambio en el comercio internacional, con un esquema centro industrial-periferia agrícola, reproduce el subdesarrollo y amplía la brecha entre países desarrollados y países subdesarrollados. Adhiere a la idea de que los países no desarrollados deberían tener Estados activos, con políticas económicas que impulsen la industrialización para alcanzar una situación de desarrollo autónomo. El resultado de la aplicación de estas políticas económicas fue el establecimiento del capital privado extranjero en la estructura productiva interna y un endeudamiento creciente. Su punto de arranque fue un informe económico divulgado en 1950 por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). El objetivo de estas comisiones era estudiar los problemas económicos y sociales de cada una de esas regiones y proponer políticas de desarrollo. Su misión fundamental fue elaborar y difundir la llamada “teoría de desarrollo”, en el contexto de la política de domesticación ideológica que los países imperialistas contrapusieron a las demandas de los países del Tercer Mundo. En la Argentina, la corriente de pensamiento desarrollista se constituyó a mediados de la década del ’50 alrededor del candidato de la UCRI Arturo Frondizi. Para él y su grupo la economía argentina era subdesarrollada y desintegrada. El logro de un desarrollo pleno e integrado requería dos condiciones:

 1- Avanzar aceleradamente en la ISI, es decir, en la producción local en rubros en los que la economía argentina era importadora, pero orientada a la industria pesada, como bienes industriales básicos, combustibles, acero y automóviles. (ISI difícil)

 2- Una mayor atracción de capitales extranjeros. La política de plena apertura al capital extranjero se justificó estableciendo una distinción teórica entre “nacionalismo de fines” y “nacionalismo de medios”, y sosteniendo la utilidad del capital extranjero, orientado por el Estado a las áreas prioritarias para alcanzar el autoabastecimiento en bienes imprescindibles y el desarrollo autónomo.

Durante el gobierno de Aramburu, la política económica se reorientó hacia una menor participación e intervención estatal y, por el contrario, se privilegió una economía de libre mercado. En este sentido, las primeras medidas del nuevo gobierno fueron la disolución del IAPI y la desnacionalización de los depósitos bancarios. Devaluó el peso, se integró al FMI y al Banco Mundial y abandonó la tradicional relación comercial bilateral con países europeos. Pero falló en su intento por lograr la estabilidad económica y no pudo controlar adecuadamente el deterioro de la balanza comercial ni el proceso inflacionario. La consecuencia más directa del aumento de la inflación fue una redistribución de ingresos desfavorable a los trabajadores. Frondizi inició su política económica otorgando los aumentos salariales prometidos durante la campaña electoral. Se adoptó una estrategia de flexibilidad monetaria y fiscal que derivó en un aumento de la oferta monetaria y, consecuentemente, se produjo una crisis inflacionaria agravada por el déficit de la balanza comercial. A partir de esa crisis, se varió el rumbo económico y aplicó una política de ajuste liberal ortodoxa, que logró detener la inflación, pero produjo un marcado deterioro de los salarios. Continuó el deterioro de la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso. La política económica de esta época se basaba en el desarrollo industrial básico (acero, celulosa, maquinarias y químicos), en el impulso de las economías regionales para integrar la economía nacional y la explotación a fondo de los recursos naturales. Debía estimularse también la tecnificación del agro.

Para poder concretar este buscado desarrollo, era necesario lograr la atracción de una enorme masa de capital extranjero. El gobierno impulsó una serie de leyes que estimularon la radicación de esos capitales y que fueron muy generosas con las inversiones extranjeras, ya que quienes invirtieran, podían remitir libremente sus ganancias a los países de origen. Se adoptaron regímenes especiales en áreas clave como la industria automotriz, energética, siderúrgica y petrolera. Esta política despertaba duras críticas desde los partidarios de un desarrollo industrial autónomo. Hacía finales de 1961, la Argentina entró en un nuevo ciclo de recesión. El crecimiento de la deuda externa y la falta de pagos llevaron al FMI a declarar al país en incumplimiento con los acuerdos y a imponer una serie de condicionamientos de carácter financiero. La consecuencia fue la caída de reservas y de las inversiones extranjeras, situación que se complicó con una importante fuga de capitales. Las políticas para resolver la crisis, tuvo consecuencias que se manifestaron en el aumento del desempleo, la caída del producto bruto interno y una fuerte retracción del consumo, especialmente entre los sectores populares. La política económica del gobierno de Illia apuntó a resolver algunas de estas cuestiones. Las estrategias apuntaban, por un lado, a evitar el crecimiento de la deuda externa y por el otro, a tratar de eliminar el desequilibrio de la balanza de pagos que redundó en un discreto éxito de la política cambiaria. La política económica tenía un leve tinte nacionalista y estatista que generó una dura y despiadada oposición de los grupos empresariales a partir de la anulación de los contratos petroleros, la polémica con el Banco Mundial por su injerencia en la política económica, la ruptura con el FMI por un acuerdo del gobierno anterior y la política de controles cambiarios. Se produjo un sostenido crecimiento de las exportaciones favorecidas por los buenos precios internacionales y un relativo aumento en la productividad.

La Sociedad

 En 1960, la Argentina tenía poco más de 20 millones de habitantes. La tasa de crecimiento anual desde el censo anterior (1947) era la menor de un período intercensal desde 1869 y continuaría bajando durante los 60's. Uno de los motivos de la tasa decreciente se debió al freno del flujo inmigratorio en 1960, y a partir de entonces, la inmigración se compondría mayoritariamente de migrantes provenientes de países limítrofes. El otro motivo de la tasa de crecimiento descendente se relacionaba con la escasa tasa de natalidad, sin embargo, esta caída se atenuaba por el bajo índice de mortalidad. Durante esos años comenzó a perfilarse un fenómeno de características inverso al tradicional: la emigración hacia el exterior de sectores profesionales y especializados.

En este período continuaron los procesos de urbanización y de despoblamiento de las áreas rurales, que acentuaron las desigualdades entre las regiones. El desarrollo industrial de estos años y el aumento de la tecnificación agrícola (tractores, sembradoras y cosechadoras) contribuyeron al notable crecimiento urbano que contribuía a despoblar el ámbito rural. La concentración urbana mostraba en ese momento una de sus tendencias dominantes, el sobredimensionamiento del Gran Buenos Aires que creció en forma notable. El nivel de vida en las grandes ciudades sufrió un proceso de leve deterioro como consecuencia del empeoramiento de la situación habitacional. Hubo un notable aumento de villas de emergencia y cayó el nivel de acceso a la propiedad. La crisis del denominado Estado de Bienestar trajo como resultado del estancamiento de la inversión en gasto social, lo que repercutió en las áreas de educación, salud y vivienda.

La clase obrera asalariada se mantuvo estable en términos de volumen, pero su peso relativo se retrajo en forma notable sobre la estructura social. Los asalariados eran los mismos, pero ahora eran menos en relación con las otras categorías sociales. Estos cambios se produjeron en el marco de un proceso de concentración industrial que implicó una mayor ocupación y un mayor valor agregado en los grandes establecimientos. Por otra parte, en términos generales hubo un estancamiento del empleo industrial y, como contraparte, un aumento en el sector servicios y en la construcción, particularmente en obras públicas. Una característica de esos años fue el crecimiento del cuentapropismo, compuesto en su mayoría de comerciantes, electricistas, mecánicos, plomeros, tintoreros, peluqueros, transportistas, albañiles, pintores y martilleros para nombrar solo algunos de los rubros más importantes.

Como resultado del proceso de concentración industrial, se redujo notablemente el número de pequeños empresarios industriales. Este proceso incrementó la importancia y la jerarquización de la enseñanza media y universitaria. Sin embargo, el aumento exagerado de la titulación universitaria produjo un desfasaje que de aquí en más sería crónico, con el nivel de demanda de empleo. Durante este período el salario real tendió a estancarse y no sufrió grandes variaciones. Después de la caída de Perón, aumentaron la producción, el empleo y la productividad, pero la distribución del ingreso se modificó de manera negativa para los trabajadores. Solo durante el gobierno de Illia se revertiría levemente esta situación. La Universidad fue un importante punto de renovación a partir de la restauración de la autonomía universitaria y el gobierno tripartito, (alumnos, docentes y graduados). En su seno, se desarrolló un amplio abanico de tendencias político-ideológicas progresistas y de izquierda, algunas influenciadas por la revolución cubana de 1959, que tendrían un importante rol en los movimientos políticos sociales de los años siguientes.

**5- Del derrocamiento de Illia al golpe de Videla, 1966 – 1976**

La Política

El Estado autoritario

En junio de 1966, el Ejército derrocó al presidente Illia y una junta militar, se arrogó la suma del poder público y convocó para el cargo de presidente de facto al general retirado Juan Carlos Onganía. El nuevo presidente denominó el proceso como "revolución argentina" y dijo “no tener plazos sino objetivos”, lo que mostraba la intención de postergar por mucho tiempo la actividad electoral y el sistema representativo de gobierno. Contó con el apoyo de amplios sectores de la sociedad como la prensa, que durante los últimos años había operado a favor del golpe y se había convertido en un eficaz colaborador para generar el consenso civil. Otro gran apoyo lo dio el empresariado nucleado alrededor de diversas corporaciones, como la Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial Argentina y la Confederación General Económica. Sin embargo, el respaldo más sorprendente provino desde ciertas fuerzas políticas. Con pocas excepciones, varias agrupaciones simpatizaron con el golpe. La postura del peronismo y del sindicalismo peronista fue importante. Perón se mostró cauto y recomendó prudencia a sus simpatizantes, para abrir un camino de expectativas y de relativo consenso hacia el golpe. El sindicalismo suspendió sus planes de lucha durante un tiempo iniciándose así una tregua con el gobierno militar. La expectativa y el consenso generados por el golpe militar y la figura de su conductor no disimularon las diferencias existentes entre los sectores que lo respaldaban. El mismo presidente lideraba una corriente de carácter nacionalista, anticomunista, neo corporativista y de rasgos paternalistas donde se nucleaban muchos militares y empresarios provenientes del catolicismo. Otros militares, Lanusse entre ellos y la mayoría de los empresarios, se mostraban en cambio, favorables a una política económica liberal y ortodoxa. Esas tendencias convivieron en el gobierno de manera tensa, hasta que a fines del ´66 el sector liberal terminaría hegemonizando y desplazando a los paternalistas de la conducción del Ejército y de áreas económicas y laborales, incluyendo a Adalbert Krieger Vasena, un economista vinculado estrechamente a los centros financieros internacionales y a las grandes empresas locales quien, después de haber debilitado la resistencia sindical, lanzó su plan económico, donde se pretendía racionalizar la economía y privilegiar a las empresas más eficientes en detrimento de las menos productivas. El nuevo ministro defendió la estabilidad bancaria y alentó los créditos desde el exterior, así como también impulsó al Estado a invertir en grandes obras públicas como las centrales de Atucha y El Nihuil y la represa El Chocón, al tiempo que atacó la inflación recurriendo a un estricto congelamiento salarial y de las tarifas públicas. Si bien es cierto que existían disensos en áreas claves como la economía y la educación, parecía haber acuerdo entre los grupos de poder en torno a la idea de disciplinar a una sociedad vista por ellos como permisiva y amenazada por ideas comunistas.

El nuevo régimen manifestaba con claridad el carácter autoritario con la disolución del Parlamento, la prohibición a los partidos políticos y la persecución ideológica a los opositores. No solo se reprimieron y persiguieron manifestaciones políticas e ideológicas, sino también culturales. La Universidad pasó a depender del Ministerio del Interior. Este suceso generó la resistencia de autoridades, profesores y alumnos en los claustros universitarios y trajo como consecuencia una violenta represión por parte de la policía, que irrumpió en la Universidad. Ante semejante avasallamiento y los recortes de la libertad, que incluían la persecución de profesores y la limitación de la libertad de cátedra, centenares de profesores e investigadores decidieron renunciar a sus cargos e iniciar un importante éxodo que continuaría durante varios años. La censura, la búsqueda de “orden” y la vocación autoritaria del gobierno de Onganía era alentada por la Iglesia y se propagó hacia todos los ámbitos de la sociedad: la universidad, el teatro, la prensa, el cine, la radio y la televisión, aunque se manifestó con particular dureza hacia el movimiento obrero y los trabajadores en general, con el cierre de establecimientos industriales (entre los cuales los ingenios azucareros fueron la cara más visible), la racionalización de personal, la persecución de dirigentes más combativos, y el debilitamiento general, produjo una situación de empobrecimiento.

 Para el peronismo, tanto desde el punto de vista sindical como político, se había tornado evidente que la política implementada por Onganía no respondía a sus expectativas. En consecuencia, Perón y los sindicalistas endurecieron sus posturas, confrontando con el gobierno militar a partir de ese momento. A partir de 1968 la CGT se volvió a dividir: la CGT de los Argentinos rechazaba las posiciones de diálogo y en cuyo seno se destacaron los gremios enrolados en el “peronismo duro” (telefónicos y sanidad) y otros influenciados por el radicalismo y los socialistas democráticos (ferroviarios y viajantes de comercio). Los gremios vandoristas que adoptaron una posición de colaboración con la dictadura se agruparon en la CGT Azopardo. Quedaban de ese lado los metalúrgicos, los textiles y Luz y Fuerza. En torno a la CGT Azopardo se ubicaron corrientes combativas del movimiento estudiantil y los Sacerdotes para el Tercer Mundo, que difundían doctrinas evangélicas donde se ponía el énfasis en el compromiso que la Iglesia debía tener con los pobres.

 El contexto internacional influía en el clima revolucionario de la época y recorría diversas partes del mundo. Una revolución cultural en China, la resistencia vietnamita al Ejército de los Estados Unidos (el más poderoso del mundo), la revolución cubana, el movimiento estudiantil mexicano, las grandes movilizaciones pacifistas en Norteamérica junto con la radicalización de los afroamericanos, las rebeliones del Mayo Francés y, particularmente, la figura emblemática de Ernesto Che Guevara, cuya dimensión había crecido notablemente desde su muerte en Bolivia. Al descontento popular, se sumó un resquebrajamiento del frente interno porque las organizaciones del campo se sentían perjudicadas por la orientación económica del ministro Krieger Vasena. Si bien la inflación había bajado sensiblemente y el PBI había crecido, los salarios reales siguieron el camino inverso.

El “Cordobazo” fue una manifestación social casi sin precedentes. Este hecho se proyectó hacia delante con otra magnitud, violencia y alcance, ya que de allí habría de surgir un movimiento sindical clasista y combativo, que no solo se enfrentaría a la dirigencia empresarial y al gobierno sino a las propias dirigencias sindicales La consecuencia más profunda del gran movimiento del 69 fue el derrumbe del orden impuesto por el presidente. Se tornó evidente que el régimen había perdido el apoyo y la confianza de los principales agentes económicos. Los males atribuidos a las políticas económicas anteriores (mercado negro, fuga de capitales, caída de reservas) se hacían presentes en el Estado autoritario y la inestabilidad económica implicó, también, su desmoronamiento. Onganía trató de establecer un diálogo con los sectores participacioncitas de la CGT, pero se hallaba débil para negociar y los sindicatos tomaron una distancia prudente. El clima de descontento fue creciendo, radicalizándose en algunas protestas y organizaciones, llamadas “la guerrilla”. Esta profusión de grupos, algunos armados efectuaron al comienzo operaciones menores, con la excepción del asesinato de Vandor, ejecutado por la organización Descamisados en junio de 1969. El clima de violencia crecía. El gobierno instrumentó una dura política de represión que incluyó desde el cierre de medios de prensa hasta la sistematización del uso de la tortura con los presos políticos y una represión paralela e ilegal. En mayo de 1970, Montoneros secuestra, ajusticia y asesina al general Aramburu “por traidor a la patria y al pueblo”.

**Descamisados o Comando Descamisados fue una organización guerrillera peronista que actuó en**[**Argentina**](https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina)**entre 1968 y 1972. Montoneros fue una organización guerrillera argentina de la izquierda peronista que se desempeñó entre 1970 y 1980. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) fueron una organización política armada de Argentina formada a finales de la década del 60, y cuyo temprano ideal era entrenarse y unirse a las guerrillas rurales iniciadas por el Che Guevara en Bolivia. Sus miembros provenían mayoritariamente de una fractura producida en el interior de la Federación Juvenil Comunista (la "Fede") del PC argentino. Su ideología original de base era por lo tanto el marxismo-leninismo, pero con un aditamento latinoamericanista, inspirado en la prédica y accionar de este referente revolucionario. El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) fue una organización guerrillera argentina, que constituyó la estructura militar del Partido Revolucionario de los Trabajadores, de orientación marxista, liderado por Mario Roberto Santucho durante la década del 70. Hacia principios de 1977 fue desarticulado por las Fuerzas Armadas, luego del Operativo Independencia (1975) y del accionar represivo de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional.**

La caída del Estado autoritario

Una Junta de Comandantes desplazó a Onganía de la presidencia. Los comandantes de las Fuerzas Armadas, orientadas por el general Lanusse, no se animaron a ocupar directamente el gobierno. Tras designar al gabinete y tomar decisiones claves como continuar la política económica, designaron como presidente al general Marcelo Roberto Levingston, un general absolutamente desconocido para la mayoría. El nuevo presidente se encontró con un gobierno fuertemente condicionado y sin apoyo propio, ni en el Ejército ni entre los políticos. Por otro lado, los sectores populares mostraban hostilidad y los grupos de poder tomaban distancia. Levingston intentó continuar con la "revolución argentina" cambiando de rumbo y ensayando una política económica de carácter nacionalista. Para ello, nombró nuevo ministro de Economía a Aldo Ferrer, un técnico de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), ex funcionario de Frondizi, que basó su gestión en una política salarial distribucionista, en el estímulo a la inversión de capital, el control de precios por parte del Estado y en la expansión del crédito. La política económica no generó entusiasmo ni entre los grupos de poder ni entre los sindicalistas, quienes le realizaron varios paros generales. La gran mayoría del espectro político manifestó su oposición a la estrategia presidencial. Los sectores de izquierda se nucleaban en el Encuentro Nacional de los Argentinos, la porción más importante de los partidos políticos (socialistas, justicialistas, radicales, demócratas progresistas y conservadores) que elaboró un documento denominado La Hora del Pueblo, liderados por el delegado de Perón Daniel Paladino y por Ricardo Balbín. Ahí se exigía al gobierno comenzar a transitar el camino de la normalización institucional y objetivo final debía ser llamar a elecciones sin proscripciones. En esos momentos, se produce una intensificación de la acción de los grupos armados y de la oposición contestaria. Montoneros ocupa el pueblo cordobés de La Calera, las FAR hacían lo mismo en Garín. Descamisados asesinaba al sindicalista José Alonso. Estas organizaciones armadas crecían rápidamente al incorporarse cientos de jóvenes que veían en la violencia revolucionaria una salida para sus aspiraciones de cambio social. "La violencia de abajo para responder a la violencia de arriba" era el lema. Estas posturas eran abonadas por un contexto de falta real de libertades, debilidad de los partidos políticos, un clima de ideas revolucionarias que recorría el mundo, por el autoritarismo militar y por la represión policial. Las denuncias sobre aplicación de torturas se multiplicaban y el avance de la represión ilegal era cada vez mayor. Por otro lado, desde el Cordobazo, se intensificó su actividad y creció de manera notable el movimiento gremial clasista y combativo, que no solo enfrentaba frontalmente a la política económica del gobierno y a los empresarios sino también a la burocracia sindical. El núcleo de esta oposición se hallaba en Córdoba y era orientada por Agustín Tosco y René Salamanca, dos dirigentes sindicales. Si bien era cierto que a nivel nacional la vieja dirigencia sindical seguía controlando al movimiento obrero, el núcleo cordobés, manifiestamente clasista y de izquierda, demostraba una dinámica de movilización singular así como una influencia notable en el movimiento estudiantil. El débil gobierno de Levingston, incapaz de resolver la crisis, las movilizaciones permanentes y sin apoyo militar, se derrumbaba.

En marzo de 1971 el general Alejandro Agustín Lanusse asumía la presidencia y retenía el cargo de comandante en jefe del Ejército. El nuevo presidente tenía un solo camino y planteó desde un primer momento su intención de abrir el juego político, permitiendo la actividad partidaria y estableciendo el llamado a elecciones generales sin proscripción. Desde el punto de vista económico y social, el gobierno no parecía tener rumbo: se profundizaron el desempleo, la caída del salario y el aumento de los productos básicos de la canasta familiar, situación que no hacía más que multiplicar los reclamos de trabajadores urbanos y rurales, así como de movimientos de carácter territorial como los movimientos denominados “villeros”: ciudadanos agrupados en zonas muy precarizadas que también se manifestaban. La espiral de violencia se hacía incontenible y la guerrilla golpeaba duramente al gobierno. El ERP secuestró al director general de la FIAT que murió en un tiroteo al ser hallado por la policía en el refugio donde estaba secuestrado. Asesinaron al jefe del II Cuerpo del Ejército, entre otros. Los militares no tenían claro cómo resolver el problema de la guerrilla, aunque, cada vez más, se alejaba de la legalidad y apelaban a métodos ilegales y violatorios de los más elementales derechos humanos. Era evidente que el gobierno carecía de consenso y credibilidad y necesitaba elaborar una salida política. El presidente junto con Arturo Mor Roig, un político radical, elaboraron el retorno a la democracia, pero intentaron plasmar una retirada ordenada de los militares y poner límites al futuro político a través del Gran Acuerdo Nacional (GAN), donde se condicionaba al futuro gobierno tanto en el área económica (resguardando los intereses de los grupos dominantes) como de seguridad (donde los militares controlarían la represión a la guerrilla). También se trataba de erigir a Lanusse como el candidato de transición procurando neutralizar la lógica candidatura de Perón.

 Perón, respaldado por la movilización popular, se convirtió en el actor principal de la transición y fue responsable del fracaso del GAN. Nombró delegado personal a Héctor J. Cámpora, decisión que implicaba no solo el endurecimiento de Perón sino también el control directo de las negociaciones. Por eso estimuló las movilizaciones como elemento de presión y, en una de sus clásicas maniobras pendulares, desplazó relativamente a la dirigencia sindical e incentivó el rol de la juventud radicalizada durante este proceso. En este sentido apoyó la elección del joven Juan Manuel Abal Medina como secretario general del movimiento justicialista y posteriormente, promovió el ingreso de la Juventud Peronista (JP) al Consejo Superior del Justicialismo, que se convirtió así en el principal soporte de Cámpora. Lanusse renunció implícitamente a ser el candidato presidencial, pero logró vetar la posible postulación del líder justicialista. Perón aceptó el condicionamiento. En noviembre de 1972 selló un acuerdo de convivencia democrática con el líder radical Ricardo Balbín y creó el Frente Justicialista de Liberación Nacional (Frejuli) con partidos menores como el conservadurismo popular, el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Movimiento Socialista de Liberación y el Movimiento de Izquierda Cristiana. Se estableció que Héctor J Cámpora y el conservador Vicente Solano Lima serían los candidatos para la presidencia. Los comicios se realizarían en el marco de la reforma electoral efectuada en 1972, que estipulaba la realización de una segunda vuelta o ballotage si ninguna fuerza superaba el 50% de los votos en la primera elección, entre otras reformas. El peronismo, de la mano de la Juventud Peronista, ocupó el centro de la escena protagonizando masivas movilizaciones. El 11 de marzo de 1973 se realizaron los comicios y la fórmula del Frejuli, encabezada por Cámpora, se impuso con casi el 50% de los votos, seguido por la fórmula radical encabezada por Balbín con el 21%.

El retorno del peronismo al poder

El 25 de mayo de 1973 asume el nuevo gobierno, en medio de un clima de euforia y con una Plaza de Mayo colmada y repleta de consignas reivindicatorias de la patria socialista. Ese clima se extendió durante todo el día hasta la noche. Hubo manifestaciones en torno a la cárcel de Villa Devoto, donde miles de militantes de izquierda forzaron la liberación de los presos políticos, que poco después serían amnistiados. Sin embargo, la euforia del triunfo justicialista no alcanzaba para ocultar una realidad poco tranquilizadora. El movimiento peronista estaba cruzado por profundas diferencias que involucraban distintas tendencias, desde los proyectos orientados por los sectores más radicalizados que propugnaban la liberación social y nacional del país, hasta grupos de ultraderecha controlados por el secretario privado de Perón, José López Rega, un oscuro y siniestro personaje que comenzó a adquirir poder público desde el momento del triunfo electoral. También estaba el sector más poderoso del movimiento, controlado por la tradicional dirigencia sindical, que no había perdido poder y estaba dispuesta a recuperar la presencia pública dentro del movimiento peronista. El gobierno se convertía en una arena de lucha donde los diversos sectores resolvían sus enfrentamientos de manera violenta. Entonces, en un contexto de movilización general y efervescencia reivindicativa de amplios sectores de la sociedad, el gobierno de Cámpora estuvo signado no solo por la lucha hacia el interior del peronismo, sino también por un convulsionado clima social en el que se sucedían las tomas de fábricas y reparticiones públicas. El gobierno no podía controlar ninguno de los frentes. El gobierno de Cámpora fue ambiguo y estuvo marcado por el Programa de Reconstrucción y Liberación Nacional, cuyo objetivo no apuntaba a modificar las bases del sistema, como pretendían los sectores juveniles radicalizados que lo habían apoyado. El Programa determinaba una política económica intervencionista que había formulado un pacto social producto del acuerdo entre la CGT y la CGE. En el plano exterior, se planteó una estrategia rupturista basada en una mayor independencia con respecto a Estados Unidos y una apertura hacia el mundo socialista, especialmente Cuba, Vietnam y China. Pero el problema central seguía siendo el campo de batalla justicialista. El enfrentamiento interno se agudizaba y los grupos de derecha iban inclinando el conflicto de su lado, especialmente después de que Perón dejó de darle su apoyo a los sectores más radicalizados. Rodolfo Galimberti debió renunciar al Consejo Superior del Justicialismo por haber impulsado públicamente la formación de milicias populares. Se iniciaba así una maniobra destinada a desplazar a la juventud peronista y a las formaciones especiales del rol protagónico que Perón mismo les había adjudicado. Los sectores de derecha, encabezados por López Rega, Norma Kennedy y el coronel Osinde, comenzaron a tener una fuerte y cada vez mayor injerencia en el justicialismo. Ellos controlaron el operativo de retorno del general Perón en junio de 1973. En esa concentración de más de 1 millón de personas, los movimientos de la Juventud Peronista y los grupos más radicalizados se vieron impedidos a acercarse al palco desde donde Perón le hablaría a la multitud. Ante la presión ejercida para ganar posiciones, fueron atacados con armas de fuego proveniente de los grupos paramilitares del coronel Osinde que controlaban la seguridad del acto. El enfrentamiento armado dejó más de una docena de muertos y cientos de heridos. El avión que traía a Perón desvió su recorrido y aterrizó por razones de seguridad en Morón. Contra lo que esperaba la juventud, Perón acusó implícitamente a este sector y al gobierno de Cámpora de la responsabilidad por los incidentes. También abogó por el retorno a los valores doctrinarios tradicionales del justicialismo. La ofensiva contra el ala izquierda del movimiento se extendió hacia todos los frentes. Los dirigentes gremiales, encabezados por José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT, iniciaron una ofensiva tendiente a desplazar a Cámpora del gobierno. En julio de 1973, tras 49 días en el gobierno, Cámpora y Solano Lima renunciaban a sus cargos. Ante la renuncia del presidente y su vice, le correspondía la sucesión al titular del Senado, que había sido enviado intencionalmente a una misión diplomática al exterior, quedando el camino libre para Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados y yerno de López Rega. El nuevo mandatario tenía dos objetivos: alejar del gobierno a los representantes de los sectores de izquierda y convocar a elecciones para acelerar la llegada de Perón a la Casa Rosada. Dejó cesantes a varios funcionarios de todas las líneas de gobierno y convocó a elecciones presidenciales para el 20 de julio. Se conformó la fórmula para la primera magistratura, integrada por el general Perón y su esposa María Estela Martínez. La candidatura de "Isabel" demostraba el poder adquirido por el entorno lopezreguista. Esta fórmula se impuso con el 61,8% de los votos contra el 24,4% de la fórmula radical. Perón basó su estrategia política en la convivencia con los partidos políticos, en el pacto social y en el reencauzamiento del movimiento justicialista. Con el primero no se presentaron grandes problemas, los otros dos se convirtieron en las dos grandes cuestiones de su gobierno que no serían resueltas satisfactoriamente. El pacto social era desbordado pues no alcanzaba a contener los reclamos salariales y de mejores condiciones de trabajo, a pesar del evidente reforzamiento del poder sindical. Con respecto a los problemas internos del justicialismo, Perón se propuso disciplinar a los sectores juveniles encolumnados en la "tendencia revolucionaria". Su actitud fue muy dura, en especial después del asesinato del secretario general de la CGT, Rucci, hecho reivindicado por Montoneros. Una semana después, el líder ratificó el rol del sindicalismo como la columna vertebral del movimiento, siendo un gesto simbólico de indudable importancia. A partir de allí, todos sus pasos se dirigieron a eliminar la base de poder de la "tendencia", desplazando del poder a sus simpatizantes, que incluían a algunos gobernadores. También criticó a los diputados de la JP y el 1º de mayo, en una masiva concentración en la Plaza de Mayo los calificó de "imberbes", los instó a disciplinarse o irse del movimiento, ante lo cual las columnas de la Juventud Peronista abandonaron la Plaza de Mayo. Perón intentó frenar la escalada del ERP declarándolo ilegal y persiguiendo a los medios de prensa que publicaban sus comunicados o informaban de sus acciones.

 La muerte de Perón, el 1º de julio de 1974, agravó la crisis política en tanto desaparecía de escena la única figura capaz de contener y disciplinar las fuerzas internas en estado de guerra, aún a precio de favorecer a alguna de ellas. El caso de Montoneros es claro, pocos días después de la muerte del líder, desconocieron la autoridad de Isabel y pasaron a la clandestinidad para reasumir la lucha armada. Isabel Martínez, cuyas dotes políticas eran insignificantes, asumió la presidencia con el aval de todo el espectro político parlamentario. Durante los primeros meses se fortaleció en el poder López Rega, quien influía directamente en la presidenta. Se desató una ofensiva donde una organización paramilitar denominada la Alianza Anticomunista Argentina la Triple A persiguió y asesinó a varias decenas de políticos, intelectuales, artistas, periodistas y sindicalistas, preanunciando, en cierta medida, las acciones que llevaría adelante la dictadura militar. Los sindicatos disidentes fueron intervenidos, hecho que, si bien no logró acallar el malestar del conjunto de los trabajadores, golpeó duramente a los líderes más combativos. Cuanto más débil y aislado se mostraba el gobierno, más autoritario se tornaba. Isabel comenzó a apoyarse cada vez más en las Fuerzas Armadas, otorgándoles mayores poderes. Su manifestación más clara fue la orden impartida para combatir la guerrilla, involucrando al Ejército en la lucha contra el ERP en Tucumán en el Operativo Independencia. En medio de este clima político y social tan inestable, la mayoría de las entidades empresariales (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentina, Cámaras de Comercio y de la Construcción) conformaron una asamblea permanente que, mediante paros sectoriales desestabilizaron y debilitaron cada vez más al gobierno. En este contexto, la figura presidencial perdía aceleradamente el poco peso que le quedaba. La división del bloque parlamentario, donde una parte cuestionaba el autoritarismo y el verticalismo presidencial, terminó por debilitar su figura. La guerrilla redobló su acción, aunque también manifestaba sus limitaciones de carácter militar. Los partidos políticos opositores buscaban destituir a la presidenta a partir de un juicio político pero el 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas destituyeron a las autoridades legítimas y asumieron el poder.

La Economía

 Durante la década comprendida entre 1966 y 1976, el comportamiento de la economía mostró vaivenes, debido tanto a la diversidad de las políticas económicas aplicadas por los distintos gobiernos como a la influencia de la economía internacional. La producción agropecuaria fue un claro ejemplo de esos avatares. La agricultura pasó por momentos difíciles durante fines de los 60s y comenzó un proceso de recuperación y expansión en el transcurso de la primera mitad de los 70s. Las dificultades se debieron más a las fuertes retenciones a las exportaciones aplicadas por el gobierno de Onganía para equilibrar las cuentas del Estado que a la producción total. No obstante, se observa un aumento de la producción agrícola que se debió fundamentalmente a la mayor demanda internacional, especialmente a la procedente del bloque de países socialistas que requerían granos y aceites. Paralelamente se produjo un proceso de transformación cualitativa que involucró a las áreas productoras de la zona pampeana y a algunos bolsones regionales. El mejoramiento cualitativo se evidenció en la mecanización del agro pampeano con la generalización definitiva del uso de tractores, cosechadoras, silos y galpones de almacenamiento y también, un significativo mejoramiento del rendimiento del suelo a partir del uso generalizado de semillas híbridas, fertilizantes, herbicidas y plaguicidas. Este proceso generó un aumento de las tierras cultivadas en detrimento de las dedicadas a la cría de ganado. Contrariamente a lo sucedido con la agricultura, la ganadería pasó por un período de estancamiento. El mercado requería cortes especiales, carnes cocidas y precocidas, y productos enlatados con nuevas aplicaciones tecnológicas. Las empresas productoras y comercializadoras de carnes para la exportación debían realizar importantes inversiones y en algunos casos demoraron esas transformaciones o se diversificaron a otras ramas. La actividad industrial continuó el proceso iniciado hacia comienzos de los 60s y, durante estos años, creció a un ritmo lento pero persistente. Menos afectada por las crisis cíclicas, la producción manufacturera experimentó un impulso. Se desarrolló un evidente proceso de transformación y redimensionamiento de una parte de las empresas industriales que implicaron una racionalización de las formas de producción, determinantes del alto nivel de conflictos gremiales, la concentración en grandes plantas y la evidente desaparición de cientos de talleres medianos y pequeños. Por otra parte, el crecimiento industrial estuvo ligado con el ensanchamiento del mercado interno, no solo por la mayor capacidad de consumo de los sectores medios sino también por la elevación del nivel de vida de los trabajadores. De esta forma se reactivaron la construcción, la industria textil, la producción de alimentos y de bienes de consumo livianos, así como la industria automotriz, que con la fabricación de vehículos pequeños vendidos en cuotas incorporó en esta área del consumo a un amplio segmento de la población. Sin embargo, el sector de mayor dinamismo y crecimiento se vinculaba al impulso de las exportaciones industriales: productos siderúrgicos, químicos, máquinas y herramientas, así como también los automotores que alcanzaron los mayores logros en este período. Esta expansión de las exportaciones industriales se basó, en su mayor parte, en la producción de industrias nuevas, concentradas y de alto nivel tecnológico.

La política económica de Onganía definió su orientación al nombrar a Krieger Vasena al frente del Ministerio de Economía. El nuevo ministro tenía excelentes contactos y relaciones con las empresas multinacionales y los grandes grupos oligopólicos. Su plan económico consistió en devaluar el peso un 40% y estableció un gravamen del 40% sobre las exportaciones agropecuarias con el objetivo de sanear las cuentas fiscales. Liberalizó el mercado de cambios, disminuyó los gravámenes para la importación y aplicó una serie de medidas tendientes al saneamiento del gasto público. La estabilización era uno de los principales objetivos. Pero, a diferencia de las políticas estabilizadoras anteriores, apuntaba a reducir la inflación tratando de evitar las lógicas secuelas de recesión y apelando a la promoción de la competencia, la eficiencia y la inversión de capitales extranjeros. En consecuencia, tras otorgar un aumento salarial del 15%, se suspendieron las convenciones colectivas de trabajo y se congelaron los salarios al tiempo que las empresas más importantes se comprometieron a congelar los precios de sus productos, los combustibles y las tarifas de los servicios públicos. El Estado cumplió un rol central en esta estrategia, no solo estableciendo pautas sino también interviniendo activamente a través de la inversión en grandes obras de infraestructura, como caminos, puentes o la construcción de la represa energética El Chocón - Cerros Colorados. Durante esos años la red vial pavimentada avanzó significativamente uniendo distintas zonas del país. El entramado de rutas nacionales conectaba ahora las diferentes regiones del país con la excepción de la Patagonia. La política de estabilización mostró un éxito relativo. Hacia los primeros meses de 1969 el ramo de la construcción mostraba un espectacular aumento del 59% y, si bien la agricultura se había estancado, el sector industrial había experimentado un importante crecimiento, mayor en la siderurgia y en la química que en las industrias tradicionales. La inflación había caído de manera sensible a menos del 10% anual. El PBI creció en forma notable y más allá del desempleo provocado por la racionalización y los cambios en la industria, la desocupación no aumentó. Sin embargo, el reparto de ese éxito fue desigual y los mayores beneficios recayeron en un pequeño sector representado por la gran burguesía vinculada al sector financiero, a la construcción y al segmento más concentrado de la industria. El grupo de los perdedores era amplio y variado, los trabajadores asalariados perjudicados por el congelamiento de sus sueldos, los obreros desplazados por la racionalización y eficiencia, los empresarios nacionales rezagados por el excesivo peso del capital transnacional, los sectores rurales perjudicados por las retenciones a las exportaciones. En esta desigualdad, podremos encontrar los estallidos sociales producidos. Entre 1969 y 1973, la economía tuvo un rumbo errático, debido a ambigüedades y la falta de un rumbo fijo. Se intentó continuar la fijada por el gobierno saliente, pero con mucho menos poder. El desequilibrio entre importaciones y exportaciones, las pérdidas de reservas monetarias, la aceleración de la tasa inflacionaria, así como el aumento de precios y salarios, fueron elementos decisivos para buscar alternativas viables, sin embargo, el intento por imponer una política más distribucionista fracasó rápidamente.

La llegada de Lanusse al gobierno no alivió la situación, al contrario, convencido que no habría mejoras económicas si no se alcanzaba un acuerdo político entre los diferentes sectores, el rumbo económico se descontroló casi por completo: inflación incontenible, caída del salario real, fuga de divisas y desempleo, fueron algunas de las características salientes de su gestión.

Con la llegada del gobierno peronista, elegido democráticamente, se reordenó, al menos por un tiempo, la economía. Se aplicó una política con un fuerte sesgo intervencionista, en tanto el Estado controlaba el proceso de estabilización regulando precios, salarios y el otorgamiento de créditos. Se inspiró, en alguna medida, en estrategias aplicadas en la década anterior que ponían el acento en el crecimiento del consumo interno y en el impulso a las exportaciones. El Estado realizó importantes inversiones en las obras sociales y aumentó el número de empleados públicos en las diversas empresas del Estado. Si bien se logró activar rápidamente la economía interna a partir del mayor consumo de los beneficiados, el déficit estatal se acrecentó con celeridad. Por otra parte, se incentivó en primer lugar las exportaciones de carácter no tradicional (industrial) con la activa participación del Estado, que favoreció con créditos y estímulos a las empresas implicadas en el proceso exportador, pero también se puso énfasis en la exportación de productos agrícolas pues la apertura de nuevos mercados (Unión Soviética) y los buenos precios internacionales de los granos favorecían su desarrollo. El excepcional saldo favorable de la balanza comercial es una buena demostración del momento favorable de las exportaciones argentinas. Los grandes lineamientos del plan se manifestaron en el Plan Trienal 1974-1977, allí se explicaban los propósitos dirigidos a trasladar el dinamismo económico desde los monopolios al sector privado nacional y al Estado. La columna vertebral del plan era la política de concentración sectorial contenida en el pacto social, donde la representación de los trabajadores, de los empresarios, y el Estado firmaron un Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, Liberación Nacional y la Justicia Social, donde había un conjunto de medidas destinadas a disciplinar y atenuar los conflictos entre capital y el trabajo, a la vez de contener la inflación. Para prevenir el déficit fiscal, el Estado decretó fuertes aumentos tarifarios de combustibles y los servicios públicos.

Hacía 1974 comenzó a evidenciarse la crisis del plan, el ascenso del precio del petróleo dispuesto por la OPEP, incrementó los precios de importación, se cerró el Mercado Común Europeo a las carnes argentinas y empezó a repuntar la inflación, como consecuencia del aumento del consumo, a la vez que se hacía evidente la falta de inversión privada. La coyuntura internacional y ciertos desajustes internos mostraban la fragilidad del proceso económico. Pero a estos problemas se sumarían rápidamente la presión tanto de los trabajadores para mejorar sus salarios como de los empresarios, que apuntaban a ampliar el margen de beneficios y la rentabilidad de sus empresas. Los trabajadores lograban acuerdos salariales con los empresarios y éstos comenzaban a violar el pacto recurriendo al mercado negro, a la remarcación de precios y al desabastecimiento. El pacto social se degastó rápidamente.

En 1975 asumía como ministro de Economía Celestino Rodrigo, hombre del entorno de López Rega, quien cambió drásticamente de rumbo devaluando la moneda un 100%, decretando tarifazos superiores a ese porcentual en los servicios públicos y eliminó los controles de precios sobre el sector privado. Este proceso, conocido como Rodrigazo, ocasionó una impresionante estampida de precios y salarios, una emisión monetaria desmedida, las corridas por el dólar y el sistema de indexación. La principal consecuencia de esta política económica fue la recesión generalizada, perceptible en el descontrol de los precios, la especulación cambiaria, la disminución del PBI y el deterioro del salario.

La Sociedad

 Según el Censo Nacional de 1970, Argentina tiene una población de poco más de 23 millones de habitantes y continuaba siendo un país escasamente poblado con una densidad que no alcanzaba a 10 habitantes por kilómetro cuadrado. La tasa de crecimiento anual de la población seguía descendiendo, siendo la más baja de la historia censal. Esta tendencia decreciente reconoce las mismas causas del período anterior, el casi completo agotamiento del proceso inmigratorio ultramarino, acentuando el proceso de argentinización de la sociedad. El dato novedoso de este proceso inmigratorio se relaciona con el notable aumento de la proporción de migrantes de países limítrofes sobre el total de residentes extranjeros en el país, de todas formas, esta migración nunca alcanzó la magnitud de la migración ultramarina. Una segunda causa de la tasa decreciente está vinculada al cada vez menor crecimiento vegetativo, consecuencia de la baja tasa de natalidad, cuyos índices descendieron. Esta baja se debía centralmente a la caída de la fecundidad y, por consecuencia, a la disminución del tamaño de las familias. Durante esta década continuó el proceso de envejecimiento de la población, donde los mayores de 65 años representaban ahora el 7% del total de habitantes. El índice de masculinidad bajó a 98,6% y, por primera vez en el siglo, estuvo por debajo del femenino, esto implicaba que en la población argentina comenzaban a ser mayoría las mujeres. Hacia 1970, el proceso de urbanización se había intensificado de tal manera que el 79% de los habitantes vivía en 602 aglomeraciones urbanas. Por supuesto continuaba el proceso de despoblamiento rural, especialmente desde el Noroeste y del Noreste. La tendencia a la urbanización se venía prefigurando desde hacía varias décadas, así como la concentración poblacional en unos pocos grandes centros urbanos, como consecuencia del proceso de radicación de los sectores secundarios y terciarios, esto es industria, comercio y administración pública. Se acentuó el sobredimensionamiento del Gran Buenos Aires, que siguió creciendo y su población se incrementó en un 35% en relación con 1960, siendo el principal foco de atracción migratoria, mientras en la Capital Federal prácticamente no aumentaba. Desde el punto de vista regional, las zonas metropolitanas y pampeanas seguían concentrando a la mayoría de la población, alcanzando el 73,5% del total de la población. En el mundo del trabajo, se percibe el crecimiento de la clase media con respecto a la clase obrera. Ahora bien, dentro de la población económicamente activa de los sectores medios se produjo el aumento del sector asalariado y la disminución del autónomo. La clase media asalariada fue absorbida principalmente por la industria, 22%, administración, 21% y el comercio 20%. Entre los sectores medios autónomos disminuyeron los transportistas y pequeños industriales y crecieron los comerciantes. Por el contrario, en la clase obrera se ensanchó el cuentapropismo y disminuyeron los asalariados.

Dentro del movimiento obrero comenzó a diferenciarse entre los sectores sindicales tradicionales y los combativos. El Cordobazo no modificó en lo inmediato las relaciones de fuerza en el seno del movimiento obrero, pero el asesinato de Vandor fue aprovechado por el gobierno para aplicar el estado de sitio y descargar una fuerte represión sobre la CGT encarcelando a algunos dirigentes. Las consecuencias del Cordobazo se irían vislumbrando con el desarrollo más sólido de una corriente combativa, cuyo fin no era solo el enfrentamiento con la patronal sino con las direcciones sindicales tradicionales vinculadas con el peronismo. La llegada del peronismo al poder y la consecuente aplicación del pacto social no fueron suficientes para frenar los conflictos sindicales que, por el contrario, se multiplicaron a la luz de las fuertes expectativas puestas por la clase obrera en eventuales aumentos salariales. Impulsados por los sectores más radicalizados (clasistas y peronistas combativos), se llevaron a cabo cientos de ocupaciones fabriles que, además de reivindicaciones económicas, establecieron una lucha frontal contra la burocracia sindical. Estas luchas cruzaron todo el gobierno peronista. La cultura estuvo durante estos años influida por la censura y la represión a manifestaciones juveniles, culturales, artísticas, etc. No obstante, el movimiento cultural de esta década fue realmente significativo, tanto por el nivel de creatividad como por la relación de algunas de sus manifestaciones con el compromiso político y social. La creatividad y la ruptura con las fronteras estéticas fueron notables. Simultáneamente surgió un movimiento cultural que involucraba a la música, el cine, la plástica y la literatura, caracterizado por el fuerte compromiso con los movimientos políticos e ideológicos que se sucedían en el país y en el resto del mundo. La mayoría de las manifestaciones estaban marcadas por un activo antiimperialismo y manifestaban su repudio a las diversas intervenciones norteamericanas formales (Vietnam, República Dominicana) o informales (CIA, FMI, Banco Mundial). Este proceso de compromiso con las manifestaciones artísticas se profundizó notablemente durante los primeros meses del gobierno peronista, cuando el lenguaje político y la denuncia social llegarían al cine comercial. La aparición de la Triple A y el agravamiento del clima de violencia y represión fueron restringiendo este movimiento cultural hasta su persecución total y desaparición con la llegada de la dictadura en 1976.

**6- La dictadura militar, 1976 – 1983**

En 1976 se instauró en la Argentina un gobierno autoritario y dictatorial que no reconoce antecedentes en cuanto a la magnitud con que se llevó a cabo la violación a los derechos humanos. Desde 1930, una sucesión de golpes de Estado encabezados por militares, y con mayor o menor consenso de la sociedad civil, había cometido graves atropellos en perjuicio de los derechos de los individuos: desde la supresión de los derechos políticos hasta la violación sistemática de la integridad de las personas a través de la tortura o de las detenciones sin proceso judicial. El Estado fue abandonando sus atributos naturales de regulador de los conflictos de la sociedad para convertirse en un Estado terrorista. El régimen dictatorial encabezado por el general Videla, con la consigna de combatir la subversión, cometió un verdadero genocidio que implicó la desaparición de miles de personas. Como quedó demostrado por varias investigaciones nacionales e internacionales, el genocidio fue una operación planificada y ejecutada por las tres ramas de las Fuerzas Armadas, bajo su plena responsabilidad y con la colaboración de sectores civiles de la sociedad.

La Política

 En el contexto del desgobierno de Isabel Perón, del descontrol de la violencia y de un fuerte vacío de la actividad política, el 24 de marzo de 1976 asumió el poder la Junta de comandantes en jefe integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier general Orlando Ramón Agosti. Los objetivos básicos planteaban generalidades sobre la restitución de los valores occidentales y cristianos, la reconstrucción de la Nación, la promoción del desarrollo económico y la erradicación de la subversión. Se mantuvo vigente el estado de sitio, se crearon consejos de guerra y se reinstauró la pena de muerte. La actividad de los partidos políticos tradicionales fue suspendida y los partidos de izquierda fueron prohibidos. Se intervinieron la CGT, la CGE, los gobiernos provinciales y municipales. El Parlamento fue suspendido y reemplazado por la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), formada por un representante de cada una de las Fuerzas Armadas. Los jueces de la Corte Suprema de la Nación fueron cesanteados. En su afán por clausurar la vida política y sindical, el gobierno congeló las cuentas bancarias de numerosos dirigentes políticos y gremiales a la vez que intervino los sindicatos más importantes como la Unión Obrera Metalúrgica, el sindicato de mecánicos, de telefónicos, la Asociación Obrera Textil, entre otros. La persecución a los sectores identificados con la guerrilla o simplemente con las organizaciones de izquierda fue implacable y desde el primer momento hubo detenciones y desapariciones. Solo en algunos casos aparecían los cuerpos de las víctimas. Sin embargo, estas situaciones no eran claramente visibles por la población, debido a la fuerte censura informativa impuesta por las autoridades, que prohibía explícitamente comentar o hacer referencia a temas relacionados con hechos subversivos. En el mismo sentido se prohibió la edición, circulación y venta de muchísimo material escrito (diarios, revistas, libros y folletos). Un importante segmento de la población, particularmente los sectores medios, había recibido con alivio el golpe de Estado pues suponían que las nuevas autoridades restaurarían el orden perdido durante la última etapa del gobierno peronista. Pocos pensaban, y menos aún se animaban a plantearlo públicamente, que la ruptura del orden institucional no resolvía el problema de la violencia y la corrupción generalizada. Los grupos de tareas conformados por miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Ejército, Armada, Aeronáutica, Gendarmería y Policía) multiplicaban su acción ilegal y paraestatal. Los secuestros se masificaron y las víctimas eran trasladadas a cualquiera de los más de 300 centros clandestinos de detención, donde eran cruelmente torturadas y generalmente ejecutadas. La operación represiva comenzó a salir de la oscuridad hacia fines de 1976, al menos en el exterior, ante requisitorias periodísticas sobre las violaciones de derechos humanos en nuestro país. Amnesty International publicó un informe donde se criticaba al gobierno por el tratamiento a los detenidos y por la falta de respeto a los derechos humanos. El gobierno rechazó la crítica y comenzó a plantear públicamente la existencia de una campaña anti argentina. La eficacia y la brutalidad de la represión ocultaban la magnitud de las desapariciones e impedían cualquier manifestación local al respecto. Sin embargo, el 30 de abril de 1977, un grupo de madres cuyos hijos habían desaparecido, se animaron a hacer pública su angustia y marcharon con pañuelos blancos en sus cabezas en torno a la Pirámide de la Plaza de Mayo, en reclamo por la vida de sus hijos. Nacían las Madres de Plaza de Mayo, convertidas desde ese momento en el centro de los reclamos por los desaparecidos en la Argentina.

En mayo de 1978 la Junta Militar anunció que finalizaría el período de excepcionalidad y, en consecuencia, el teniente general Videla abandona el cargo de Comandante en Jefe del Ejército. En junio el régimen vivió su momento de gloria a expensas de un acontecimiento deportivo, el Campeonato Mundial de Fútbol. El gobierno invirtió más de 500 millones de dólares para generar la infraestructura adecuada (construcción y remodelación de estadios, rutas, aeropuertos, modernización de las comunicaciones, etc.). Durante el mes que duró el acontecimiento, ganado por la Selección argentina, tuvo lugar impresionante movilización popular de apoyo al equipo nacional que, frente a la ausencia de cuestionamientos al gobierno, pudo aparecer como una manifestación de consenso popular al mismo. Durante 1979 comenzaron a evidenciarse públicamente los primeros síntomas de debilidad del gobierno en un contexto en el cual iban apareciendo las grietas al plan económico. Conflictos internos entre civiles y entre militares revelaban las tensiones existentes entre duros y moderados. Por otro lado, el gobierno se hallaba cada vez más presionado internacionalmente por el tema de derechos humanos, llegó al país una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, instalada en Buenos Aires, recibió numerosos testimonios sobre diversas formas de violación de los derechos humanos. La labor se realizó bajo presión del gobierno y de algunos medios de difusión que intentaron aprovechar la movilización popular que festejaba el Campeonato Mundial Juvenil en Japón para oponerla a los visitantes. "Los argentinos somos derechos y humanos" era el eslogan de entonces. Cuando comenzó a cambiar la coyuntura internacional debido a los triunfos conservadores de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y de Ronald Reagan en Estados Unidos, el gobierno militar ingresaba en su declive. La endeblez del sistema financiero emergió con la liquidación del Banco de Intercambio Regional en 1980, situación que se extendería rápidamente a otras instituciones generando desconfianza de los ahorristas e inversionistas.

En octubre de ese año, en medio de profundos enfrentamientos entre las tres armas, se designaba futuro presidente al general Roberto Viola para el período comprendido entre marzo de 1981 a marzo de 1984. El nuevo presidente asumía en medio de una situación compleja, caracterizada por la falta de consenso y de poder entre sus camaradas de arma, y el lento pero evidente resurgimiento de la actividad política y sindical. Viola intentó llevar adelante una política menos flexible desde el punto de vista político y trató de acercar al gobierno a políticos conservadores e incluso, liberó un poco la presión sobre los medios de comunicación. La economía era uno de sus puntos más débiles. Su ministro de Economía no pudo controlar la debacle económica dejada por su antecesor, caracterizada por quiebras de bancos y empresas, devaluación del peso y fuga de divisas. En un intento por frenar la caída del peso, se emitió un mensaje de advertencia, pero el dólar aumentó un 130% y el gobierno no pudo frenar la corrida financiera. La pérdida de poder del régimen era paralela al lento resurgimiento de la actividad política que vio nacer la Multipartidaria, integrada por los principales partidos políticos, a la vez que la CGT conducida por el dirigente Saúl Ubaldini le otorgaba un carácter combativo a la resucitada protesta gremial, decretando un paro general y huelgas con movilizaciones callejeras. Si bien estas manifestaciones no tuvieron un apoyo masivo, marcaron la reactivación del conflicto social.

Sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, el general Viola es desplazado por el general Leopoldo Fortunato Galtieri para completar el período presidencial del saliente. El nuevo presidente poseía un estilo tosco y soberbio. Con su famosa frase "las urnas están bien guardadas" evidenciaba su determinación de no poner plazos a la estadía militar en el poder. Es indudable que a Galtieri lo beneficiaba la coyuntura internacional. Había construido una sórdida amistad con el nuevo gobierno norteamericano de Reagan. Su paso por los Estados Unidos antes de asumir la presidencia había dejado una excelente impresión entre los sectores más conservadores, sobre todo por la participación contrainsurgente de los militares argentinos en los conflictos centroamericanos. Los frutos fueron inmediatos pues el gobierno norteamericano dejó de lado la política de derechos humanos de Carter y destrabó el embargo de armas a nuestro país. En lo económico, el proceso recesivo siguió su curso y la protesta social también.

El 30 de marzo de 1982 la CGT organizó una manifestación contra la política gubernamental, que tuvo eco entre la población, no obstante, la participación fue bastante espontánea. Ante la sorpresa, el gobierno recurrió a la única arma que tenía, la represión. Más allá de la relativa masividad del evento, ese día parecía haberse desencadenado el comienzo del fin de la dictadura, pero la aceleración del proceso se debió a un hecho de características totalmente diferentes. Dos días después de la movilización popular, el 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en Puerto Stanley (rebautizado Puerto Argentino) y ante la escasa resistencia de la reducida guarnición británica compuesta por 49 hombres, ocuparon las Islas Malvinas. Tomado el archipiélago, se procedió a enviar mayores contingentes de soldados. Las causas de esta trágica aventura militar se relacionan con la irresponsabilidad de los mandos militares y con su desesperación para continuar en el poder. El gobierno recurrió a esta alternativa, para alinear a las Fuerzas Armadas detrás de un objetivo de reparación histórica. A la vez, la maniobra permitiría encolumnar a una sociedad un tanto cansada de la experiencia militar en el gobierno, pero sensible al irredentismo malvinense. En este último sentido no se equivocaron, la gran mayoría de la sociedad manifestó un entusiasta apoyo a la decisión. Así se demostró durante las grandes concentraciones populares en ocasión de la ocupación de las islas. El 1º de mayo comenzó la guerra. La aviación argentina se enfrentó con cierta eficacia a la Armada inglesa que llegaba a las costas malvinenses el día 21 y desembarcaba. Las tropas argentinas, mal pertrechadas y alimentadas -y peor entrenadas- no podían oponer una resistencia seria a su enemigo. El 14 de junio las tropas argentinas se rendían incondicionalmente. En el medio quedaron los cientos de soldados muertos en combate y el cruel e innecesario hundimiento del crucero General Belgrano por parte de la Armada británica en aguas de zona de exclusión que provocó una gran cantidad de víctimas. La opinión pública, que había participado del burdo triunfalismo manejado hasta último momento por los comunicados oficiales con la complicidad de los medios de comunicación masiva, cambió rápidamente y el 15 de junio, en una concentración convocada por Galtieri, repudió vivamente a quien había vivado hacía solo 40 días. Esta vez la convocatoria terminó con una dura represión policial. El 17, Galtieri renunció a la presidencia de la Nación. No llegó a los 6 meses de gobierno. No caben dudas de que la derrota militar de Malvinas aceleró la caída de los militares. Las Fuerzas Armadas sintieron duramente el impacto de la derrota y apenas si pudieron articular el nombramiento del general Reinaldo Benito Bignone como presidente, sin el respaldo de la Armada y la Aeronáutica, que se retiraron de la Junta Militar. Así, el principal objetivo del nuevo gobierno era ganar tiempo para negociar su salida del poder de la mejor manera posible. Esta salida debía implicar un acuerdo con las fuerzas políticas en torno a evitar la investigación de hechos de corrupción, así como la responsabilidad militar en la guerra contra la subversión. Pero, la derrota de Malvinas y la aguda crisis económica y social habían dejado al descubierto las grietas de la dictadura militar y el gobierno de Bignone tenía serios problemas para atender todos los frentes: un sistema financiero en quiebra, reaparición de la inflación, caída de los salarios reales, un sector militar duro o el informe de la Comisión Rattenbach, donde se establecía la responsabilidad de los mandos militares por la derrota.

Esta situación obligó a aflojar los mecanismos represivos y comenzaron a aparecer públicamente los reclamos sectoriales: las Madres de Plaza de Mayo aglutinaron a su alrededor a las organizaciones de derechos humanos y sus marchas de los jueves alrededor de la Pirámide se convirtieron en un reclamo ahora escuchado por todos. Las organizaciones vecinales se multiplicaron e hicieron oír sus reclamos relacionados con los altos impuestos, los alquileres o los precios de los artículos de primera necesidad; los sindicatos emergieron del congelamiento impuesto por los militares y reaparecieron los conflictos y las huelgas para lograr aumentos salariales y la recuperación y normalización de los gremios intervenidos. Uno de los elementos más importante de este proceso fue el renacimiento democrático, el retorno de la política partidaria. La movilización adquirió, a diferencia de una década atrás, características absolutamente pacíficas en el objetivo de recuperar las instituciones y las prácticas democráticas. Así, se produjo un notable resurgimiento de los partidos políticos, especialmente el justicialismo y el radicalismo, debido, principalmente, a la participación masiva de los sectores juveniles, que fueron transformando las estructuras y convirtiéndose en canales de expresión de las demandas de la sociedad. Finalmente, el gobierno de Bignone estableció la fecha de elecciones para el mes de octubre de 1983, al tiempo que trató de crear un marco legal para proteger a los miembros de las Fuerzas Armadas ante posibles juicios por violaciones a los derechos humanos. En realidad, su intento apuntaba a promulgar una auto amnistía con el respaldo de los principales líderes políticos, que fracasó ante el rechazo de éstos y la fuerte presión de las distintas organizaciones de derechos humanos y de una sociedad movilizada que no estaba dispuesta a aceptar la impunidad.

En la Unión Cívica Radical emergió como el nuevo referente Raúl Ricardo Alfonsín, líder de la corriente interna Movimiento de Renovación y Cambio, creada para competir con el liderazgo de Ricardo Balbín. Alfonsín había sido uno de los pocos dirigentes que, al menos en la última etapa de la dictadura, criticó con firmeza a los militares, se opuso a la guerra y se preocupó por los derechos humanos. Venció a Fernando De la Rúa en las internas partidarias y, apelando al Preámbulo de la Constitución Nacional, sedujo a amplios sectores de la sociedad con su discurso, alejado del viejo esquema radical, en pro de la profundización de la democracia, la restauración de la justicia y la modernización del Estado y la sociedad. En el Partido Justicialista la transformación también fue importante en tanto su estructura partidaria debió prescindir del verticalismo al que lo había acostumbrado Perón. Sin embargo, no hubo un proceso de democratización interna y los viejos dirigentes provinciales y sindicales se adueñaron de la conducción, dirección y el control del partido. Lorenzo Miguel, líder de las 62 Organizaciones, se convirtió en el virtual jefe del peronismo, que eligió a ítalo Argentino Luder como candidato a presidente.

Fuera de estos dos partidos, ni la derecha ni la izquierda produjeron liderazgos destacables. La derecha formó la Unión de Centro Democrático, orientada por Álvaro Alsogaray, pero el fuerte compromiso de muchos de sus integrantes con la dictadura militar le restó peso en un momento en que la opinión pública manifestaba un sentimiento de fuerte repudio hacia los militares. Desde la izquierda, solo el Partido Intransigente liderado por Oscar Alende logró cierto peso, aunque buena parte de los sectores medios a los que podía aglutinar fueron arrastrados por el fenómeno de Alfonsín. Todo el año 1983 estuvo signado por la movilización política, desde las internas partidarias hasta las campañas electorales. Éste fue un hecho inédito desde el punto de vista de la movilización de masas. Cientos de miles de manifestantes concurrían a las diversas demostraciones partidarias, aunque la gran mayoría fueron convocados por el peronismo y el radicalismo, que polarizaron la elección de manera concluyente. La característica de las campañas de ambos partidos fue totalmente diferente. Alfonsín imponía su discurso enfatizando la democracia y la paz, el justicialismo se manejaba con un discurso poco actualizado y un eslogan "liberación o dependencia" que parecía anacrónico y vacío de contenido.

El 30 de octubre de 1983 Raúl Alfonsín, al frente de la Unión Cívica Radical, obtenía más de un 52% de los votos dando un triunfo histórico a la UCR ante el justicialismo que alcanzó el 40%, el resto de los partidos en su conjunto apenas alcanzó el 8% de los votos. Era la primera vez en casi 40 años que le ganaba una elección libre al peronismo. Una nueva etapa democrática se abría en la Argentina.

La Economía

STOP AND GO: La imagen de frenar y arrancar buscaba transmitir la sensación de que la economía no podía avanzar continuamente por su dinámica, si no que debía ser frenada para ordenar los desequilibrios. Lo que sucedía era que el sector más dinámico, la industria, consumía las divisas obtenidas por el sector que no mostraba capacidad de producir más, el campo, lo que llevaba a cuellos de botella. Las políticas aplicadas por los liberales contraían reduciendo salarios, consumo, inversión y gasto público. Todo esto era expresión de las limitaciones productivas, tecnológicas, organizativas y políticas internas. Las devaluaciones potenciaron la inflación, que fue de un promedio del 20/30% anual. El intento más serio de estabilización se realizó durante la gestión de Krieger Vasena, que la redujo a un 10% anual. Hacia el final de la Revolución Libertadora se dejaron de lado los objetivos antiinflacionarios, mediante la expansión desordenada del gasto público y la emisión monetaria. Durante el peronismo se congelaron o controlaron precios, y hacia marzo de 1976 aumentó la inflación por exceso de gasto público. Las devaluaciones de la moneda producían inflación, que se revertía con el freno al cambio, lo que generaba nuevas expectativas de devaluación. Se creaban corridas cambiarias o compras desproporcionadas de divisas en forma especulativa, que luego traía fuga de capitales, retiro de ese dinero al extranjero, que se reflejaba en la caída de las reservas del Banco Central y forzaba a esa entidad a realizar una devaluación para reducir la pérdida de divisas.

Impactos de la devaluación:

Alza del precio de las exportaciones => Alza del precio de las importaciones (necesarias para la industria) => alza del precio de los productos industriales finales => inflación => protestas sindicales para recuperar poder adquisitivo => aumento de las tarifas de los servicios públicos (para equilibrar las empresas del Estado).

El sistema financiero contó con una fuerte presencia reguladora del Estado, como tasas de interés negativas para los tomadores de crédito. Los ahorristas resultaban perjudicados porque, así como las deudas de las empresas se reducían por el solo paso del tiempo, lo mismo les pasaba a sus ahorros. Aparecieron formas de ahorro informal en circuitos irregulares, no bancarios, como inversiones en tierra o inmuebles.

La política económica implementada por la dictadura militar fue factible gracias al régimen represivo que impedían la manifestación de disenso, y también al aval otorgado por los grandes capitales internacionales que, a la vez, brindaba el único punto de apoyo a un gobierno que carecía casi de respaldos políticos. La política de achicamiento del Estado y especulación financiera, a la vez que buscó destruir la tradición del Estado intervencionista, impulsó un mercado de capitales a corto plazo y una absoluta libertad para el movimiento de divisas. Por lógica consecuencia se estructuró una tendencia a la especulación financiera, que generó grandes beneficios para el pequeño sector que participó en él. La conformación de este mercado financiero con una marcada dependencia del sector privado adquirió un poder determinante en las finanzas y la economía locales.

El nuevo ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, era un hombre de fluidos contactos con el poder económico local e internacional y, sin duda, esta circunstancia, sumada a la eliminación del disenso por parte de un gobierno autoritario, le otorgó una cuota importante de poder dentro del nuevo gobierno. La prueba palpable de su buena relación con los centros financieros internacionales se corroboró apenas asumió, cuando el FMI le otorgó préstamos por 400 millones de dólares. De esta manera el gobierno pudo superar la disponibilidad monetaria y la caída en cesación de pagos, así como encontrar nuevos préstamos y renovar créditos concedidos por los acreedores. Simultáneamente se crearon dos tipos de cambios: uno dirigido a regular las operaciones financieras y otro a las transacciones comerciales. El momentáneo reordenamiento de las reservas y de la circulación monetaria le otorgó a la administración económica el respaldo de los grandes intereses financieros internacionales. Uno de los objetivos prioritarios del plan económico era la disminución del déficit del sector público: para ello se congelaron los sueldos de los empleados públicos y se indexaron los ingresos impositivos para disminuir el desequilibrio presupuestario. A su vez, partidarios de las políticas recesivas apuntaron a la caída del salario real como factor de estabilidad. Consecuentemente se redujeron los salarios reales en forma destacable. Y si el poder adquisitivo de éstos cayó un 40% en relación con años anteriores, creció en cambio la acumulación empresarial y se reconstituyeron ampliamente los activos privados. Estas estrategias, sumadas a la liberación de precios, permitieron modificar los precios relativos, pero queda claro que la recesión perjudicó esencialmente a la producción y comercialización de los bienes de consumo.

En el contexto de un impresionante crecimiento de las operaciones bursátiles, se sancionó la ley que impulsó la reforma financiera. El objetivo perseguido por el equipo económico era, por un lado, brindar al Banco Central las herramientas para controlar la oferta y demanda de dinero, por otro, otorgar el poder a las entidades financieras para captar depósitos, dar créditos y fijar tasas de interés. La modificación del sistema financiero se completó mediante tres leyes: descentralización de los depósitos bancarios, de las entidades financieras y de la reforma financiera. En términos generales, se permitía la existencia de un mercado libre de dinero mediante el cual las tasas de interés estaban sujetas a la oferta y la demanda. Esta transformación económica del período estimuló el sistema financiero - especulativo. Hacia mediados de 1977 comenzó a reactivarse la inflación a consecuencia de la incidencia de los costos financieros sobre el sector productivo y, a la vez, sobre los índices de precios. Simultáneamente se produjo un alza de las tasas de interés a raíz de la demanda de dinero de las empresas públicas debido a la caída de la liquidez del mercado. La consecuencia más inmediata fue que el aumento del precio del dinero provocó un efecto recesivo y un descenso de la actividad productiva, provocando desocupación en dichos sectores. Por otra parte, la suba de las tasas de interés afectó directamente al sector externo de la economía local, debido a que este proceso provocó la llegada de capitales extranjeros que buscaban beneficiarse por los incentivos brindados por el mercado local. Ingresaron más de 2300 millones de dólares que, combinados con el superávit de la balanza comercial, generaron una aparente notable expansión de la base monetaria. Sin embargo, esta situación traía aparejados varios conflictos en el interior del bloque de poder. Uno de ellos involucraba al sector rural que vivía un momento excepcional no solo por una favorable coyuntura internacional (nuevos mercados) sino también por las transformaciones estructurales (mecanización). La política de sobrevaluación del peso provocó una fuerte retracción de las ganancias de los exportadores, que pronto comenzaron a presionar al gobierno para que modificara la política cambiaria y que perdió la puja contra el sector financiero que se veía favorecido por el retraso cambiario. Al mismo tiempo, se produjo un redimensionamiento y achicamiento industrial a partir de la elaboración de las pautas donde se permitió la reducción de la protección arancelaria a un sinnúmero de productos locales (cero en el caso de los bienes de capital) y la llegada masiva de las importaciones. Estas medidas afectaron la industria, que perdió la ya tradicional protección del Estado frente a la competencia de la producción industrial extranjera. El perjuicio alcanzó tanto a la industria de bienes durables como no durables. Esta política significó un duro percance para las empresas nacionales que no podían competir con importaciones de aranceles bajos y un tipo de cambio cada vez más retrasado. El mercado financiero obtenía otra victoria frente a la industria, lo que se evidenciaba con la caída del producto bruto. Fueron numerosas las plantas que cerraron o achicaron sus niveles de producción al tiempo que se llevó adelante una reestructuración del sector industrial que, a pesar del brusco descenso del índice de obreros ocupados, no supuso una mejora de la eficiencia. Hacia fines de 1979, la economía comenzó a mostrar síntomas recesivos coincidentemente con la caída del índice de precios, un fuerte aumento de las tasas de interés y la duplicación de la deuda externa. Pero los síntomas se convirtieron en crisis hacia 1980, cuando se produjo el cierre de varios bancos, que habían crecido a la luz de las medidas financieras alentadas por el gobierno. La convicción generalizada sobre el retraso cambiario y la desconfianza despertada por el sistema financiero provocaron una fuerte demanda de divisas y una fuga de depósitos.

Hacia mediados de 1980, en el contexto del conflicto provocado por la sucesión presidencial, el equipo económico intentó resolver algunas de las consecuencias del retraso cambiario para los sectores industriales, modificando algunas variables, y a la vez, modificando pautas cambiarias y decidiendo una devaluación del 10% y otras devaluaciones programadas hasta 1981. Pero la política económica fue modificada por los sucesores y éste fue el momento en que se visualizó el derrumbe del plan económico, particularmente cuando debió abandonarse la paridad cambiaria.

El nuevo ministro de Economía, Lorenzo Sigaut, debió asumir en medio de un rebote inflacionario, una generalizada fuga de divisas de los ahorristas, compra de divisas y disminución de reservas. La fuerte devaluación del peso resultó letal para empresarios endeudados en dólares, por eso el Estado nacionalizó la deuda privada a través de la acción del director del Banco Central, Domingo Felipe Cavallo y engrosó de manera notable la deuda de la Nación en su conjunto. Es indudable que había ocurrido una gran mutación en la economía argentina: en principio, además de remarcar la importancia adquirida por la deuda externa que había pasado de 8 mil millones de dólares en 1975 a 35 mil millones en 1980 (46 mil millones en 1983), tiene sentido recalcar que de este proceso había salido beneficiado un reducido sector financiero a la luz de la extracción de los recursos de los asalariados y los productores en general. A la vez, se generó una marcada concentración económica que no obedeció, como en épocas anteriores, a las inversiones extranjeras en el mercado interno, sino a la concentración de empresarios o grupos familiares nacionales (Bulgheroni, Fortabat, Macri, Pérez Companc) o multinacionales (Bunge y Born, Techint). Esta concentración se presentó en alguna rama de actividad en donde se había producido la reestructuración de la producción (automotriz, petróleo), o en la combinación de actividades industriales, de servicios, comerciales y financieras (algunos de estos empresarios contaban con sus propios bancos). Pero sin duda, uno de los datos clave para entender el éxito y el impresionante crecimiento de estas empresas fue su ventajosa relación con el Estado. Más concretamente, muchas de estas firmas se convirtieron en concesionarias de obras y prestadoras de servicios al Estado. Éste había efectuado una importante cantidad de obras públicas que abarcaba autopistas, centrales hidroeléctricas, estadios de fútbol y otras obras de infraestructura para el Campeonato Mundial de 1978. Estas obras fueron privatizadas y otorgadas a concesionarios privados en condiciones favorables para su explotación, tanto las condiciones establecidas (regímenes de promoción que permitían reducciones impositivas, avales para crédito barato, etc.) como los mecanismos de reajuste de acuerdo con el ritmo de la inflación. Algunos empresarios hicieron fortunas impresionantes con inversión y riesgos mínimos de su parte.

La política económica de Martínez de Hoz, cuyo mejor ejemplo parece representarlo el achicamiento de la red ferroviaria, tendió y logró, a achicar el rol del Estado en la economía al otorgarle una función subsidiaria y dependiente del mercado. Para disminuir el rol del Estado, se utilizó todo el poder estatal y se impuso por la fuerza la política liberal. El plan era atacar el corazón mismo de una política intervencionista iniciada luego de la crisis de 1930. El plan económico llevó adelante una política de destrucción subterránea de las empresas públicas, descalificándolas por improductivas e ineficientes, congelando los sueldos, manteniendo bajas a las tarifas y empeorando la calidad de los servicios prestados.

La Sociedad

 En 1980, la población argentina alcanzaba casi los 28 millones de habitantes. La tasa de crecimiento fue levemente superior al período intercensal anterior. El repunte parece haberse debido a un mejoramiento de la tasa de natalidad como consecuencia de un leve crecimiento de la nupcialidad y de un leve descenso de la tasa de mortalidad. Sin embargo, la Argentina seguía siendo un país escasamente poblado. La inmigración ultramarina había cesado completamente, aunque desde comienzos de los 70s había aumentado los migrantes provenientes de los países limítrofes.

Durante estos años continuó el envejecimiento de la población puesto que la franja etaria mayor a los 65 años alcanzó el 8,2% que se dio a expensas de la franja etaria intermedia (15 a 64 años). Al mismo tiempo, continuó la tendencia al descenso del índice de masculinidad. Tampoco se detuvo la ya secular tendencia al aumento de la urbanización, siendo ya el 83% del total. Consecuentemente se profundizo el despoblamiento rural, aunque a un ritmo menor. Respecto a la urbanización, se perciben algunos cambios: en principio, el Gran Buenos Aires creció a un ritmo inferior a la tasa de crecimiento nacional y descendió su capacidad de absorción de población. Pero tal vez el fenómeno más notable haya sido la urbanización acaecida en las mismas provincias tradicionalmente rurales a partir de un proceso de migración interprovincial. Regionalmente, el crecimiento de la población siguió teniendo como centro al área pampeana y metropolitana, aunque su tasa de crecimiento estaba por debajo de la tasa nacional.

En el mundo del trabajo, durante estos años se profundizó el crecimiento de la clase media, que pasó de representar el 41% en 1947 al 48% en 1980. Simultáneamente hubo un achicamiento de la clase obrera que, en el mismo período retrocedió del 59% al 52%. Entre los sectores medios aumentaba el porcentaje de asalariados como consecuencia del crecimiento del comercio y la actividad financiera, aunque disminuían los empleados públicos por la política de achicamiento del Estado. En un fenómeno inverso, entre la clase obrera disminuían los asalariados y se incrementaba el número de trabajadores autónomos, había más electricistas, lavanderas, mecánicos y peluqueros, pero era especialmente en la industria de la construcción (albañiles, peones, pintores, plomeros) donde se notaba el crecimiento del cuentapropismo obrero. Con respecto a la clase obrera industrial, se produjeron un marcado aumento de la concentración de trabajadores en plantas grandes y altamente tecnificadas, así como una mayor disgregación territorial visible en el crecimiento de la radicación industrial en provincias como Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires y Neuquén, al mismo tiempo que se acentuaba la desindustrialización de la Capital Federal. Este fenómeno contribuyó a atenuar las migraciones internas y hacia finales de los 70s se constata una disminución de los "recién llegados" en las áreas industriales del Gran Buenos Aires. En contraposición, aumentan los provincianos con varios años de residencia. A pesar de los graves problemas de la economía, durante los años de la dictadura militar la tasa de desempleo no creció sustancialmente. Los motivos parecen relacionarse con el aumento del cuentapropismo, la expansión de la industria de la construcción, la emigración al exterior de personal calificado o el retorno al hogar de una parte de la mano de obra femenina. Sin embargo, las cifras globales de la tasa de desempleo esconden la caída del empleo industrial y las diferencias regionales.

Por otra parte, el descenso del salario real no tuvo precedentes. Si en 1974 el salario mínimo superaba un 18% a la canasta familiar, en 1978 solo alcanzaba a cubrir un 57% de la misma. Ya en 1976 había descendido un 40% en relación con 1974, principalmente a causa del Rodrigazo. En el mismo lapso, la participación de los asalariados en el ingreso nacional se redujo del 48% al 30%. De esta dramática caída del salario no fue ajena la política salarial del gobierno militar: la suspensión de los derechos laborales y de las negociaciones salariales, así como los aumentos automáticos, le otorgaba al Estado un poder omnímodo. Decidía unilateralmente los aumentos salariales de acuerdo con el incremento de la producción o de los niveles de productividad. Por otro lado, como los reajustes se fijaban porcentualmente, cayeron más pronunciadamente los salarios menores y, de éstos, los estatales más que los privados. El menor poder adquisitivo de los salarios se vio agravado por el marcado deterioro del sistema previsional debido, centralmente, a que las obras sociales fueron quitadas del ámbito de los sindicatos y a la eliminación de la contribución empresarial al financiamiento previsional. Coherente con esta concepción, el gobierno militar disminuyó el gasto social al tiempo que comenzó a transferir el área de salud al sector privado.

El gobierno atacó no solo a los sectores más combativos del movimiento obrero sino también a la vieja estructura sindical, quebrando la tradicional forma de relación de estas estructuras con el Estado. Además, se desarticuló la estructura centralizada a nivel nacional del movimiento obrero. Para llevar adelante la tarea de desarticulación sindical, el gobierno dispuso de una serie de medidas legales, sancionando leyes represivas que apuntaban a prohibir las actividades gremiales, suspender el derecho a huelga, eliminar el fuero sindical especial, reimplantar la ley de residencia y garantizar la seguridad industrial con penas y sanciones para cualquiera que realizara medidas de fuerza. Simultáneamente otras leyes derogaron reivindicaciones logradas anteriormente: suspensión del Estatuto del Docente, eliminación de cláusulas de las convenciones colectivas de trabajo y anulación de una parte de las disposiciones de los contratos de trabajo. A la vez, se transfirieron las obras sociales sindicales al Estado y, de esta manera, se privó a los gremios de los aportes, que restaba no solo poder económico, sino desarticular el sistema de obras sociales en tanto red de unidad y solidaridad entre los trabajadores. Otro aspecto relevante del proceso de destrucción sindical remite a las diversas formas de encarar la represión. En primer lugar, se destaca la intervención directa de las Fuerzas Armadas en la represión. En tanto el Ejército consideraba la lucha reivindicativa como una forma de guerrilla industrial, se enviaban comandos militares directamente a aquellos lugares de trabajo donde existía algún tipo de conflicto. Fue frecuente la detención de activistas y delegados en las mismas plantas de trabajo. Más habitual que la intervención militar directa fue la represión paramilitar con objeto de desarticular la vanguardia obrera que se había constituido durante los últimos años. La acción terrorista paraoficial afectó a la totalidad de las estructuras sindicales de base puesto que la mayoría de los desaparecidos eran delegados y miembros de las comisiones internas. También existió la represión empresarial, donde muchos empresarios colaboraron activamente con la represión denunciando directamente a los activistas y delegados de sus plantas o ajustando internamente los mecanismos de represión.

El campo de la cultura no fue menos afectado por la represión que los otros niveles de la sociedad. La prensa oral o escrita, férreamente sometida al control de la censura, la escuela o la universidad se convirtieron en ámbitos acríticos en donde la libertad de pensamiento fue combatida, el cine, el teatro, la literatura y la pintura fueron todos espacios estrictamente vigilados por los funcionarios de la dictadura militar. También fueron espacios simbólicos manipulados por el régimen. Sin embargo, no podían ocultar el impacto producido en el exterior por el exilio de cientos de hombres de la cultura y por la desaparición o muerte de muchos de ellos.

**7- El retorno de la democracia, 1983 – 1991**

Los problemas de la transición democrática

El Dr. Raúl Alfonsín asumió el mando presidencial el 10 de diciembre de 1983. La asunción de Alfonsín se produjo en un contexto internacional relativamente favorable al desarrollo de las democracias viables en Latinoamérica. Estados Unidos había comenzado a apoyar el desplazamiento de las Fuerzas Armadas de los gobiernos de países sudamericanos como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, en favor de movimientos políticos democráticos. Alfonsín asumió en medio de un clima de optimismo y esperanzas por las consecuencias que traería la instauración de la vida democrática en la sociedad argentina. La democratización cultural fue un proceso que acompañó la renovación de los partidos políticos y todo tipo de movilizaciones populares, festivales musicales, manifestaciones teatrales y espectáculos cinematográficos. La eliminación de la censura en los medios de comunicación generó un inusitado clima de libertad e ilusión, que parecía augurar una época de bonanza y esplendor y que, al mismo tiempo generaba malestar en ciertos sectores militares y en sectores de la Iglesia. Además, el nuevo gobierno llegaba al poder menos como producto de un proceso de acuerdos entre políticos y militares para garantizar la transición a la democracia, que como consecuencia de la ominosa derrota en la guerra de Malvinas. Ese fue el hecho que puso en fuga a los militares y les quitó la posibilidad de negociar una retirada ordenada. Por lo tanto, el frente político que llegaba al gobierno tampoco había logrado acuerdos sustanciales acerca de las formas de ejercer la gobernabilidad, los modos de encarar las consecuencias sociales de las violaciones a los derechos humanos y las pautas a seguir en relación a la situación económica que, entre otros graves problemas, como el empobrecimiento de sectores populares –obreros, empleados, pequeños comerciantes e industriales, muchos profesionales y técnicos- arrastraba una gran deuda externa.

La Política

Cuando Raúl Alfonsín se hizo cargo de la presidencia, la agenda de problemas graves por resolver era demasiado amplia. Pero al amparo del enorme apoyo popular, los primeros tiempos de su gobierno transitaron por carriles relativamente exitosos. Dos años después de haber iniciado su gestión y en medio de los iniciales y benéficos efectos del Plan Austral, el oficialismo obtenía un amplio triunfo electoral que afianzó su mayoría en la Cámara de Diputados, aunque en la Cámara de Senadores tenía una representación minoritaria frente al Partido Justicialista. Uno de los aspectos más efectivos y convincentes del nuevo gobierno fue su política exterior, que mostró, desde el comienzo, su voluntad pacifista y de relativa independencia de los centros de poder mundial. Su política diplomática fue coherente y racional. Los reclamos de soberanía por Malvinas frente a Gran Bretaña, por ejemplo, recibieron el apoyo de una parte de la comunidad internacional en las votaciones en las Naciones Unidas. Y sin lugar a duda, muy notable en materia exterior fue lograr el acuerdo con Chile por el Canal de Beagle. El gobierno argentino mostró una enérgica decisión de acabar con ese viejo conflicto y contó con el apoyo del peronismo renovador. La propuesta obtuvo mayoría de votos y poco tiempo después, un acuerdo que fue denominado “Tratado de Paz y Amistad” era firmado por los dos países, lo cual sentó las bases para una paz definitiva con el país trasandino. La misma importancia tuvo el Acuerdo de Integración entre la Argentina y Brasil: un documento de carácter político que apuntaba principalmente a la cooperación económica entre ambos países. Se daban así, los primeros pasos hacia la formación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), al que poco tiempo después se sumarían Uruguay y Paraguay. La voluntad del gobierno argentino de diferenciarse de la política norteamericana comenzó a ser evidente con el reclamo de una solución política al tema de la deuda externa y quedó ratificada con la política sobre Centroamérica. El pico de mayor tensión en la relación con EE. UU. se produjo durante el viaje de Alfonsín, en 1985. Allí se enfrentó a su par estadounidense Ronald Reagan, al defender el Principio de No Intervención en relación con la política norteamericana en Nicaragua y al oponerse a apoyarlos en dicha contienda. En represalia, Reagan negó autorización para declarar en el Juicio a las Juntas a un exdiplomático acreditado en el país, así como también asumió la negativa a considerar la solución política por la deuda. Otras medidas diplomáticas del gobierno radical tuvieron orientaciones de esta índole, como por ejemplo la firma de una serie de convenios internacionales que fueron ratificados por leyes, como el Pacto de San José de Costa Rica del año 1969 que protege a los habitantes de los países firmantes en cuestiones de derechos y garantías, la Convención contra el Apartheid de 1973 y distintos acuerdos que aseguran el mismo trato a trabajadores y trabajadoras y condenan todo tipo de discriminación contra las mujeres. Cuando asumió Alfonsín, muchos sindicatos estaban intervenidos. Era necesario normalizarlos, convocando a elecciones para renovar sus autoridades. Uno de los temas centrales de la campaña electoral de la Unión Cívica Radical fue la denuncia de una “alianza militar-sindical” que se proponía limitar al futuro gobierno constitucional. Alfonsín intentó eliminar al “poder sindical”, tratando de democratizar las organizaciones gremiales para desestabilizar su potencial desestabilizador y aprovechando el desprestigio de la dirigencia gremial, agravado por la derrota electoral del peronismo y por la división en la cúpula dirigente. Buscando atacar el aspecto corporativo y poco democrático de las estructuras sindicales, el gobierno elaboró un proyecto de ley de Normalización Institucional de los Sindicatos que apuntaba a quitar la hegemonía absoluta de la llamada “burocracia sindical”. El proyecto pretendía dotar de representación a las minorías gremiales a partir de instaurar el voto secreto, directo y obligatorio de los afiliados, eliminar la reelección y nominar al Estado como fiscal de los comicios gremiales. La iniciativa provocó una dura oposición del sindicalismo, que fue respaldada por el justicialismo. El proyecto de ley presentado no logró la sanción del Congreso de la Nación: fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero rechazado por el Senado, donde los radicales perdieron por un solo voto de diferencia, al fracasar las gestiones con los senadores del Movimiento Popular Neuquino. Después del intento frustrado de democratización sindical, el gobierno radical siguió una política errática y debió soportar el acoso de la CGT. Fortalecida y reunificada, se enfrentó duramente al gobierno, llevando adelante trece paros generales. La sucesión de seis Ministros de Trabajo, cada uno de los cuales ensayó una política diferente muestra claramente la búsqueda infructuosa en este conflictivo terreno. Amenazas, paros, negociaciones frecuentemente ajenas a las necesidades de los trabajadores sirvieron para desgastar al gobierno radical y desalentar a los trabajadores. La significación de los paros y las movilizaciones es compleja: expresaron, por una parte, el descontento social; al mismo tiempo, la CGT aparecía como aliada con grupos empresarios y con la Iglesia, descontentos con el gobierno radical por otros motivos. A la vez, parte de la izquierda política apoyó con entusiasmo estas huelgas, en las que quiso ver algo distinto que la sola maniobra de la burocracia sindical. El gobierno de Alfonsín tuvo, inicialmente, una política decidida a resolver tanto la cuestión militar como temas referidos a la Justicia. Tres días después de asumir, el 13 de diciembre de 1983, se derogó la Ley de Amnistía que había sido implementada por los militares al final del gobierno. También se aprobó la posibilidad de interponer recursos de amparo contra las condenas impuestas por los militares, se modificó el Código de Justicia Militar, se derogó la legislación de facto, estableciendo castigos para quienes atentaran contra la vida constitucional y contra la democracia e incrementando las penas para quienes aplicaran cualquier tipo de torturas. Algunos militares que habían tenido reconocida responsabilidad en el secuestro y la desaparición de personas fueron encarcelados inmediatamente, como Ramón Camps, ex jefe de la policía de la Provincia de Buenos Aires; Jaime Chamorro, ex director de la Escuela de Mecánica de la Armada y Luciano Benjamín Menéndez, ex comandante del II Cuerpo del Ejército. También pocos días después de asumir la Presidencia de la Nación, Raúl Alfonsín firmó el decreto 187, por el cual se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) con los objetivos de reconocer centros clandestinos de detención, recabar información sobre modalidades y formas en que se procedió a secuestrar, torturar y hacer desparecer personas, recibir declaraciones testimoniales de personal en actividad o en retiro de las fuerzas armadas y de seguridad, revisar registros carcelarios y policiales e investigar delitos cometidos con los bienes de personas desaparecidas.

El problema militar y de los derechos humanos fue muy complejo e intrincado. Desde el comienzo, el gobierno debió enfrentar el difícil problema del disciplinamiento a las fuerzas armadas en el marco de la nueva vida democrática. Los militares no estaban muy predispuestos para esa subordinación. En el acto de asunción del nuevo jefe del Ejército, asistieron los generales Videla, Viola y Bussi, en lo que se interpretó como un acto de fuerza y provocación a la clase política, al gobierno y la ciudadanía y generó un profundo malestar en la sociedad. Los responsables del “Proceso” conservaban gran parte de su poder y no reconocían sus responsabilidades: reivindicaban su triunfo en “la guerra contra la subversión” y, a lo más, sólo estaban dispuestos a reconocer los “excesos” propios de una “guerra sucia”. Estas circunstancias debieron pesar en el ánimo del presidente, que limitó el juicio y castigo a los máximos responsables del genocidio. Se decidió juzgar a las cúpulas, es decir a los Comandantes en Jefe que dieron las órdenes y a los que cometieron delitos aberrantes. De esta manera fueron enjuiciados los integrantes de las tres primeras Juntas Militares y los máximos dirigentes de ERP y Montoneros. El gobierno mantenía una actitud ofensiva y a la vez de conciliación: simultáneamente que encaraba un juicio tan importante, liberaba a los subordinados apelando al principio de obediencia debida, tal como había propuesto en su plataforma electoral e instruía a los fiscales para que enviaran las causas a la justicia militar para cuyos efectos se había creado el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Dicha situación provocó conflictos con la justicia civil, que se vio desplazada por la justicia militar. Por un lado, impugnaba la doctrina de seguridad nacional, pero, por otro, tratando de pagar los menores costos posibles, intentaba juzgar a los responsables máximos y que las fuerzas armadas se ocuparan ellas mismas de juzgar cuadros militares involucrados en violaciones a los derechos humanos. Pero las Fuerzas Armadas no sólo no efectuaron ninguna autocrítica, sino que obstruyeron la labor de la Justicia y de la CONADEP.

En julio de ese mismo año, la CONADEP hace público un avance de su Informe de Investigación, el cual es emitido por televisión con el título Nunca Más. En septiembre, el organismo entregó al presidente Alfonsín un informe de 50 mil carillas que era categórico: allí se sostenía que "la dictadura había producido la más grande tragedia de nuestra historia para alcanzar la tenebrosa categoría de lesa humanidad" y habían sido "pisoteados los principios éticos de las más grandes religiones". El informe de la CONADEP refuta categóricamente la teoría de los excesos individuales y demuestra que los derechos humanos habían sido violados en forma orgánica y sistemática por el Estado entre 1976 y 1983. A pesar de las críticas que las organizaciones de derechos humanos le hicieron al gobierno por los sobreseimientos y leves condenas, el Juicio a las Juntas Militares que habían gobernado el país fue un hecho extremadamente importante: aportó pruebas categóricas sobre el genocidio y dejó abierta la puerta para la realización de futuros juicios. En 1985, en medio de fuertes y crecientes presiones militares, el gobierno promulga la Ley de “Punto Final”, que pone un límite temporal de dos meses a las citaciones de oficiales involucrados en violaciones de los derechos humanos, pasado el cual ya no se efectuarían más convocatorias. Varias cámaras federales (Tucumán, Córdoba, Bahía Blanca, Rosario, La Plata y Mendoza) postergaron la feria judicial de verano para atender las causas pendientes, donde quedaron procesados más de 300 oficiales. La ley provocó una fuerte reacción de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, partidos y grupos políticos, importantes personalidades de diversos ámbitos, etc.: se reclamaba “juicio y castigo a los culpables”. Por su parte, muchos oficiales militares se negaban a comparecer frente a la justicia civil alegando que estaban siendo juzgados políticamente.

En la Semana Santa de abril de 1987, el gobierno constitucional fue sacudido por un levantamiento militar que conmocionó a todo el país. Un grupo de oficiales de Campo de Mayo, encabezados por el Teniente Coronel Aldo Rico, se alzó en armas exigiendo el fin de las citaciones judiciales relacionadas con la violación de los derechos humanos. También reclamaban la reivindicación del Ejército, según ellos “injustamente condenado”. Aunque Alfonsín declaraba que no habría negociaciones con los sublevados y los políticos firmaban el Acta de Compromiso Democrático, por el cual se obligaban a defender a la democracia, el gobierno recurrió a una solución extrajudicial, ante el temor de más derramamiento de sangre. El oficialismo, sin saber aprovechar el respaldo unánime de la población civil, que se manifestaba espontáneamente en contra de los sucesos de Semana Santa, cedió a la presión militar y otorgó a los “carapintadas” lo que reclamaban. Lo que sería la Ley de Obediencia Debida, que exculpaba masivamente a los oficiales subordinados por los crímenes cometidos durante la dictadura. Si bien es cierto que con este gesto no se reivindicaban las acciones militares, el gobierno adquirió una imagen de debilidad al desandar el camino que había comenzado a transitar al comienzo del mandato de Alfonsín. Además, el problema militar estaba lejos de quedar resuelto. En enero de 1988, Aldo Rico huyó de su prisión y se sublevó nuevamente en un lejano regimiento del nordeste del país. En ese caso, la movilización civil fue mínima, aunque tampoco hubo ningún apoyo para los sublevados. A fin de año, una nueva sublevación encabezada por el coronel Seineldín reclamaba una amplia amnistía y la reivindicación del Ejército. En ese caso, los responsables fueron apresados.

La principal base política de Alfonsín fue obviamente su partido, la Unión Cívica Radical y, dentro de él, una línea juvenil que le otorgó una dinámica renovadora. Sobre esta base, Alfonsín transitó un sendero de aciertos y errores. Y si entre los primeros pueden destacarse su afán democratizador, la defensa por los derechos humanos, el anti-corporativismo y la convivencia pacífica (externa e interna), entre los segundos pueden nombrarse las permanentes contradicciones que tendrán la política económica, militar y sindical y algunos fallidos proyectos como el traslado de la Capital a Viedma o una reforma constitucional que apuntaba a la reelección presidencial. En su apoyo a la democracia, el comportamiento de la oposición también transitó aciertos y errores. El peronismo realizó al comienzo, bajo la hegemonía de sus dirigentes históricos, una oposición frontal al radicalismo. Pero la nueva derrota electoral de 1985 abrió el camino a los sectores renovadores liderados por Antonio Cafiero y José Manuel de la Sota, entre otros. Los renovadores intentaban convertir al justicialismo en un partido moderno y progresista. Este sector, jugó un papel importante apoyando al gobierno durante el alzamiento militar de Semana Santa, pero cambió a partir del triunfo parlamentario nacional de 1987 y el triunfo en las internas de Menem sobre Cafiero, en 1988. Y los problemas económicos generarán una importante pérdida de consenso al gobierno.

Durante aquellos primeros años de democracia, la centroizquierda estaba representada por el Partido Intransigente e interpelaba a los mismos sectores sociales que el radicalismo y el peronismo renovador. Pero no tenía un programa claramente definido y su caudal electoral se fue diluyendo. La centroderecha, liderada por Álvaro Alsogaray, aprovechó la dinámica conservadora a nivel mundial con un discurso anti estatista y privatizador, que fue apoyado por importantes medios de comunicación y fue creciendo a medida que se deterioraba la imagen de Alfonsín y de su gobierno.

Carlos Saúl Menem se convirtió en el candidato presidencial del justicialismo en 1989, liderando un conglomerado de dirigentes y corrientes internas muy heterogéneas dentro del peronismo. En sus discursos, apelaba al tono populista clásico del movimiento, pero dirigido ahora más a los sectores pobres que a la clase obrera en su conjunto. En el contexto de un rápido deterioro del gobierno de Alfonsín, caracterizado por un notable aumento del costo de vida y el descontrol de la economía, ocurren, en mayo de 1989 las elecciones presidenciales, donde el Frente Justicialista Popular consigue una victoria contundente, imponiéndose en todas las provincias y obteniendo la mayoría absoluta en el Senado y casi la mayoría en Diputados. Apenas conocidos los resultados electorales, comenzó a plantearse la posibilidad del adelanto en la entrega del mando presidencial, que estaba prevista para el 10 de diciembre. La situación económica se deterioraba día a día y el Ministro de Economía hablaba de “terrorismo económico”. El aumento descontrolado de precios desembocó en un proceso hiperinflacionario y hacia fines de mayo comenzaron los saqueos en Córdoba, Rosario, Gran Buenos Aires, Salta y en varios centros urbanos. Para contener los desbordes, el gobierno apeló al estado de sitio y a la represión cuyo saldo fue de 14 muertos, un centenar de heridos y decenas de detenidos, en cifras oficiales. La situación del gobierno radical, a más de 6 meses de la entrega del mando, se tornó insostenible. El costo de vida había trepado enormemente. El presidente intentó un plan de emergencia que fue rechazado por quienes conformarían el nuevo gobierno. Y mientras los factores de poder económico ejercían presión, Menem optó por no respaldar a un muy debilitado Alfonsín, quien finalmente renunció a la Presidencia y adelantó la entrega del mando para julio de 1989. Cinco meses antes de lo previsto, Carlos Saúl Menem se hizo cargo de la presidencia de la Nación e inició su mandato en un clima de incertidumbre.

El rumbo seguido por la política económica de Menem se apartó totalmente de la tradición peronista (en especial de la del período 1946-1955). El Estado no desempeñó la función dirigista de la economía y reguladora de los conflictos sociales. El objetivo central no fue promover la industrialización orientada al consumo interno, sino que fue dirigida principalmente a fomentar la exportación. El nuevo presidente encontró el apoyo de los principales grupos empresarios locales y de los organismos financieros internacionales, cuyas pautas de “ordenamiento económico” se cumplirían estrictamente.

La Economía

Cuando asumió el gobierno de la Unión Cívica Radical, la situación económica presentaba algunos problemas, que se habían agravado durante la última dictadura militar: alta inflación; elevado déficit fiscal acompañado de una baja recaudación impositiva y la falta de crédito interno y externo; deuda externa creciente heredada también de la anterior dictadura militar, cuyos servicios consumían buena parte de los recursos del Estado. En fin, una economía estancada.

Durante el primer año de gobierno, el Ministro de Economía fue Bernardo Grinspum, que aplicó una fórmula similar a la usada en la presidencia de Illia, entre los años 1963 y 1966. Se trataba de la orientación económica que la UCR compartía con el peronismo de la primera época y que en este caso no tuvo efectos positivos. La aplicación de las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) no ayudó, pues se produjo una nueva aceleración de la inflación, caída de los salarios, disminución de la inversión y recesión económica, que se profundizó con una nueva devaluación de la moneda. La situación fiscal tampoco mejoró, ya que, aunque se redujo el gasto público, esto fue en parte diluido por los efectos de la inflación sobre la recaudación tributaria real. En los primeros meses de 1985, la situación económica se deterioró y el nivel de las tensiones sociales y políticas se agravó. La CGT abandonó el diálogo con el gobierno.

A principios de 1985 ocupó el Ministerio de Economía Juan Sourrouille, quien el 15 de abril anunció la aplicación de un nuevo plan económico, al que calificó de “economía de guerra”: es decir, que exigiría grandes sacrificios a la población. Era el llamado “Plan Austral”, que de acuerdo con la versión oficial se proponía la estabilización de la economía para crear condiciones que permitieran proyectar transformaciones más profundas de crecimiento. Con ese propósito se tomaron un conjunto de medidas antiinflacionarias, se cambió la moneda y el tradicional “Peso” fue reemplazado por el “Austral”; se congelaron los sueldos; se trató de mejorar la recaudación fiscal –es decir, el cobro de los impuestos- y se produjo una drástica reducción de los gastos del Estado. El gobierno se comprometió a no emitir moneda para financiar el desequilibrio de las cuentas públicas. Se incrementaron los impuestos al comercio exterior y se definió una reforma impositiva que fue enviada al Parlamento. Además, se realizaron acuerdos con el FMI y el Club de París, buscando aliviar la presión de los acreedores externos. Aunque algunos sectores, como los sindicatos, rechazaron el Plan Austral, la reacción de la población fue expectante y tuvo cierto grado de confianza, de modo que el congelamiento de los precios fue respetado en líneas generales y al principio se registró una baja de la tasa de inflación y una acelerada recuperación de los niveles de actividad industrial -cuya producción estaba destinada hacia el mercado interno- y que era impulsada, en parte, por la mejora en el poder adquisitivo del salario. El impacto del Plan Austral se sintió no solo en el flanco económico. En el aspecto político favoreció la consolidación del sector alfonsinista y permitió salir airoso de la prueba electoral de 1985. Sin embargo, a fines de ese mismo año retornó la inflación, se renovaron los reclamos de aumentos salariales y crecieron las dificultades en el sector externo, debido, principalmente al fuerte peso de la deuda externa.

El nuevo programa además preveía una segunda parte, que incluía privatizaciones de empresas públicas y medidas de apertura económica. Esa parte no se aplicó totalmente durante el gobierno de Alfonsín debido a las resistencias de la oposición, especialmente las del Partido Justicialista, y a las propias vacilaciones del oficialismo ante un programa que no era acorde con la tradición estatista y nacionalista de muchos de los dirigentes de la Unión Cívica Radical. Además, la cúpula del radicalismo sabía que la aplicación del nuevo programa tenía un costo político que no se decidió a pagar. Finalmente, el “giro realista” (como muchos llamaron al “plan austral”) fue decididamente implementado por el gobierno siguiente, el de Carlos Saúl Menem.

El año 1987 fue decisivo para el gobierno de Alfonsín. Mientras la situación económica empeoraba, aumentó considerablemente la presión de los militares y del movimiento sindical. Entre julio y octubre de 1987, el gobierno lanzó un nuevo plan económico, creando un nuevo impuesto con el objetivo de equilibrar el déficit fiscal. Una parte importante de ese déficit era producido por las empresas estatales ferroviarias, aéreas y de servicios como teléfonos, luz y agua; por los servicios sociales, por el peso de los pagos al exterior y por las altas subvenciones que recibía una parte del sector empresarial. La situación era crítica y había que ensayar diferentes medidas para resolverla, por ejemplo, comenzaron a proponerse proyectos de privatización: en 1988, se propuso la privatización parcial de algunas empresas del Estado, como ENTel o YPF. El argumento privatizador se centraba en la incapacidad de las empresas estatales para obtener las inversiones necesarias.

En agosto de 1988 el gobierno lanzó un nuevo plan económico –el “Plan Primavera”- que procuraba una vez más detener la inflación, que era cada vez más elevada. Preveía el congelamiento de precios, salarios y tarifas más el recorte de los gastos estatales. Contrariamente a lo esperado por el gobierno, se generó un fuerte proceso especulativo que erosionó desde el comienzo las expectativas generadas y tampoco dio buenos resultados. Hacia fines de 1988 la situación económica se fue agravando cada vez más hasta que en febrero de 1989, una corrida especulativa provocó una nueva devaluación del Austral que provocó la pérdida de los ahorros de millares de personas. Inmediatamente se desencadenó un proceso hiperinflacionario que repercutió gravemente sobre precios y salarios y provocó la escasez de artículos de primera necesidad. La consecuencia más dramática de esta situación fue la ola de saqueos a supermercados y negocios de comestibles. La gente se aglomeraba en los supermercados tratando de obtener los artículos de uso cotidiano, cuyo precio variaba constantemente. Los últimos meses de 1988 y la primera parte de 1989 transcurrieron en un clima económico, político y social tenso y enrarecido. Como vimos, el gobierno radical no tenía capacidad para controlar la economía ni margen para maniobrar políticamente. A fines de mayo, la hiperinflación siguió provocando episodios dramáticos, que mostraban la desesperación de los sectores de menores recursos en las zonas más pobres del país. El 8 de julio, el gobierno radical pasaba anticipadamente el mando a los justicialistas, que dos meses antes habían obtenido un triunfo rotundo en las elecciones generales. Este traspaso del mando de un presidente constitucional a otro era lo más novedoso ya que no ocurría desde 1932 (cincuenta y siete años atrás).

Por un lado, el [**proteccionismo**](http://economipedia.com/definiciones/proteccionismo.html) y el excesivo intervencionismo del Estado, y por otro, la incapacidad del gobierno para controlar el déficit público fueron los problemas que identifico el **consenso de Washington** y a su vez recomendó estos proyectos:

1. Disciplina fiscal: Se consideró que los altos[déficits](http://economipedia.com/definiciones/deficit.html) que habían acumulado casi todos los países de América Latina habían conducido a desequilibrios macroeconómicos que hicieron entrar a la región en problemas [inflacionarios](http://economipedia.com/definiciones/inflacion.html).
2. Reordenación de las prioridades del gasto público: Para hacer frente al déficit fiscal se optó por reducir el gasto, más concretamente, redistribuirlo desde subsidios no justificados hacia la sanidad, la educación e infraestructuras.
3. Reforma tributaria. basada en aumentos de los impuestos, sobre una base amplia y con tipos marginales moderados. Es decir, el impuesto adicional que se pagaba por disponer de más renta era bajo.
4. Liberalización de las [tasas de interés](http://economipedia.com/definiciones/tipo-de-interes.html) para que fuesen establecidas por el mercado.
5. [Tipo de cambio](http://economipedia.com/definiciones/tipo-de-cambio.html) marcado, también, por el mercado.
6. Liberalización del comercio: Para llevar a cabo una política económica orientada al exterior también se creyó necesario liberalizar las importaciones. La idea de proteger las industrias nacionales frente a “las de fuera”, se consideró un obstáculo al crecimiento.
7. Liberalización de la inversión extranjera directa y así aportar capital, tecnología y experiencia.
8. Privatización: se basaban en la idea de que la industria privada está gestionada más eficientemente que las empresas estatales.
9. Desregulación: se consideró una manera de fomentar la competencia en América Latina, ya que era donde se encontraban las economías más reguladas del mundo.
10. Derechos de propiedad: en una región donde los derechos de propiedad eran muy inseguros, se optó por implantar unos derechos garantizados como en EEUU.

Menem hizo toda su campaña levantando las banderas históricas del Peronismo (nacionalismo, mercado-internismo, industrialismo, etc.). Asumió con el lema de “revolución productiva y salariazo”, esto es, volver a levantar las persianas de las fábricas (producto de la desindustrialización de la dictadura) y resolver los problemas del salario. Asumió en Julio de 1989 y dos días después traicionó todo lo que había prometido; adoptó un programa ultraliberal. El eje del programa económico de Menem y Cavallo (su Ministro de Economía), ya no pasaba por las exportaciones agrarias, como los gobiernos anteriores, sino que ahora pasaban por atraer masivamente capitales extranjeros con políticas ultraliberales. El plan económico de Menem no tenía nada que ver con el proyecto peronista, es un plan dirigido al sector financiero, y particularmente, al capital financiero. Los grandes beneficiarios no van a ser los grandes terratenientes ligados a la producción agropecuaria, sino que van a ser las grandes compañías extranjeras ligadas a las finanzas, y las compañías privatizadas y los bancos. Con la llegada de Menem y Cavallo, se produce un cambio de hegemonía de las clases dirigentes en Argentina. Su primer ministro de economía, Rapanelli (ex gerente de una empresa monopólica – oligarca) No coincidía con el discurso político menemista. El segundo ministro fue Erman Gonzalez, quien implemento el plan BONEX. (Transformar en bonos los depósitos bancarios). Los planes de ambos ministros fueron fallidos, la inflación continuaba afectado al bolsillo de los trabajadores. En 1991 asumió Cavallo.

De la identidad peronista a la gestión neoliberal: El peronismo se basó en su concepción original como una fuerza política en búsqueda de la equidad social y de estrecha relación con el sindicalismo para la mejoría de los sectores asalariados y con menores recursos. Las luchas y movilizaciones eran realizadas para combatir a las fuerzas extranjeras y a los sectores concentrados del capital que eran los “enemigos” del peronismo. Sin embargo, el gobierno menemista significo una ruptura con los valores peronistas. Las medidas llevadas a cabo durante la época de Menem se encuadraban en la ideología neoliberal, que beneficiaba al capital frente a la base, es decir pertenecía al “enemigo” del peronismo. El sindicalismo, herramienta que tenía peso para el movimiento peronista, sufrió todo lo contrario. Las políticas de apertura económica que se contraponían al intervencionismo estatal y por ende generaron niveles altísimos de desocupación, la desregulación de las relaciones laborales, los contratos “basura”, la caída de los salarios frente al capital y la privatización de empresas públicas generaron malestar y escasa capacidad de acción, por ende, el debilitamiento de los sindicatos.
La década menemista y la globalización: La apertura económica y las privatizaciones de empresas nacionales fueron eje de la época. Durante el gobierno de Menem no solo el proyecto neoliberal fue el que creo malestar en la sociedad sino también los efectos de las falencias estatales. En relación con las importaciones, el estado nunca puso un control aduanero seguro para que las industrias nacionales puedan seguir compitiendo. La globalización comercial se encontraba frente a una burocracia ineficaz, relegando a las industrias nacionales a la inestabilidad e ineficiencia de los aparatos estatales. Con esto, la desregulación daba lugar a la violación de leyes y corrupción.
Esto dio por resultado un estado cada vez más débil frente a actores socioeconómicos que eran viejos empresarios o nuevos inversionistas con cada vez mayor capital y que da como resultado mayor capacidad de imponer decisiones en base a sus intereses. Estos nuevos inversionistas frente a los que se encontró el estado eran fuerzas extranjeras con mayor fuerza de negociación.
Las privatizaciones impidieron al estado generar mecanismos que le permitiesen controlar la orientación de las actividades económicas y sociales. A la gestión de empresas públicas se las criticaba de generar gastos y costos altos, pero no se debatió si luego de privatizarlas el estado podría tomar decisiones en materia de orientación y planificación. Además, los actos de corrupción en los organismos creados para supervisar a las entidades privadas eran recurrentes, lo que deterioro aún más la figura estatal. Esto dejó al estado con menos instrumentos para responder a las demandas sociales, las privatizaciones terminaron con la posible acción estatal. La evasión impositiva, es decir tributaria, se vio reflejada en los organismos que se encargaban de organizarla. Esto permitió a los agentes extranjeros evadir las condiciones tributarias y lo que resultó fue una incapacidad del estado de imponerse para que no se trasgredan las leyes. La política económica neoliberal se completó con la convertibilidad del 1 a 1 en donde el estado recurrió al endeudamiento externo para sostener la valoración de la moneda nacional igual al dólar. Para el gobierno menemista recurrir al endeudamiento generaría un crecimiento en donde luego la deuda y sus intereses podrían ser saldados. Este sistema genera una dependencia en la cual los estados pierden poder para enfrentar con sus políticas económicas las acciones perjudiciales para su economía. El estado fue un administrador que uso el poder legal para ponerlo a disposición de los poderes económicos predominantes y permitir su ampliación y concentración, favoreciendo un desarrollo social desigual y relegando a la sociedad a la arbitrariedad de los poderes económicos.
El crecimiento de la deuda externa contribuyó a limitar aún más las capacidades del estado para tomar decisiones distintas a lo que deseaban los intereses del “capital”. Weber señala que los países deudores al ver limitadas sus capacidades de acción deben ajustarse a lo que conviene a los países acreedores.
Los actores internacionales gozan de una exterioridad al sistema político que rige la sociedad sobre la cual actúan.  Efectos de tal exterioridad sobre la estructura política y social:

1. Los empresarios no tienen por qué responder a dirigencias políticas, ya que las embajadas de los gobiernos extranjeros son más eficaces para negociar con el débil estado local.
2. El libre mercado permite que jueguen con su permanencia en el país, ya que su movilidad se convirtió en un elemento de presión para que mientras que los gobiernos cedan a sus demandas, el malestar social se incremente y debilite aún más al estado debilitando su legitimidad.
3. La continuidad de los logros que obtuvieron les resulta importante, para seguir acrecentando su poder.
Los empresarios de la globalización deterioran las instituciones, los gobernantes frente a la opinión pública, para conseguir intereses, como lo hicieron durante la época menemista.

Los ejes básicos de la política menemista fueron:

Por un lado, la política de la convertibilidad. Establecía una paridad fija entre la moneda nacional y la estadounidense, a razón de un [dólar estadounidense](https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense) por cada peso, se llamó popularmente "el uno a uno". Tenía como objetivo principal el control de la [hiperinflación](https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperinflaci%C3%B3n). Con la Ley de Convertibilidad, el [Banco Central](https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_de_la_Rep%C3%BAblica_Argentina) tenía la obligación de respaldar a cada peso en circulación con un monto equivalente de oro o divisas, de manera que cada peso en circulación pudiese ser canjeado, en cualquier momento, por un [dólar estadounidense](https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense). De esta manera, se procuraba evitar que el Estado emita dinero para solventar el déficit público. La creación y la absorción de dinero quedan limitadas al ingreso y egreso de divisas, lo que transforma la oferta monetaria en una variable externa, que no puede ser controlada por la política económica. Consecuencias: efectivamente se cumplió el objetivo principal, que era detener la inflación. Pero al impedir la devaluación de la moneda, se produjo el abaratamiento de la fuerza de trabajo, es decir, se devaluó el trabajo, los salarios, las condiciones laborales. La Argentina se hizo “competitiva” sobre la base del hambre, la desocupación masiva, del recorte salarial, de la eliminación de las conquistas laborales y de protección social, de la precarización y flexibilización laboral, de los despidos, etc. La política del dólar barato por la paridad fija desfavoreció a las exportaciones y favoreció a las importaciones, dejando un mercado interno deteriorado, invadido por los productos extranjeros. Además, para sostener esta política de convertibilidad libre, se necesitaba tener constantemente dólares en el Banco Central, lo que provocó el endeudamiento externo para garantizar el libre cambio de pesos a dólares (la deuda externa argentina subió de 60m dólares a 160m). El Estado lo que hizo fue legalizar la fuga masiva de capitales y la Convertibilidad fue la responsable del vaciamiento de las reservas del país.

Se llevaron adelante políticas de privatización; Se privatizaron las empresas públicas, con la justificación de que tales empresas se encontraban endeudadas y creaban déficit. Las empresas estatales que sufrieron este proceso fueron, Aerolíneas Argentinas, los servicios públicos, como el agua, la electricidad, el gas, el teléfono; también los canales de televisión, los ferrocarriles, subtes, los puertos, las rutas, el petróleo, empresas siderúrgicas, el correo argentino. Además, se privatizó la educación pública, es en estos años donde nacen las universidades y colegios privados: la educación se convierte en un negocio, dejó de ser una responsabilidad pública. Y se privatizó la salud pública, las AFJP (jubilaciones y pensiones). Consecuencias: De esta manera, el Estado quedó sin control sobre sus fuentes energéticas, su transporte, sus principales producciones y servicios públicos. Se produjo una diversificación y multiplicación de la dependencia argentina, porque no sólo las empresas públicas fueron compradas por los estadounidenses, sino también por franceses, italianos, chinos, rusos, ingleses y españoles. Aumentó enormemente el peso del capital extranjero e implicó la pérdida de soberanía nacional en esferas de decisión estratégica del país. No sólo fue un proceso de privatización, sino también de extranjerización del aparato productivo; fue la entrega de la soberanía económica nacional.

Se implementó la política de desregulación o apertura comercial y financiera. Se aplicaron medidas tendientes a eliminar toda protección comercial, como, por ejemplo, se bajaron drásticamente los aranceles de importación, y así el mercado interno comenzó a ser invadido por los productos importados. Fue un período en el que, lejos de industrializarse, se agrava y profundiza la política de desindustrialización de la dictadura. Se desregularon las finanzas también, para favorecer el libre ingreso y, sobre todo, el egreso de los capitales extranjeros, garantizado ello por la política de Convertibilidad y de paridad fija y dólar barato.

Menem llevó adelante la política de flexibilización y precarización laboral, que significó la eliminación de las conquistas laborales ganadas por el Movimiento Obrero en los años ’40 y ’50; se destruyeron los convenios colectivos de trabajo y los derechos de los trabajadores: los obreros son empleados por tiempo determinado y a prueba, se los despide sin indemnizaciones, no adquieren antigüedad, no tenían ningún beneficio.  Menem, impulsó la industria pesada para favorecer el comercio con el exterior, favoreció al capital extranjero antes que el nacional. Aplicó una política ultraliberal, dirigida al mercado externo y favoreciendo a la burguesía intermediaria (subordinada y asociada a distintos capitales extranjeros). Con respecto a la soberanía política, Menem, lejos de mantenerse fuera de las políticas estadounidenses, mantuvo “relaciones carnales” con dicho país; se alineó a las políticas del Consenso de Washington, que incluían la liberalización financiera y comercial, apertura a las inversiones extranjeras, privatización de las empresas estatales, desregulación de los mercados, etc. El gobierno adoptó una política ultraliberal y de apertura comercial y financiera, que favoreció la fuga masiva de capitales al exterior y que además sus políticas llevaron a un aumento muy importante de la deuda externa del país.

Beneficiados de los 90: Importadores, Empresas grandes que dejan de producir y pasan a importar (por las mayores ganancias), Empresas de servicios (Que fueron privatizadas).

Perjudicados de los 90: Las empresas industriales, desaparecieron ramas como la textil, la siderurgia, la juguetera. Clase media y baja afectada por la gran desocupación creciente.
Gracias a las importaciones se generaron mejores tecnológicas que provocaron desempleo. (Empresarios reemplazaban maquinas por empleados o achicaban el staff)

Aumento la concentración y centralización del capital. Las empresas grandes fueron desplazando y absorbiendo a las más pequeñas y débiles. Generando empresas más grandes (concentración) y encargadas de más ramas de la economía (centralización). Gran proceso de extranjerización de la economía, en base a las políticas de apertura económica, desindustrialización, privatización y desregulación.

La sociedad

En el mundo del trabajo, entre los años 1983 y 1984 se produjo un descenso de la desocupación, que se ubicó entre un 3,9 y un 4,4%. La cifra se elevó en 1985 al 6,3% para mantenerse en ese nivel hasta 1989, cuando en medio de una crisis hiperinflacionaria se elevó a un 8,1%. Los índices se redujeron entre 1990 y 1992 al 6%, sin embargo, a partir de 1993, los índices de desocupación comenzaron a tornarse preocupantes y se agravarían debido a la segmentación y la flexibilización laboral, llegando al 18% en 1995. La población argentina en 1990 alcanzaba los 32.615.528 habitantes. La tasa de crecimiento desde el censo anterior fue el 14.7 por mil, siendo sensiblemente inferior al crecimiento del período censal 70-80, debido en parte al declive de la tasa de natalidad. No hubo aportes sustanciales de la inmigración ultramarina, que ya había cesado en el período anterior. El porcentaje de extranjeros radicados en el país era de 5%, siendo la mitad de ese porcentaje quienes venían de países limítrofes, fundamentalmente de Paraguay, Bolivia, Uruguay y Chile. El envejecimiento de la población siguió aumentado y la esperanza de vida al nacer en el período 1985-1990 era de 71 años, aunque muy diferente entre hombres (67,6) y mujeres (74,6). El índice de masculinidad siguió con la tendencia decreciente y se ubicó en el orden de 95,6 hombres por cada 100 mujeres. En el mismo sentido, la tasa de natalidad bajó hasta el 21,8 por mil habitantes y la tasa de mortalidad se mantuvo en torno al 8,5 por mil. El analfabetismo se redujo de un 5,8% al 3,7% durante la década del 80. El proceso de urbanización se acentuó y, en 1990, 88,4 de cada 100 habitantes del territorio nacional vivían en centros urbanos. Consecuentemente continuó también la urbanización de casi todas las provincias, aunque con características particulares y diferentes de períodos anteriores.

La etapa del proceso de industrialización argentino, que se inicia con posterioridad a la crisis de los años treinta y que se extiende hasta la asunción del gobierno militar en 1976, se ha caracterizado por el desarrollo de industrias sustitutivas de importaciones, dirigidas básicamente al mercado interno y que se desenvolvieron en un fuerte esquema proteccionista, basado en restricciones cambiarias y niveles arancelarios muy elevados. En este proceso, el Estado jugó un papel fundamental, tanto en la transferencia de ingresos hacia el sector industrial −subsidios, créditos promocionales, provisión de servicios− como en su rol de regulador de conflictos sociales y árbitro de las pujas redistributivas. El crecimiento de la participación del sector industrial en la economía del país fue la característica central del desarrollo de esta actividad, cuyo comportamiento tuvo una tendencia errática proveniente, en casi todos los casos, de las restricciones en el balance de pagos. Frente a estos condicionantes externos, el sector industrial se encontraba limitado en su crecimiento, atento a su dependencia de las importaciones de insumos, bienes de capital y tecnologías y, por otro lado, a su escasa participación en las exportaciones dada su falta de competitividad internacional. En 1958 se sanciona la Ley 14.180 sobre Inversión Extranjera, y la Ley 14.181 sobre Promoción Industrial, que fueron los instrumentos claves de la estrategia desarrollista en materia de política Industrial, dando inicio a la segunda fase de la ISI. En el período 1958-1962, se radican alrededor de dos centenares de firmas extranjeras en el sector manufacturero, especialmente en un selecto grupo de actividades que, merced a la presencia de una fuerte demanda insatisfecha, alcanzaron un rápido ritmo de penetración en la economía nacional. La entrada masiva de empresas transnacionales y su radicación en actividades dinámicas se traduce en un fuerte incremento de la participación extranjera en el producto industrial: crece de una quinta parte en 1955 a cerca de un tercio, en 1974. El sector de capital extranjero se caracteriza porque:

1. En comparación con las firmas competidoras de capital nacional, son mayores sus tamaños de planta, la productividad de su mano de obra, sus coeficientes de importación y su dotación de capital por hombre empleado
2. Su comportamiento tecnológico se basa en la incorporación de tecnologías que, a pesar de no ser de frontera a escala internacional, sin duda son novedosas en el mercado local, así, en muchos casos las radicaciones se acompañan con el gradual establecimiento de planteles locales de ingeniería y de organización y métodos de trabajo destinados a adoptar productos y procesos a las condiciones productivas locales; y
3. Estas empresas se financiaron fundamentalmente a través del ahorro nacional y porque su aporte neto de divisas en el mediano plazo termina siendo negativo debido a que las transferencias al exterior son mayores que los ingresos de capital efectuados.

En esta etapa es claramente la industria automotriz la que lidera el proceso de crecimiento. Esta aporta más del 30% del incremento en el producto bruto interno manufacturero en el intervalo 1958-1965, a una tasa anual de crecimiento del 24%. En una primera etapa, se radican 25 terminales, siete de las cuales permanecen en el mercado cumpliendo el requisito de una elevada integración de producción nacional del 95%. Para ello se articulan con más de mil proveedores locales. Las plantas automotrices que se instalan localmente no sólo son idiosincrásicas por su reducida escala operativa, sino que, además, deben forzosamente “recrear” en el medio local una significativa cantidad de tecnologías de producto, de procesos, y de organización y métodos. Suman, entonces, deseconomías estáticas y dinámicas de escala y de organización industrial que son las que, en última instancia, impiden salir del estrecho círculo del mercado doméstico. Luego de casi treinta años de comportamiento con altibajos, en la década comprendida entre 1964 y 1974, la industria registró un crecimiento continuo y un dinamismo mayor que el resto de las actividades económicas, acompañado por un crecimiento de la ocupación, los salarios y la productividad. Asimismo, este último período se caracterizó por una caída de los precios relativos del sector industrial −asociado a la evolución de la productividad− por el aumento significativo de las exportaciones industriales y por el incremento del tamaño medio de los establecimientos manufactureros. Las industrias metalmecánicas, químicas y petroquímicas fueron las actividades más dinámicas. De esta forma, la profundización del proceso de sustitución de importaciones −con la participación decisiva de tecnologías y firmas extranjeras−, que se inició a fines de la década del cincuenta, produjo un profundo cambio estructural en el sector industrial. La diversificación de actividades, la incorporación de empresas capital-intensivas, el incremento de las exportaciones de manufacturas no tradicionales y la explotación de franjas del mercado interno con demandas atrasadas fueron algunos de los elementos clave que permitieron que el sector industrial fuese el motor del desarrollo de la economía en este último período. Sin embargo, hacia mediados de los años setenta se verifica una desaceleración del crecimiento industrial que conduce a una fuerte polémica sobre el agotamiento del modelo de industrialización seguido. Las limitaciones del balance de pagos y la persistencia de la inflación seguían presentes en la economía nacional, mientras que las actividades industriales continuaban en su esquema protegido. En el período 1973-1975, se intenta dar un nuevo impulso a la actividad industrial, basado en una acelerada modificación de la distribución del ingreso a favor de los sectores asalariados. Esta última experiencia encuentra rápidamente sus limitaciones y finaliza en marzo de 1976, con la asunción del gobierno militar, luego de una profunda crisis económica que, iniciada a mediados de 1975, se tradujo en un desorden en el que se descontrolaron algunas de las más importantes variables económicas.

Los principales rasgos estructurales de las poderosas firmas extranjeras eran el tamaño de las plantas; el grado de diversificación; el nivel de subcontratación y la capacidad tecnológica local dentro de un escenario industrial orientado hacia un reducido mercado interno:

1. En relación con el tamaño, se destaca lo reducido de las plantas locales, que suelen ser por lo menos diez veces menores que las equivalentes a nivel internacional. Ello implica la producción de “series chicas”, con menor automatización y una organización de la producción discontinua; es decir, con excesiva fragmentación en talleres y la existencia de excesivos tiempos muertos. Tal organización produce un impacto negativo sobre la productividad de la mano de obra.
2. Esta situación se agrava por el segundo rasgo estructural señalado: el alto grado de apertura del mix de producción. Con frecuencia, las firmas fabrican gran cantidad de modelos y tamaños de un producto dado, lo que, en un mercado limitado y con escasa inserción internacional, hace que la escala de producción sea aún más reducida.
3. El tercer elemento hace al alto grado de integración vertical con que operan las industrias. La escasa división social del trabajo industrial, en un contexto de muy elevados costos de transacción, que se refleja en la ausencia en el medio local de una red de subcontratistas especializados y en el atraso en términos de normatización y estandarización, condujo a las firmas a un excesivo autoaprovisionamiento de partes e insumos; esto afecta también a las economías de escala y de especialización.
4. Estos rasgos estructurales de las actividades industriales se combinan con las restricciones de balance de pagos que caracterizan el funcionamiento de la economía argentina. La particular posición negativa de las producciones manufactureras en el comercio internacional restringe las posibilidades de su crecimiento sostenido; a ella se suma el grado de ineficiencia provocado por la protección exagerada. Ambos factores determinan los permanentes comportamientos cíclicos del sector industrial.

En el período 1958-1978, la industria manufacturera presenta cinco ciclos de contracción y posterior expansión del producto. Este movimiento de stop-go corresponde a máximos cíclicos y a contracciones asociadas con shocks macroeconómicos producidos por políticas estabilizadoras. Asimismo, en este período se verifican cuatro fases de desaceleración de la producción, es decir, períodos en los cuales no se observa una caída del volumen de producción, pero disminuyen las tasas de crecimiento. Tres de esas fases se registran en el exitoso período intercensal 1963/1974, lo cual denota las limitaciones que traban un crecimiento permanente de las actividades manufactureras. Estos comportamientos cíclicos, con restricciones de balance de pagos y con la persistencia de fuertes ritmos inflacionarios, cuestionan el estilo de desarrollo industrial seguido hasta la década del setenta. La percepción de estos problemas condujo a buscar mecanismos dentro de la propia ISI. Por un lado, la política de incentivos a la exportación de manufacturas buscaba simultáneamente generar las escasas divisas, expandir un mercado interno con signos de agotamiento e impulsar la competitividad global de la industria. Sus resultados no fueron menores: mientras que en 1960 las manufacturas no tradicionales prácticamente no se exportaban, en 1975 representaban una cuarta parte de las exportaciones del país. Por otro lado, se buscaba la profundización de la ISI, en la cual la oferta de algunos insumos básicos (acero, aluminio, papel, petroquímica, etc.) era fuertemente dependiente de la importación. La profundización de la sustitución de importaciones en las industrias de insumos estuvo priorizada en todos los planes de desarrollo elaborados durante el período sustitutivo y, paradojalmente, su impulso mayor fue dado durante la apertura de la economía en 1976-1981, lo que evidenció la desarticulación de las políticas y generó el cambio más importante de la estructura industrial en la década del ochenta.

En relación con la política industrial, se pueden señalar dos subperíodos que tienen su corte hacia fines de 1978:

1. El primero de ellos se caracteriza por la recuperación de la producción de bienes de consumo durable y de capital, asociada a la creciente inversión. En este período de "sinceramiento" de la economía, se comienza con la reducción de los aranceles de importación. A pesar de su fuerte baja −en promedio descienden 40 puntos, del 90 al 50%− en estos tres primeros años no aumentan significativamente las importaciones. Este fenómeno tiene su explicación en los incrementos de competitividad durante la última década, que determinaron la existencia de una fuerte redundancia en las tarifas y, por otra parte, en el mantenimiento de un tipo de cambio elevado. Por otro lado, la sanción, en 1977, de la reforma financiera, libera la tasa de interés y crea un mecanismo totalmente distinto para la asignación de los créditos.
2. El segundo subperíodo se inicia hacia fines de 1978, al instrumentarse la versión de economía abierta de la escuela monetarista (enfoque monetario del balance de pagos). La aplicación de esta política tenía como objetivo igualar la tasa inflacionaria interna con la externa, ajustándose esta última a la tasa de devaluación del tipo de cambio. Éste se determinaba con un cronograma que fijaba un ritmo de devaluación continuamente decreciente en el tiempo, en un contexto de creciente apertura de la economía al exterior (tanto en el mercado de capital como en el de bienes); ello suponía la convergencia de las tasas de interés y de inflación internas con las correspondientes internacionales. En este esquema de política monetaria pasiva, se suponía un período de transición determinado por la distinta velocidad de ajuste en los precios de los productos según se comercien o no en el mercado internacional. Una vez que se lograra la convergencia quedaría establecido un nuevo esquema de precios relativos de la economía. A su vez, en combinación con la política arancelaria, la asignación de recursos favorecería el incremento de la productividad global, desaparecerían los sectores menos eficientes y se desarrollarían las actividades con ventajas comparativas a escala internacional. Sin embargo, la "convergencia" no se logró. En los bienes transables con el exterior el ajuste fue lento e imperfecto; en los bienes no transables, los mecanismos previstos no tuvieron los efectos esperados. La evolución de la tasa de interés interna fue altamente afectada por una sobretasa creciente motivada por la incertidumbre y los elevados costos de la intermediación financiera. Por su parte, el tipo de cambio, que estaba prefijado con una previsión inflacionaria menor a la real, se caracterizaba por una permanente subvaluación de las divisas. Esta sobre valoración del peso en conjunción con las rebajas arancelarias afectó fuertemente la balanza comercial y permitió la entrada masiva de productos importados. A su vez, la entrada de capitales externos, en su casi totalidad de corto plazo y provenientes de un mercado financiero de alta liquidez y elevadas tasas de interés, compensaba el déficit de la cuenta corriente, con un incremento significativo del endeudamiento con el exterior. Estos movimientos −que afectaban seriamente el balance de pagos− preanunciaban una devaluación del tipo de cambio, en un mercado de capitales de alta liquidez, atento al muy corto plazo de colocación de los depósitos. En adición, la política fiscal no fue lo suficientemente prolija y continuaron importantes transferencias de ingresos de difícil justificación y ausentes de evaluación. A ello se sumaba un clima de cambio de autoridades políticas y económicas. En consecuencia, las primas de riesgo por la colocación de capitales externos se elevaron considerablemente, con el consiguiente aumento de las tasas de interés. En este contexto, el sector industrial sufrió la crisis más profunda de su historia por la conjunción de varios factores negativos. Entre ellos sobresale la contracción de los mercados, por los bajos niveles de demanda de productos industriales locales, tanto interna por la competencia de productos importados, como externa por el fuerte atraso del tipo de cambio. A su vez, las altas tasas de interés que superaban largamente toda posibilidad de rentabilidad productiva y su constante crecimiento llevaron a las empresas a niveles de endeudamiento que, en muchos casos, solían superar el valor de sus activos.

Con el cambio de autoridades dentro del régimen militar, en marzo de 1981, se inicia un proceso caracterizado por la adopción de medidas de corto plazo tendientes a solucionar los problemas más urgentes de los sectores productivos. No obstante, también en este período continúa el estancamiento del sector industrial, en un contexto de permanentes devaluaciones de la moneda y persistencia de tasas de interés reales positivas. La revalorización del tipo de cambio y las restricciones a las importaciones resultantes del abultado endeudamiento externo −cuyos pagos de intereses superaban toda previsión optimista del saldo de la balanza comercial− generaron nuevamente condiciones de protección al sector industrial. El coeficiente de importaciones de la economía argentina volvió a niveles próximos a los anteriores a la política de apertura.

Durante medio siglo, el país vivió fuera del sistema de tipo de cambio único (porque se fijaban diferentes valores para distintos bienes, acompañados por una variada gama de retenciones y aranceles) y con control de divisas; ciertos mecanismos menores se modificaban, pero lo esencial consiste en que la escasez de divisas aparecía como un fenómeno estructural que obligaba a regular su uso. En ese período, la economía cerrada era una consecuencia de la evolución externa y no de las decisiones locales. Luego de la crisis y la guerra, la situación de la economía mundial tendió a normalizarse, aunque en condiciones muy distintas a las conocidas durante la década de 1920. Los precios internacionales de los bienes agropecuarios se establecieron, desde entonces, en niveles mucho más bajos en valores constantes; la demanda quedó acotada por el deseo de las naciones desarrolladas de autoabastecerse, y la oferta de crédito era casi inexistente. En esas condiciones, la Argentina sólo podía abastecerse de los bienes que necesitaba (y que no podía producir localmente) aumentando su oferta exportadora para generar las divisas necesarias. Pero los problemas persistían; la producción agropecuaria no respondía en la magnitud esperada y la restricción externa siguió actuando varias décadas más como una variable clave de la economía nacional. El crecimiento económico, acompañado por las mejoras salariales y de ingreso de amplios sectores urbanos, demandaba la importación de bienes terminados que el país no producía, además de bienes de capital para expandir el proceso productivo, insumos para las fábricas ya instaladas y combustibles. Pero la evolución de las exportaciones no acompañaba esa demanda, de modo que el proceso alcanzaba un punto de estrangulamiento externo que llevaba a una crisis: el famoso stop and go. Cuando ese sendero de crecimiento económico llevaba a que la demanda de divisas excediera la oferta, el sistema encontraba su límite. Para resolver esa restricción externa, los sucesivos gobiernos decidían devaluar la moneda que reducía la demanda de bienes importados y alentaba la oferta agraria; esa medida desplazaba ingresos del sector urbano al rural, mientras que alimentaba la inflación local. La experiencia señala que no se lograba resolver definitivamente la restricción externa porque la producción agropecuaria no crecía en las proporciones deseadas y el ciclo volvía a repetirse una vez que se ajustaba el sector externo. En el ínterin, ante el rebrote inflacionario, la respuesta oficial era una política de restricción monetaria, que reducía los medios de pago e inducía al alza de la tasa de interés. La iliquidez reinante, la suba de las tasas, el incremento de los costos industriales por el aumento de precio de sus insumos importados y la caída del salario real, provocaban una retracción de la demanda que derivaba en una recesión. El sistema quedaba dominado por un proceso de inflación recesiva, desencadenada por la devaluación. El sector externo encontraba, de esta manera, una forma perversa de equilibrarse, dado que la contracción del nivel de actividad reducía las importaciones e incrementaba (ligeramente) los saldos exportables a costa de los ingresos (y la demanda de alimentos) de la mayoría de la población. Una vez que la economía se ubicaba en la etapa recesiva, se redoblaban las presiones que pondrán el ciclo nuevamente en marcha. Los trabajadores y los empresarios industriales pujaban por reconquistar sus ingresos y reclamaban subas salariales y de precios de los bienes fabriles que compensaran el incremento del costo de vida; pedían, además, que se relajara la restricción monetaria. A medida que se recuperaba la actividad y el salario real, el tipo de cambio volvía a atrasarse con el avance de la inflación y se generaban las condiciones para una nueva restricción externa que volvía a poner un tope a la fase alcista. La falta de respuestas positivas del agro a los aumentos de precios se debía, entre otras razones, al atraso tecnológico del sistema productivo que era muy difícil de solucionar en el corto plazo. La importación de maquinaria agrícola no podía aumentar en la proporción deseable por la escasez de divisas (y la escasa producción local) mientras que se notaba la ausencia de prácticas modernas que permitieran aprovechar la tierra. A fines de la década de 1960, sin embargo, comenzó a notarse una mejora en la oferta a medida que el INTA (creado recién en 1956) logró desarrollar y difundir “paquetes tecnológicos” aptos para la región pampeana. La producción local de maquinaria agrícola fue la otra “pata” de la recuperación del sistema productivo agrario que contribuyó a su mecanización.

A mediados de la década de 1970, esa creciente oferta potencial fue impulsada, del lado de la demanda, por la primera gran alza de los precios agrarios ocurrida después de la guerra de Corea. Luego de casi medio siglo, la reacción productiva y el alza de los precios estaban logrando que el país comenzara a superar la restricción externa.

Una segunda solución posible consistía en la exportación de bienes fabriles, aunque había numerosas restricciones internas y externas para esa salida. Aun así, desde mediados de la década de 1960 se comenzó a notar una corriente alcista de exportación de productos industriales que contribuía a generar las divisas necesarias para el país. Ese flujo alcanzó su máximo a mediados de la década de 1970, impulsada por intensas políticas oficiales al respecto, y retrocedió brutalmente, luego, debido a las nuevas estrategias aplicadas a partir de 1976 que, irónicamente, se denominaban de “apertura externa”.

La tercera solución posible radicaba en el recurso al crédito externo que se mantuvo muy restringido durante décadas y limitado a la oferta de algunos organismos públicos de las naciones desarrolladas y a los internacionales, como el FMI, que imponían pesadas exigencias para otorgar sumas reducidas para las necesidades locales. Más tarde, el aumento explosivo de la oferta de esos créditos por los grandes bancos privados, a mediados de la década de 1970, coincidió con el cambio de modelo en el país. En definitiva, a mediados de la década de 1970 la economía cerrada se estaba abriendo al exterior, vía exportaciones agrarias y fabriles crecientes que ofrecían la posibilidad de pasar de la ISI a una industrialización apoyada en las ventas al exterior mientras se superaba la restricción externa. Pero la estrategia aplicada luego del golpe militar de 1976 modificó esa evolución.

La economía abierta con endeudamiento externo:

El aumento de los precios internacionales del petróleo y las materias primas, a mediados de la década de 1970, coincidió con (y contribuyó a) una enorme expansión del mercado del eurodólar que implicó la multiplicación del crédito en divisas por parte de los grandes bancos internacionales. La oferta masiva de esos créditos dio lugar, por primera vez en medio siglo, a que la mayoría de las naciones subdesarrolladas pudiera superar, aunque de modo coyuntural, la restricción externa.

La Argentina ya no tenía la misma necesidad, ni urgencia, de crédito externo, pero la política oficial optó por esa alternativa con elevado énfasis a partir de 1978.  El gobierno lanzó una estrategia de tipo de cambio con atraso programado, conocida como la “tablita”, que sus autores decían que estaba diseñada para contener la inflación pero que, en los hechos, implicó una continua caída de las exportaciones (cada vez menos rentables por esa evolución del tipo de cambio), una rápida suba de las importaciones (estimuladas por la baja de sus precios en moneda local) y el recurso al endeudamiento para cubrir el déficit comercial y de servicios así como las demandas de los agentes locales que querían comprar dólares “baratos” como mecanismo de ahorro y especulación. El sistema funcionó un par de años hasta que se cortó el crédito externo. La crisis se hizo pública en marzo de 1981, con el cambio de gobierno, mientras que los compromisos derivados de la masiva deuda externa, acompañados por el déficit comercial, planteaban una coyuntura insostenible. La crisis derivada de esa situación obligó a una devaluación masiva, provocó una recesión tan profunda como prolongada y obligó a modificaciones apreciables en las formas de funcionamiento de la economía argentina. El país tardó en superar esa crisis, mientras estaba envuelto en una oleada de alta inflación y presionado por el pago de los compromisos de la deuda. Todo eso llevó a una nueva crisis a fines de la década que coincidió con un cambio de gobierno y una nueva aplicación de la estrategia de tipo de cambio atrasado con endeudamiento externo. El Plan de Convertibilidad, aplicado en 1991, atrasó el tipo de cambio, como herramienta para frenar la inflación, mientras que el gobierno recurría al crédito externo para cubrir el déficit comercial y de servicios. La crisis del tequila, en 1994-95, fue una señal de la intensa dependencia de los flujos de divisas que repercutió en otra crisis más fuerte a partir de 1999, cuando los acreedores externos comenzaron a percibir que el país no podría pagar, no sólo la creciente deuda externa, sino tampoco los intereses que ella devengaba. Esa crisis fue tan intensa que derrumbó al modelo de la convertibilidad y abrió la puerta a un nuevo cambio de política económica.

Las crisis financieras no fueron exclusivas de la Argentina; ocurrieron en casi toda América Latina, donde hubo dos grandes ciclos de endeudamiento: el primero en la década de 1970, que culminó con la crisis de la deuda de los años 1980, y el siguiente en la década de 1990 que, de forma similar, concluyó en las crisis mexicana, brasilera y argentina. También sufrieron ciclos de auge y depresión los países asiáticos, aunque provenían de situaciones radicalmente distintas y tuvieron disímiles desenlaces. Una revisión de la literatura sobre estas crisis permite ver que el caso argentino sólo se diferencia en detalles de los modelos estilizados, elaborados por la teoría de los flujos financieros, que se resume a continuación. La teoría económica standard justifica la entrada de capitales de diversas formas a los que considera siempre beneficiosos para el país receptor. Los capitales, buscando las inversiones de mayor rendimiento según esa teoría, irían hacia los países más pobres, ayudándolos a aumentar su inversión y su producto. Ante la escasez de capital que estos países sufren, el ahorro externo es lo que les permite incrementar su tasa de inversión y crecer a mayor velocidad. La devolución de los préstamos no sería problemática, dado que se conseguiría utilizando tan sólo una pequeña porción de los beneficios del crecimiento que genera la aplicación productiva de esos recursos. En la práctica, estos argumentos no se verificaron en los países que se abocaron a la liberalización. Diferentes estudios (como el que derivó en el famoso “puzzle de Feldstein-Horioka”) muestran que la tasas de ahorro y de inversión están fuertemente co-relacionadas, por lo que la inversión es financiada por el ahorro local y el crecimiento parece seguir dependiendo más de la capacidad de acumulación de cada país que de los ingresos que reciba del exterior. En la práctica, las crisis financieras explotaron en países que combinaron la apertura comercial con la liberalización de los flujos de divisas y la apertura de la cuenta de capital. Esos países aplicaron tipos de cambio fijos o semi-fijos, generalmente en programas que tenían como objetivo combatir la inflación. A pesar de que, en algunos casos, se logró realmente contener el alza de los precios, el mismo paquete de medidas genera una serie de dinámicas que derivan finalmente en una nueva crisis.

El tipo de cambio fijo (que en el caso argentino fue establecido por ley) provee un seguro de cambio gratuito que elimina, por lo menos en teoría, el riesgo de una devaluación. En ese contexto, la diferencia entre la tasa de interés local y la internacional provee una oportunidad de obtener grandes ganancias a quienes colocan sus dólares en plazos cortos. La posibilidad de endeudarse a tasas bajas en el exterior y conseguir rendimientos mayores en el sistema financiero local se ve reforzado por la promesa del gobierno de mantener el valor en divisas de los pesos ganados en el período. Dada la elevada liquidez internacional, los capitales son atraídos por los rendimientos que el país ofrece. La entrada de capitales inaugura la fase ascendente del ciclo, pero ésta ocurre con un tipo de cambio sobrevaluado. El anclaje del tipo de cambio logró en muchos casos reducir la inflación, pero suele hacerlo con cierto rezago, y la suba de precios, que continúa, genera una apreciación adicional de la moneda local, responsable en gran medida de la dinámica posterior de la economía. En la primera fase, que se caracteriza por la caída de la tasa de interés, la actividad crece mientras la inflación disminuye, variables que contribuyen a la ilusión generalizada sobre el supuesto éxito del modelo. La abundancia de financiamiento barato se combina con la recuperación relativa del salario real (permitida en buena medida por la disminución de la inflación) y en conjunto dinamizan, tanto el consumo, como la inversión. Dada la apertura comercial y el tipo de cambio apreciado, la demanda interna impulsa la producción local, pero especialmente el ingreso masivo de productos importados. La avalancha de importaciones, sumada a la pérdida de competitividad de las exportaciones, genera un déficit de la balanza comercial que se amplía a medida que dura la fase alcista del ciclo. La deuda externa, mientras tanto, recorre un sendero de crecimiento veloz; a medida que crece, los pagos de intereses se incrementan, poniendo una carga adicional sobre la cuenta corriente, que se vuelve rápidamente deficitaria. El déficit de cuenta corriente y el aumento de la deuda externa hacen que la economía se vuelva más vulnerable a un cambio de orientación del flujo de divisas. Cada año, el país requiere nueva deuda para solventar su déficit de cuenta corriente y refinanciar los vencimientos de capital e intereses de la deuda acumulada que no tiene forma de afrontar. La vigencia de la regla cambiaria y la posibilidad de pagar la deuda externa depende entonces de la capacidad del gobierno de seguir atrayendo una masa cada vez mayor de divisas al país. Pero mientras mayores son las necesidades del gobierno, es decir, cuanto más se hayan expandido el déficit de cuenta corriente y la deuda externa, mayor es el riesgo de no lograr conseguir los cuantiosos recursos necesarios y, por lo tanto, mayor es el riesgo del colapso. La percepción de la vulnerabilidad de la economía comienza entonces a verse reflejada en la pérdida de credibilidad de la regla cambiaria y en el incremento de las posibilidades de que el país caiga en una cesación de pagos. El alza del riesgo país y del riesgo de devaluación obligan a ofrecer cada vez mayores rendimientos para que los capitales sigan fluyendo y se ensancha así la diferencia entre la tasa de interés local y la internacional. En la economía local, la ausencia de crédito externo origina la primera etapa de la fase contractiva del ciclo. Ella provoca un alza de la tasa de interés, que genera el encarecimiento del crédito para el consumo y la inversión. Esos cambios se combinan con la baja de competitividad de las exportaciones y la restricción monetaria que opera una vez que comienzan a caer las reservas. La contracción de la economía se agrava mientras siguen cayendo las reservas y sube la tasa de interés a medida que se profundiza la idea de que la caída es inevitable. La crisis puede acelerarse por factores exógenos: suba de la tasa de interés internacional, retracción de los flujos de capital (como ocurrió con la crisis del tequila) o suba del riesgo país debido a las dudas de los inversores o por “contagio” ante la caída de un país vecino. Cualquiera de ellos puede situar al país en una posición aún más vulnerable. Un déficit de cuenta corriente que aparentemente podía ser financiado, o un nivel de deuda externa que parecía controlable, pueden tornarse explosivo ante un shock externo de magnitud. Sin embargo, la dinámica explosiva de los ciclos de endeudamiento descriptos no depende de la posibilidad de encontrar situaciones como éstas. Son las mismas características intrínsecas del proceso de crecimiento sostenido por el endeudamiento las que engendran la fase recesiva con la que culmina el ciclo, más allá de que ésta pueda agravarse o aliviarse por cambios en el contexto internacional. En definitiva, la duración del ciclo depende de la capacidad nacional de conseguir suficiente cantidad de divisas para financiar el creciente déficit de la cuenta corriente. Dado el déficit comercial y de servicios, éstas entran al país mediante la colocación de deuda externa (tanto privada como pública) en los grandes bancos internacionales o en los organismos multilaterales de crédito y con la venta de empresas públicas o privadas. De esta forma, el excedente de absorción interna (consumo más inversión) por sobre el producto se financia endeudando el país y/o vendiendo el patrimonio nacional. El período de expansión puede extenderse en el tiempo mientras se cumple alguna de las siguientes variables: suficiente apetito por prestar al país por parte de los bancos privados, voluntad del FMI, el BID (banco interamericano de desarrollo) y el Banco Mundial de hacer lo mismo, empresas locales disponibles para ser vendidas. Pero estas políticas generan, a su vez, una pesada carga que determina en gran medida el tamaño del ajuste posterior. La deuda externa impone crecientes pagos de intereses mientras que la extranjerización de la propiedad acrecienta las remesas de utilidades. Es así como la extensión de la etapa de crecimiento de la economía se hace a costa de un déficit cada vez mayor de la cuenta corriente. En el ajuste de las crisis del stop and go, la imposibilidad de financiar los déficits comerciales llevaba rápidamente a la caída del nivel de actividad, la cual producía una contracción de las importaciones hasta que se conseguía el equilibrio de la balanza comercial. En las crisis financieras modernas, la expansión puede continuar a pesar del desequilibrio externo, pero, al momento de la crisis, el ajuste debe ser tal que permita no sólo equilibrar la balanza comercial, sino que debe provocar un superávit comercial de magnitud tal que permita solventar además los pagos de intereses y utilidades comprometidos en el período de auge. Mientras más grande sea el déficit de cuenta corriente, más se haya endeudado el país y más extranjerizada se encuentre su propiedad, mayor es el ajuste recesivo que la restricción externa impone.

En conclusión, las promesas que auguraban que los ciclos del stop and go serían superados mediante la apertura y la entrada de capitales no se cumplieron; la experiencia argentina muestra que el resultado fue tan sólo una prolongación de las fases alcistas al costo de desembocar en crisis de mayor magnitud. En otras palabras, se reemplazó el stop and go por el mucho más penoso go and crush.

El inicio de la década de los noventa se produce en simultáneo con una etapa de cambios políticos y económicos significativos, tanto a nivel nacional como en el contexto regional e internacional. Los impulsos provenientes de factores externos desempeñaron un papel protagónico, en particular, el aumento notable de la oferta de crédito internacional para los países denominados emergentes y los mayores precios para los productos de exportación. Sin embargo, la década se caracteriza principalmente por las reformas de política doméstica encaradas. A lo largo de los años noventa, Argentina implementó una serie de profundas reformas económicas que tuvieron como ejes la estabilización de precios, la privatización o concesión de activos públicos, la apertura comercial para amplios sectores de la economía local, la liberalización de buena parte de la producción de bienes y la provisión de servicios y la renegociación de los pasivos externos.

La política monetaria fue uno de los ámbitos objeto de grandes cambios. En 1991, mediante la sanción de una ley, se estableció un esquema de convertibilidad con tipo de cambio fijo entre la moneda local y el dólar estadounidense (a razón de 1 peso por dólar). Se reformó también la Carta Orgánica del Banco Central para adecuarla al nuevo esquema, limitando a la entidad en el financiamiento al Gobierno y en el otorgamiento de redescuentos. Asimismo, en 1992, el Gobierno nacional alcanzó un acuerdo con los acreedores externos por el cual se reemplazaba la deuda de capital e intereses atrasados con los bancos por bonos públicos de largo plazo con garantía, en el marco del denominado Plan Brady. Luego del inicio del programa económico, caracterizado por el cambio de precios relativos a favor de los sectores no transables, la tasa de inflación fue disminuyendo gradualmente, impactando en la ampliación del horizonte de las decisiones, que conllevó un cambio de primer orden para la formación de capital. La estabilización de precios estuvo acompañada por un aumento apreciable del volumen de crédito, denominado tanto en dólares como en pesos convertibles. Pronto se pudo notar que el funcionamiento del mercado de crédito, y de un modo más general el conjunto de las relaciones contractuales, se basaban en gran medida sobre expectativas respecto a la continuidad del régimen cambiario. De ese modo, este comportamiento de los agentes económicos determinaba un aumento de los costos percibidos y efectivos de salida del régimen de convertibilidad. La política de comercio exterior en los años noventa tuvo en la apertura comercial y la integración regional a dos de sus pilares. La reducción de aranceles y barreras no arancelarias a las importaciones, y la eliminación de impuestos a las exportaciones, modificaron los incentivos a la producción y a la demanda de bienes. El proceso de integración regional en el Mercosur se intensificó en la década y, junto con la apertura comercial, condujo a un aumento notable de los flujos de comercio entre los países miembros. Las políticas comerciales y la actitud hacia el proceso de integración se vieron severamente afectadas por los problemas de competitividad de los bienes transables internacionalmente, particularmente a partir de la devaluación brasileña a comienzos de 1999. El desempeño macroeconómico de inicios de los noventa se caracterizó por un aumento notable de la demanda interna, impulsada por el crecimiento de la oferta de crédito local e internacional. El origen de este comportamiento se vincula con las expectativas positivas de ingresos futuros derivadas del cambio del régimen económico que impulsan aumentos en el consumo y generan nuevas oportunidades de inversión. El aumento de la demanda agregada fue difundido en los distintos sectores de la economía, aun cuando hay que notar que el elevado ascenso del producto manufacturero fue inferior al del producto total. El escaso impacto de la expansión de la producción sobre la ocupación, derivado de los efectos negativos de la reestructuración productiva, contribuyó a elevar el desempleo. El abrupto aumento en las importaciones de bienes, sumado a exportaciones que no respondían del mismo modo, generaron saldos comerciales negativos de magnitud considerable. Asimismo, el déficit en la cuenta corriente del balance de pagos comenzaba a suscitar algunas dudas respecto a la sustentabilidad del esquema macroeconómico; aunque eran cubiertos, y en exceso, por los ingresos de inversión extranjera y las operaciones de crédito internacional. En este contexto, los incrementos de la tasa de interés internacional y la devaluación mexicana provocaron una crisis financiera en 1995. Este shock derivado de la retracción en la oferta de crédito tuvo un impacto inmediato sobre el nivel de actividad y el desempleo, y afectó severamente al sistema financiero. Es probable que la rápida superación de la crisis, sustentada en mejoras en los precios internacionales, en el crecimiento de la demanda brasileña posterior al lanzamiento del Plan Real y en reformas regulatorias en el sistema financiero, haya contribuido a reafirmar las percepciones positivas sobre el crecimiento de los ingresos y la solidez de un esquema macroeconómico que ahora incrementaba las exportaciones, el ahorro y el empleo. Desde 1998, la economía argentina estuvo afectada por varios shocks negativos en forma simultánea. Los efectos de la crisis rusa sobre el acceso al financiamiento y las tasas de interés en los países emergentes, la posterior devaluación y modificación del régimen cambiario en el principal socio comercial, la abrupta caída en los precios de los productos que exporta el país, la persistente fortaleza del dólar respecto a otras monedas del mundo y el continuo desplazamiento del sector privado de los mercados de financiamiento interno por parte del sector público, constituyen los ejemplos más destacados de lo ocurrido.

Las distintas acciones de las firmas determinaron resultados contrapuestos que se pueden estilizar en dos grandes grupos de conductas empresariales. Por un lado, aparecen las denominadas “reestructuraciones ofensivas” que se caracterizan por haber alcanzado niveles de eficiencia comparables con las mejores prácticas internacionales y que abarcan a un grupo reducido de alrededor de 400 empresas. Aunque se pueden encontrar casos en casi todo el entramado productivo, predominan particularmente en las actividades vinculadas a la extracción y procesamiento de recursos naturales, las ramas productoras de insumos básicos y en parte del complejo automotriz. Por otro lado, el resto del tejido productivo, cerca de 25 mil firmas si no se consideran las microempresas, se caracterizó por llevar a cabo los denominados “comportamientos defensivos” que a pesar de los avances en términos de productividad con respecto al propio pasado están alejados de la frontera técnica internacional y mantienen vigentes ciertos rasgos de la etapa sustitutiva, tales como una escala de producción reducida o escasas economías de especialización. Se puede afirmar que el proceso de estabilización económica encarado en los noventa aumentó la capacidad de prever la evolución de las principales variables macroeconómicas de modo notable e implicó una ventaja incomparable para la organización de las actividades productivas. Sin embargo, surgió un nuevo tipo de incertidumbre, que puede denominarse estratégica, y que se corresponde con la modificación del entorno competitivo de las firmas y con las nuevas reglas de juego que determinan qué van a producir las empresas y cómo lo van a hacer. Decisiones sobre inversión en activos específicos, incorporación o reemplazo de líneas de producción, calificación de recursos humanos en la firma o el sendero para seguir de aprendizaje tecnológico adquieren una dimensión inasible y de difícil evaluación con los esquemas predominantes en una economía semicerrada. Uno de los aspectos centrales de las transformaciones estructurales fue la reconfiguración del perfil empresario respecto al vigente durante el proceso sustitutivo. Un panorama general indicaría que, a la retirada de las empresas estatales, y cierta involución de las pequeñas y medianas empresas, se suma la reorganización y ventas de varios de los conglomerados económicos locales y el liderazgo y sostenido dinamismo de las empresas transnacionales. Dentro del universo de empresas productivas hay que destacar, en primer lugar, el comportamiento de las empresas transnacionales, cuyas estrategias principales están asociadas a los flujos de inversión extranjera directa que ingresaron durante los años noventa. Según estimaciones oficiales entre 1990 y 2000 ingresaron 78 mil millones de dólares de IED, por lo cual el acervo de capital extranjero creció a tasas anuales superiores a 20% y superó los 80 mil millones en el año 2000. Aún en el marco de estrategias

destinadas en buena medida al aprovechamiento del mercado doméstico o subregional, las filiales realizaron inversiones tendientes a utilizar más eficientemente sus recursos físicos y humanos y, mucho más selectivamente, a integrarse de un modo más activo en la estructura internacional de la corporación. Es posible identificar dos etapas en el comportamiento de los flujos de IED hacia la Argentina. Entre 1990 y 1993, más de la mitad de los ingresos de inversión extranjera corresponden a operaciones de privatización y concesión de activos públicos. Con posterioridad, las fusiones y adquisiciones de empresas privadas adquieren el rol central en el crecimiento de las inversiones extranjeras en el país (al menos el 56% de los flujos totales entre 1992 y 2000 se destinaron a la compra de activos existentes, tanto estatales como privados por un monto de más de 55 mil millones de dólares). La ventaja decisiva de las filiales de transnacionales sobre las empresas locales residió en el control de los aspectos tecnológicos, en las habilidades ya acumuladas para operar en economías abiertas y en la capacidad de financiar la reconversión. Sin embargo, el aporte de las firmas de capital extranjero a la generación de encadenamientos productivos, a la difusión de externalidades y a una inserción activa en redes dinámicas de comercio internacional siguió siendo débil. Existe un cierto consenso en que los rasgos predominantes de las PyMEs argentinas durante la ISI eran la centralización de la gestión en la figura del dueño, la inserción externa poco significativa, el predominio de estrategias defensivas, el amplio mix de producción, la escasa especialización productiva, la reducida cooperación con otras firmas, la escasa relevancia de las actividades de innovación y el reducido nivel de inversión. Estas características, que en gran medida persistieron en el transcurso de los noventa, condicionaron las respuestas que pudieron implementar frente a las reformas estructurales. La creciente tendencia a la adopción de tecnologías de producto de origen externo con niveles cercanos a las mejores prácticas internacionales fue en desmedro de la generación de esfuerzos adaptativos locales. Esto implicaba una brecha menor en términos de tecnologías de producto, pero una pérdida significativa en la adquisición de capacidades domésticas mediante actividades de investigación y desarrollo. Sin embargo, la fuerte incorporación de máquinas y equipos importados necesariamente estuvo acompañada de cambios organizacionales y de mayores inversiones en capacitación. Asimismo, la tendencia hacia la desverticalización de la producción se afianzó fundamentalmente a través de la incorporación de partes y piezas importadas, reduciendo la probabilidad de conformar redes de producción basadas en la subcontratación local. En resumen, los principales elementos que caracterizan al desempeño de la microeconomía en los años noventa son la disminución del número de establecimientos productivos, el aumento del grado de apertura comercial (con énfasis por el lado de las importaciones), un proceso de inversiones basado la adquisición de equipos importados, el aumento de la concentración y la extranjerización de la economía y la caída abrupta del coeficiente de valor agregado. Asimismo, hubo una mayor adopción de tecnologías de producto de nivel de “frontera tecnológica” y de origen externo, un abandono de la mayor parte de los esfuerzos tecnológicos locales en la generación de nuevos productos y procesos, una desverticalización de las actividades basada en la sustitución de valor agregado local por abastecimiento externo, una reducción en el mix de producción junto con una mayor complementación con la oferta externa, una creciente externalización de actividades del sector servicios, una mayor internacionalización de las firmas y la importancia de los acuerdos regionales de comercio en las estrategias empresariales. Pero quizás el rasgo más saliente de la conformación productiva en los años noventa sea la heterogeneidad. Entre 1998-2001, el retorno a la extrema volatilidad del entorno condujo a que las decisiones de producción e inversión se vieran gravemente afectadas y a dudas crecientes respecto a la solvencia de un grupo numeroso de empresas. Los problemas de la economía argentina generaban notables perturbaciones financieras y comerciales. Las consecuencias negativas en el plano empresarial se habían desplegado y no surgía con claridad cuáles serán las respuestas dominantes de los agentes económicos ante el regreso de una elevada incertidumbre macroeconómica.

A fines de la década de los noventa, el inicio de un largo período dominado por la recesión y la deflación de precios generó tensiones crecientes y modificó las expectativas respecto al potencial de crecimiento de la economía y la solvencia del sector público. En ese contexto, la crisis por la que atravesaba la Argentina terminó expresándose en un progresivo aumento en los índices de desempleo, pobreza e indigencia y un moderado proceso de deflación de precios y salarios. La existencia de una profunda crisis política, la agudización de la conflictividad social y la casi nula credibilidad en las sucesivas políticas económicas que se ensayaron en vísperas del derrumbe final del régimen agravaron el panorama. En esas condiciones se produjo un brusco y acelerado descenso de los depósitos bancarios –acompañado de un proceso paralelo de salida de capitales− que llevó a imponer restricciones a los fondos del sistema financiero y controles de pagos al exterior. Las autoridades que se sucedieron declararon el cese parcial de pagos de la deuda pública y el abandono del régimen de convertibilidad de la moneda y la paridad cambiaria vigente desde 1991. Las consecuencias inmediatas fueron un fuerte aumento de precios y la ruptura del sistema de contratos. En materia cambiaria, luego de sostener durante un breve período la fijación de un tipo oficial, se pasó a un régimen de flotación con intervención de la autoridad monetaria. La pesificación parcial de las deudas bancarias y financieras locales nominadas en moneda extranjera redujo el valor real de los pasivos. En el marco de una intensa salida de capitales, el tipo de cambio real alcanzó niveles comparables a los de la salida del brote hiperinflacionario de 1990. El saldo comercial fue extraordinariamente elevado, debido a la abrupta caída de las importaciones, lo que generó un apreciable superávit en cuenta corriente. Pese a la intensidad de las perturbaciones, el peso se mantuvo como denominador de precios y medio de cambio. Aunque los precios internos crecieron considerablemente, no se observó la reaparición de comportamientos adaptados a un contexto de inflación persistente. El proceso asociado con el abandono del sistema de convertibilidad estuvo marcado por una gran turbulencia no sólo económica, sino también social y política. Los costos de salida de un régimen sin “mecanismos de escape” y que no resultó sostenible, fueron efectivamente muy altos. Sin embargo, también fue intensa la recuperación que siguió a la crisis. El desempeño económico argentino luego de la convertibilidad estuvo caracterizado por un sorprendente desempeño positivo.